

24ª REUNION — Continuación de la 10ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 5 DE 1974

**Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca, Antonio Pereira
y Luis Antonio García**

Secretario: señor Ludovico Lavia

Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis
ACUÑA, Hipólito
AGUIRRE, Mario D.
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
AMAOLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARCE Rodolfo Juvenio
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRÚE, Willebrordo
ASMAR, Ramón
AUERO, Carlos Alberto C.
AVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl I.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BÉHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BLANCO, Manuel
BRAVO, Carlos Alberto
BRITO LIMA, Alberto
BUSACCA, Salvador F.
CABANA, Manuel I.
CAEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAMUS, Jorge M.
CAPILLO, José
CARDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto
CARRERAS, Ruperto R.
CASAZZA, Luis Angel
CASTELLANO, Hugo Luis
CATALANO, José Armando
CATEULA, Juan Jaime
CITATI, Angel
COLELLO, Clemente J.
COMINGUEZ, Juan Carlos
COSSY ISASI, Edgar
COSTARELLI, José
D'ANGELO, Lorenzo Francisco
D'AVICO, Miguel Angel

DAV, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José Manuel
DE LUCA, Ricardo
DESTERBASQUES, Rodolfo Eduardo
EGUIREUN, Enrique
ESPICHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALLU, Ricardo Munir
FARIAS, Eduardo Isidro
FERNANDEZ, Dante Dionisio
FERNANDEZ, Juan Máximo
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano
FERNANDEZ VALONI, José Luis
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FUENTES, Pedro Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCÍA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRÉ, Nilda Celia
GASS, Adolfo
GIL, Matilde Vedia de
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto
GOLFÉ, Tomás Juan B.
GONZALEZ, Ricardo A.
GRAU, Mario Agustín
GUALICO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
GUZMAN, María Cristina
HAIRK, José
HUEVO, Horacio
HUGHES, Gilbert
IMBAUD, Carlos Alfredo
INSUA, Carlos Raúl
KELLY, Rodolfo Feliciano
LASTIRI, Raúl Alberto
LATRUBESSE, Francisco Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LÉPEZ, Lysis Augusto
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, María Haydée A. de
LONGCHARICH FRANCH, Cándido A.
LÓPEZ, Domingo
LÓPEZ, Horacio Fidel
LÓPEZ, Miguel Angel

LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LUMELLO, José Erio
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MALDONADO, Clemente
MARINO, Rafael Francisco
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTOS, Mario Saúl
MASSOLO, Eduardo A. R.
MASTOLORENZO, Vicente
MAUHUM, Fernando Hugo
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIGUEL, Pedro Honorio
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA, Manuel Isaurio
MOLINA ZAVALIA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MOMBELLI, Fausto J.
MONACO, Horacio Miguel
MONSALVE, Evaristo A.
MONTENEGRO, Bernardo H.
MONTERO TELLO, Régulo L.
MORAL, Angel
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER, José Carlos W.
MORINI, María Teresa Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUSACCHIO, Vicente Miguel
MUSSO, Eufemia
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
ODENA, Isidro J.
OVIEDO, José
PALACIO DEHEZA, Carlos
PARENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PATALAGOITIA, Osvaldo E.
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando
PEREIRA, Antonio
PETRUCCELLI, Agustín
PONCE, Rodolfo Antonio
PORTERO, Héctor
PORTO, Jesús E.
PUENTE de BONETTO, María Enriqueta
RABANAL, Rubén Francisco
RACCHINI, Juan Nicolás
RAMÍREZ, Juan Manuel
RATTI, Luis Carlos

RITVO, Miguel
 RIZO, Eusebio Víctor
 RODRÍGUEZ, Alfredo S.
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina
 ROJAS, Ramón Pablo
 ROLANDO, Esteban Domingo
 ROMAN, Irene Graciela
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Juana N.
 ROSAS, Alberto Horacio
 ROTA, Silvana María I.
 RUBEO, Luis
 SALIM, Luis
 SALOMÓN, Jorge
 SALVADOR, Nicolás
 SALVATIERRA, Julio Domingo
 SAMBUEZA, Osvaldo
 SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo
 SANGUINETI, Virginia Luisa
 SARBOLI, Rubén Juan
 SARLI, Osvaldo Raúl
 SAÚL, Roberto
 SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
 SILEONI, Nelo I.
 SILVA, Analicio
 SLAMOVITS, Ludovico
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOLANA, Jorge D.
 STECCO, Alberto Eleodoro

SUÁREZ, Humberto F.
 SUÁREZ, Leopoldo M.
 SULETA DE ARRAYA, Arminda
 TACHELLA, Eliberto S. J.
 TAGLIAFERRO, Jorge
 TOLLER, Roberto Lino
 TRABOULSI, Eduardo Elías
 TRÓCCOLI, Antonio A.
 TULA DURAN, Joaquín
 URDINEZ, Clotilde Isolina
 VACCAREZZA, Eduardo H.
 VALENZUELA, Héctor R.
 VÁZQUEZ PUL, José
 VERGARA, Roque Antonio
 VIALE, Jorge Omar
 VILLALBA, Bernardo Samuel
 VINARDELL MOLINERO, Miguel
 ZAMANILLO, José Miguel
 ZAPATA, Hipólito Bernardo
 ZAVALA RODRÍGUEZ, Miguel Domingo

VALERI, Salvador
 VINTI, Carmelo

AUSENTES, CON AVISO:

AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
 AMADO SALEME, José
 ARATA, Juan Carlos
 ARBO, Tomás Ameghino
 BONAS, Abraham Efraim
 BONIFATTI, Arolinda S. A.
 BRAVO, Federico S.
 CHAQUIRÉZ de PALACIOS, María
 FERNÁNDEZ GILL, Guillermo Carlos
 FRESCHI, Pedro José
 LÓPEZ de GALLO, Amelia
 LLANO, Juan Pedro
 MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
 MERA FIGUEROA, Julio T.
 OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio
 SAAVEDRA, Roberto O.
 SVRSEK, Enrique A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

CROCCO, Luis Ferdinando
 GALVAN, Raúl Alfredo
 HARRINGTON, Luis José D.
 LABAKE, Juan Gabriel
 NARANJO, Decio B.
 RAFAEL, Juan
 SUELDO, Horacio Jorge

AUSENTES, SIN AVISO:

BARRETO, Hilario
 BETTANIN, Leonardo
 BORRAS, Raúl Antonio
 BUSTOS, Tomás Roberto
 GAITAN, Adelmo Alberto
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo
 SANDLER, Héctor Raúl

SUMARIO

- 1.—Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de legislación del Trabajo de Legislación General y de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley en revisión sobre contrato de trabajo. Se sanciona. (Pág. 2434.)
- 2.—Postergación del tratamiento del proyecto de resolución de los señores diputados Bettanin y Zavala Rodríguez referente a un editorial del diario «La Prensa». (Pág. 2482.)
- 3.—Consideración del proyecto de declaración sobre adhesión a la política del Poder Ejecutivo en materia de nacionalización de la comercialización de hidrocarburos. Se sanciona. (Pág. 2483.)
- 4.—Consideración del dictamen de la Comisión de Industria en el proyecto de declaración del señor diputado Sánchez Coranzo sobre designación del personal de control de balanzas y laboratorios para la zafra azucarera. Se sanciona. (Pág. 2483.)
- 5.—Apéndice:
 - I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 2484.)
 - II.—Inserciones. (Pág. 2486.)

—En Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre de 1974, a la hora 9 y 30:

1

CONTRATO DE TRABAJO

La Honorable Cámara proseguirá la consideración del dictamen sobre contrato de trabajo.

Tiene la palabra el señor diputado Viale.

Sr. Viale — Señor presidente: hablo en nombre de mi partido, el Demócrata Progresista, y de los legisladores de la Unión Popular. Orientación Legalista y Vanguardia Federal, quienes expresamente me han solicitado los represente en este debate.

En el transcurso de las deliberaciones se han dicho cosas muy importantes: los señores legisladores se han extendido acerca del historial del trabajo, analizando conceptos laborales y centrando su preocupación en perfeccionar al máximo esta norma legal, e insinuando modificaciones que significan una contribución para el logro de una mayor justicia social para los trabajadores. Entiendo que al hacerlo han demostrado una actitud legislativa justiciera y loable, además de un ponderable esfuerzo, según puede comprobarse por la extensión de su articulado.

El proyecto de ley en consideración es de una enorme trascendencia. Comparto mucho de lo que se dijo y he reducido mi exposición para no ser reiterativo. Anoche mismo, a última hora, llegó a mi banca una fotocopia con modificaciones al dictamen de la comisión, hecho que me exige también de formular algunos análisis críticos, porque reflejan sensibilidad y receptividad por parte de los señores diputados que la integran.

Mi sector aspira a que la legislación traduzca un concepto moderno de las relaciones sociales, y que no ignore ni soslaye las injusticias. Quiero expresar mi identificación con los principios fun-

damentales que inspiran este proyecto de ley de contrato de trabajo, así como la coincidencia con los objetivos y el alcance laboral que se persigue con esta sanción.

Esta iniciativa sigue las recomendaciones y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, de las que la Argentina es signataria, e inicia su marcha con aquellos enunciados de democracia social que aparecen en Querétaro, en 1917, y en parte de la Constitución de Weimar, en 1919, y que señalan el rumbo de una nueva filosofía en materia laboral. La inspira también la Carta de Trabajo de Berna, así como la Declaración de Chapultepec, de las Naciones Unidas, y otras de las que así mismo somos signatarios; y, aparte de ello, hemos tratado de adecuar nuestra legislación a dichos principios del derecho internacional en materia de trabajo.

De acuerdo con este proyecto de ley, el trabajo no es considerado una mercancía. Ya con eso avanzamos mucho. Por otra parte, desde hace años se había obtenido ese logro filosófico, porque el trabajo es una actividad creativa del hombre, de carácter transitorio, llamado a solucionar sus necesidades económicas.

Con la sanción de esta ley habremos de marcar un hito trascendental en la historia del derecho laboral del país.

¡Qué importante fue aquel código de Joaquín V. González! Desde allí podríamos señalar que se inicia la marcha del derecho laboral argentino. Después hay un proceso continuo, que aunque detenido a veces, siguió como el río que busca su cauce, porque el progreso social es irrefrenable, y así debe entenderse.

En 1921, mi partido tuvo principal intervención en la elaboración de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que sigue también marcando los hitos. Esta síntesis la expuse como convencional constituyente de mi provincia en 1962, cuando fundé las motivaciones de mi redacción y exposición de los artículos 26 y 28. Ellos estaban exclusivamente basados en el constitucionalismo social. Recordé también, y hoy las traigo a colación, las leyes de protección del menor y de la mujer en la provincia de Santa Fe, durante el gobierno demócrata progresista, dictadas en los años 1932 y 1935.

No obstante, a pesar de mi apoyo al proyecto en general, voy a señalar algunas discrepancias de forma y otras de fondo con miras a contribuir, a fe de conciencia, al mejoramiento de este importante logro.

Toda la legislación del trabajo tiende a que la particular situación de inferioridad económica de los trabajadores no cree una inferioridad jurídica. El derecho del trabajo lucha contra una desigualdad, tratando de corregirla y no creando nuevas desigualdades. El proceso laboral crea el fuero y el procedimiento de fondo que ampare al trabajador de la injusticia de los demás, y obtenga una rápida y eficaz satisfacción de sus dificultades. Capital y trabajo, den-

tro de nuestra concepción política, deben estar en un plano de real equivalencia. Considerar al hombre es cumplir con esa máxima de convivencia, de humanidad y de justicia.

Por eso, señor presidente, propugnamos los demócratas progresistas una concepción de la empresa donde el capital y el trabajo se entiendan en forma coincidente. Por eso coincidimos con estas iniciativas oficiales en tal sentido. Queremos instrumentar también y hemos proyectado una efectiva partición de los obreros y empleados en la administración y utilidades de las empresas. Hemos estudiado y proyectado tendiendo a esas finalidades.

Gran obra de recopilación es esta ley. Desde aquel mensaje —porque ha sido un verdadero mensaje— de Joaquín V. González ya en el primer quinquenio de este siglo, hemos ido atravesando una serie de pasos con algunas contramarchas, pero siempre hacia el objetivo de la verdadera liberación del hombre: la ley 4.349, sobre jubilaciones y pensiones de los empleados civiles de la Nación, del año 1904; la ley 4.661, de 1905, sobre el descanso dominical; la ley 8.999, de 1912, sobre creación del Departamento Nacional de Trabajo; la ley 9.105, sobre descanso obligatorio los días 25 de Mayo y 9 de Julio, también allá por el año 1912; la ley 9.148, de 1914, sobre agencias públicas gratuitas de colocaciones; la ley 9.688, sobre accidentes de trabajo, del año 1915; la ley 10.650, sobre jubilaciones de empleados ferroviarios, de 1919; la ley 11.110, sobre jubilaciones y pensiones de empleados de empresas particulares, de 1921; las leyes 11.125 y 11.126, que ratificaron tratados con España e Italia sobre reciprocidad en el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo; la ley 11.728, sobre forma y pago de los salarios —lamentablemente tenemos que reconocer que aún se la sigue violando, pues hay todavía pago en especie en regiones alejadas del país—; la ley 11.317, sobre trabajo de mujeres y menores; la ley 11.337, ampliatoria de la ley 11.278; la ley 11.338, sobre trabajo nocturno en las panaderías, y así sucesivamente sobre jornada de trabajo en 1929, ley 11.544; sobre jubilaciones y pensiones de empleados de empresas bancarias, ley 11.575 también de 1929; la ley 11.591, sobre pasaje gratuito a desocupados; la 11.640, sobre descanso en la tarde del sábado, sancionadas ambas en el año 1932. Luego la 11.722, que ratifica el tratado de Versalles, en el año 1932; la ley 11.729, que modifica los artículos 54 al 160 del Código de Comercio, la 11.837, sobre cierre de establecimientos comerciales; la ley 11.896, por la que se crea la Junta Nacional de Desocupación en 1934, en uno de los periodos donde hacía crisis en el país aquel sacudimiento que en los años 1929 y 1931 se había hecho sentir en la economía mundial, y que fue un signo evidente de la debilidad de fondo que tiene el sistema capitalista, que poco menos que sucumbe al quedar demostrado en la

primera prueba que no es omnipotente ni justo, ni moral.

Luego tenemos las leyes 11.211, sobre protección de la maternidad de empleadas y obreras; la 11.205, de 1935; la 12.232, que ratifica convenciones internacionales sobre la materia; la ley 12.383, del año 1938, el estatuto de empleados bancarios del año 1942, el régimen de viajantes de comercio y sobre trabajadores a domicilio.

Podría extenderme mucho más en estas citas, reconociendo la labor realizada por el gobierno que se inició después de la revolución de 1943. Labor que se acentúa, sobre todo, en el proceso que se inicia en el año 1946, porque uno de los aspectos que hay que reconocer al peronismo es el hincapié puesto en la legislación social que tiene vastos alcances y connotaciones.

Nosotros, señor presidente, creemos en la filosofía socioeconómica del cooperativismo y en esta materia de las relaciones laborales puede jugar un rol mucho mayor aún que el que le asigna la ley. Esta iniciativa, fundamentalmente, deja un camino abierto y pensamos que con el correr del tiempo el sistema cooperativo habrá de reemplazar en muchos casos a los regímenes patronales. Por eso mencioné los sucesos de 1929 y 1931.

Participamos del cooperativismo porque es una filosofía basada en la comprensión y donde hay una democracia efectiva que puede practicarse en todos sus alcances, y que no permite tampoco la concepción económico-política basada en el lucro, ni el Estado político económico compulsivo.

Entre las críticas que debemos formular al proyecto, dejo constancia de que, en general, nos sorprende el sistema disciplinario que se consagra en algunos de los títulos. Pensamos que estos sistemas disciplinarios suelen ser armas de doble filo, y la pérdida del salario nos resulta algo excesivo contra el trabajador.

En relación con otros aspectos del proyecto, hemos conversado también con representantes de entes empresarios, y en general estuvieron conformes con la ley. Es conveniente aclarar esto frente a aquellas protestas aisladas de que se hacen eco algunos órganos de la prensa y que responden a determinado tipo de patronales. Estas protestas no han tenido repercusión entre los legítimos representantes de los empresarios que llegaron al Parlamento.

Entiendo que existen puntos muy difíciles de lograr si carecemos de un sistema de control e investigación de las actividades económicas. En este sentido hace unos días presenté en la Honorable Cámara un proyecto para multar o intervenir, o para expropiar a las empresas y exigir, a través de un todo coherente, a la parte más fuerte del vínculo contractual determinado por la relación laboral.

Con este proyecto de ley, sometido al estudio de la Honorable Cámara, se podrá evaluar en el cumplimiento de los objetivos y gestión

de las entidades o asociaciones nacionales o multinacionales existe compatibilidad con los planes, directivas o pautas aprobados o impartidos por medio de leyes u otras disposiciones reglamentarias emanadas de los poderes del gobierno nacional o de las autoridades constituidas. También necesitaremos saber si la actitud de sus cuadros directivos y gerenciales se ajusta a los fines articulados en proyectos, planes, leyes u otras normas reglamentarias para realizar los fines perseguidos en las políticas nacionales, regionales, provinciales y municipales implementadas. En síntesis, saber si se ajustan a los objetivos de la liberación.

Satisface comprobar que se cumple con esta ley la estabilidad que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ello debe respetarse en todos los órdenes privados y públicos.

Tengo mis dudas sobre la practicidad de los artículos 39, 49 y 59, que como los artículos 27 y 28, reiteran definiciones impropias de la ley. Los artículos 31, 32 y 33 tienen antecedentes en la ley 16.953, pero son susceptibles de otros análisis. Podrán mejorarse en un futuro próximo.

El artículo 34 merece especial consideración. En su primera parte repite conceptos obvios y ya constantes del Código Civil; en la segunda reforma el Código Civil. Los menores de 14 a 18 años que vivan independientes de sus padres podrán contratar trabajo, por sí solos. Esta norma afecta el régimen de protección a la minoridad. Ahora, si el menor no tiene capacidad para disponer de sus bienes, ni de los que obtenga con su trabajo, lo que no se le otorga por esta ley, seguramente porque se le considera incapaz de administrarlos, no se le puede considerar capacitado para contratar por sí solo una relación de trabajo. Pero si se le da capacidad para entablar una relación laboral sin sus representantes, debe dársele capacidad para disponer de los bienes que de ese trabajo obtenga.

Referente al artículo 65, se podría haber especificado más en qué casos puede ser desechado por el juez el documento cuya firma ha sido judicialmente reconocida.

Con respecto al artículo 72, señalo que existe una enorme dificultad para graduar las medidas; y en cuanto al 156, para los supuestos allí establecidos se dispone que los recibos carecerán de eficacia probatoria para acreditar el pago total o parcial. Sucede que hay una gran cantidad de empresarios o empleadores que carecen de una organización administrativa que les permita llegar a la perfección en esta materia. Habría sido más propio establecer otro tipo de sanciones. Por otra parte, los artículos 16 y 20 de la ley 18.596 quitan toda validez a todo recibo que carezca de los requisitos establecidos por el primero de dichos artículos.

Con respecto al artículo 269, objetamos la expresión «separado de hecho, sin voluntad de unirse» porque habría que saber cómo se comprueba la voluntad de unirse. En dicho artículo, en que se asimila la concubina a la cónyuge, debería hacerse la aclaración de en qué condiciones se excluye a la cónyuge de los derechos pertinentes.

Hemos tenido también la inquietud respecto a los trabajadores por temporada contemplados en los artículos 105, 106 y 107, en forma más o menos precisa, y en algunas cláusulas aisladas, como el caso del artículo 177. Son numerosos en el país los trabajadores por temporada, más aún que los que por temporada cumplen tareas rurales, pues muchos actúan en fábricas y plantas industriales de todo tipo.

Recogiendo experiencias y planteos suscitados, convendría agregar algunas consideraciones al proyecto en estudio.

Primero, el derecho del obrero de temporada a percibir los jornales por enfermedad inculpa- ble durante el período comprendido entre la fecha de reincorporación y de la suspensión por fin de temporada. Sostenemos que este derecho se adquiere desde el momento mismo en que le corresponde su reincorporación y no puede hacerlo por encontrarse enfermo, y se suspende por la notificación de suspensión por conclusión de temporada.

Segundo, el derecho del obrero de temporada a percibir todas las asignaciones familiares desde el momento en que se le reincorpora por re- iniciación de temporada y hasta la suspensión notificada al obrero. Destacar que las suspensiones parciales durante el período de temporada no lo privarán al obrero de percibir esas asignaciones.

En tercer término, habría que tener en cuenta también que las suspensiones o reincorporaciones por finalización o iniciación de temporada se deberán efectuar respetando el orden de antigüedad en cada especialidad y categoría profesional.

En cuarto lugar, la notificación de la reincorporación por iniciación de temporada deberá efectuarla el empleador al obrero en forma personal o por carta certificada, con aviso de entrega en el último domicilio denunciado por el obrero, que deberá ser domicilio donde haya reparto de correspondencia. Porque se da el caso —que los señores diputados conocen muy bien— de muchos de estos trabajadores que han llegado en los últimos tiempos de las provincias a la Capital Federal, que están ubicados en villas de emergencia y donde hay problemas para conectarse por medio del correo.

Finalmente, voy a referirme a la creación de un seguro de desempleo. En la comisión correspondiente existe un proyecto de ley con miras a ese objetivo.

La desocupación significa una amenaza, cuando no, hambre e incapacidad. No es una idea novedosa: el seguro de desempleo se aplica en nu-

merosos países con muy buenos resultados. Los organismos del gobierno cuentan aquí con un grupo de técnicos que conocen sobradamente la materia. La desocupación es también causa de un frágil estado demográfico, porque lamentablemente las posibilidades de empleo o desempleo han acentuado en la Argentina, desde el aspecto económico, un desigual desarrollo por regiones.

Me parece muy bien el artículo 258. En él se establece la licencia diaria durante el plazo de preaviso. Esto no es ninguna innovación, pero sí lo es el hacerla coincidir con las primeras horas de la jornada de trabajo, lo que obra en perjuicio del trabajador en muchos casos. Debe dejarse librado, como lo hace la ley 11.729, a la modalidad de trabajo y a la conveniencia del empleador.

Sr. Salomón. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Viale. — Sí, señor diputado.

Sr. Salomón. — Ahí debe tener en cuenta el señor diputado la innovación que establece las dos últimas horas, y después admite la compensación para tomar días completos.

Sr. Viale. — Gracias, señor diputado. No quería ser reiterativo, pero al hacer referencia a ello dije que estábamos totalmente de acuerdo con estas modificaciones, y que no sólo había observado un trabajo intenso en esta comisión, sino también a un grupo de diputados receptivos y sensibles a las modificaciones y a la perfectibilidad que buscábamos.

Por el artículo 266 se incrementan los límites de indemnización por antigüedad, pero se mejora el sistema actual en cuanto estos límites varían con las modificaciones salariales, no adoleciendo, como en la ley 11.729, de la rigidez derivada de la fijación de estos montos en cantidades determinadas de dinero.

Otro aspecto importante, saludable y eficiente de esta ley es que contribuye, y es un paso importantísimo, hacia la codificación. Yo soy tan partidario de la codificación que he presentado un proyecto de ley para ordenar toda la legislación agraria que está dispersa, mucha de ella difícil de ser hallada y que en muchos casos la encontramos no sólo reiterativa, sino también hasta contradictoria.

En el orden de las relaciones de trabajo, si bien los fundamentos no pueden ser los mismos, se entiende que aunque no haya una codificación se impone un ordenamiento legislativo, porque es prácticamente imposible poder abarcar actualmente esta rama del conocimiento para la defensa real de las fuerzas del trabajo.

Fuera de estas observaciones que motivan disidencias parciales, entiendo que este Parlamento se honra al dotar al país de una legislación acorde con la época, y ello es producto de una filosofía político-económica que compartimos, porque está encarrilada en el camino a la democracia social. Por supuesto, la ley es perfecta, porque es obra humana. Con este proyecto

se demuestra que el país se encamina sin pausas hacia el logro de esa democracia social. Y ello gracias a las luchas de los obreros, a la preocupación y al estudio de los juristas, a la actividad de los legisladores que ya desde 1904, y aún antes, como hemos tenido ocasión de escuchar, han venido dando al pueblo argentino importantes leyes de trabajo que han marcado siempre hitos de progreso; gracias también, fundamentalmente, a los ejecutores en las distintas épocas.

Al aprobar este proyecto de ley en general, entendemos rendir un homenaje con este hecho concreto a todos ellos, y esto aunque tengamos que seguir trabajando y avanzando en este campo social, porque sabemos que la ley en general es positiva y progresista, pero también tenemos en cuenta que, como todo logro humano, es perfectible y que quedan en este enorme compaginamiento legislativo una cantidad de dudas sobre lo que vamos a aprobar.

En síntesis, señor presidente, lo apoyamos, como lo dijo la declaración de nuestro congreso realizado en Córdoba el 9 de junio —cuyos conceptos comparten los partidos que me han honrado con el honor de representarlos en este debate—, porque «no aceptamos la vigencia de una sociedad capitalista en la que la concentración del poder económico por parte de los monopolios, las empresas multinacionales y el privilegio influye sobre el poder político y usufructúa el esfuerzo del pueblo».

Esos son el espíritu y el criterio con los que vamos a aprobar en general este proyecto, con algunas disidencias parciales. Y esta posición la fijo en nombre de la democracia progresista, el Partido Vanguardia Federalista Tucumana, el Partido Orientación Legalista y la Unión Popular que, como dije, me han honrado con su representación en este debate. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Tula Durán.

Sr. Tula Durán. — Señor presidente: en nombre del Movimiento Popular Provincial de San Luis y del Partido Bloquista de San Juan, adelantando el voto favorable en general al proyecto de ley sobre contrato de trabajo. Lo hacen os porque si bien consideramos que en esta ley no se ha volcado ninguna institución jurídica revolucionaria para el derecho laboral argentino, ella implica una constructiva y positiva compilación de todo lo que en doctrina y jurisprudencialmente se ha elaborado a través de un trabajo de muchos años en defensa de la clase trabajadora argentina.

Es notorio que el proyecto contiene normas que consagran creaciones jurisprudenciales o doctrinarias que desde hace mucho tiempo venían bregando por que el trabajador se encontrara protegido debidamente en la relación laboral, para evitar el conflicto social destructivo de la realidad política nacional.

Es indudable que a eso tiende la inclusión concreta del principio de que los jueces deben fallar, en la duda, interpretando la ley en forma favorable al trabajador. Y si bien no es novedosa para el quehacer jurídico laboral del país esta inclusión en el artículo 8º, sí es necesario que esté específicamente concretada normativamente para que no quede ninguna posibilidad de que al llegar el conflicto laboral a la justicia se puedan interpretar las leyes en forma desfavorable para la parte más débil en la relación ya de orden procesal del conflicto jurídico.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Antonio Pereira.

Sr. Tula Durán. — También es positivo que la mujer obtenga, mediante estas normas que ahora son analizadas, la igualdad de condiciones y situación en cuanto a los salarios con respecto al hombre. Ha habido un largo proceso de reivindicación de la mujer argentina, tanto desde el punto de vista político como de su relación jurídica, ya sea esta última dentro del área del trabajo como de la familia.

Este proyecto de ley consagra concretamente algo por lo que se ha venido luchando con reiteración: la mujer —que en numerosas actividades, como la del vestido, constituye el noventa por ciento de los trabajadores— tiene que tener igual remuneración que el hombre cuando desempeña las mismas actividades de éste. Pero tampoco se ha descuidado proteger a la mujer en aquellos contratos de trabajo que pueden significar un daño o deterioro a su condición de esposa o de madre.

Debo hacer alusión, en esta reivindicación de la mujer, a un proyecto sancionado por la Honorable Cámara, del que soy autor, por el que se consagra, en otro orden de su actividad económica, el derecho de disponer de los bienes propios y de los gananciales que ella administra al amparo de la posibilidad de que sean perseguidos por los acreedores del marido. Esta situación jurídica, ya sea en el plano laboral como en el económico, que la pone en una posición de igualdad que hasta el presente, a pesar de serlo teóricamente, no la tenía, constituye un paso adelante de suma importancia para la mujer argentina, y por eso lo pongo en evidencia.

Los que tenemos alguna experiencia, aunque más no sea de tipo profesional, en lo que significa para el trabajador el conflicto laboral una vez que éste se ha producido, somos conscientes de que no es solamente en las normas jurídicas, por más perfectas que aparezcan y aun cuando hayan previsto todas las situaciones en que el trabajador pudiese caer involuntariamente, donde se encontrará la solución a los conflictos que puedan plantearse. De nada vale que los jueces, en última instancia, al dictar sentencia, deban fallar en la duda protegiendo al trabajador, que

es la parte más débil en el conflicto, cuando la sentencia llega demasiado tarde o cuando la cuestión en la faz conciliatoria administrativa se ha prolongado de tal manera que el trabajador se encuentra agobiado por el problema económico. De nada sirve que establezcamos que la firma, aun reconocida por el trabajador, puede no ser considerada como prueba concluyente por el juez cuando aquél ha sido compelido por su necesidad de trabajar a suscribir recibos en blanco, por más que éstos formalmente estén adecuados a las normas que esta ley establece.

Es evidente, entonces, que es allí, en la policía del trabajo, en la faz previa, inclusive en el control de la relación laboral del contrato de trabajo vivo, en su desenvolvimiento, donde está la solución para muchos de los problemas que aquí, desde el punto de vista normativo, se instrumentan en forma altamente positiva, que es lo que nos ha movido a adelantar, como he dicho, nuestro voto favorable.

Allí es donde nosotros debemos extremar nuestra fuerza de previsión para que el daño social no se produzca, y hago hincapié en esta situación porque un periodista de San Luis, el señor Solano Bustos, me ha hecho llegar un informe sobre situaciones que se han producido en aquella provincia de conflictos que aún aquejan a los trabajadores puntanos. No puedo silenciar esta situación, y con la autorización de la Presidencia voy a leer una breve parte: «Denuncia de los obreros de la mina Santa Isabel, de mármol ónix, de San Luis, de vivir en sórdidas covachas, sin cocina, luz, agua potable, ni instalaciones sanitarias de ninguna especie; sin servicios sociales, médicos, de farmacia; con el mal de Chagas, la silicosis y otras enfermedades que aquejan —como es de público conocimiento— al obrero minero de San Luis o de actividades como éstas de la explotación del mármol ónix, sin que hasta el momento, a pesar de los esfuerzos desarrollados por el gobierno nacional y el provincial, se haya podido poner remedio». Esta información apareció en el diario «Mendoza», en el corriente año.

En San Luis, donde las explotaciones mineras debieran ser un orgullo para la provincia desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la tranquilidad social, la silicosis ha creado un estado de emergencia en la población minera que ha sido denunciado en forma pública. Sabemos que el enfermo de silicosis es un hombre que a los treinta o cuarenta años queda imposibilitado de realizar todo tipo de trabajo. También sabemos que posibilita la tuberculosis, que es un mal que debemos erradicar mediante la prevención y una positiva y enérgica política de policía del trabajo, porque si no el conflicto social que ya se ha desatado en esta zona minera de San Luis no va a tener solución.

mente, que acopiemos toda la experiencia jurisprudencial y doctrinaria en esta ley, que no es revolucionaria, que jamás se ha dicho que lo fuera ni que lo vaya a ser, pero que es extraordinariamente positiva en cuanto por primera vez se legisla orgánicamente el contrato de trabajo. Pero no es solamente en estas normas donde debemos volcar nuestra acción.

Por supuesto que se tienen que formular algunas críticas a esta iniciativa, y una de ellas, tal vez la más importante, ya ha sido planteada en el recinto. Está referida a que no se consagra, pese a que figuraba en el proyecto original, la jornada de 44 horas semanales de trabajo.

En esta forma se establece un tratamiento desigual para el obrero del interior con respecto al de la Capital Federal. Este régimen ya lo tienen algunas provincias de nuestro país. En la provincia de Mendoza está establecido desde el año 1932, y lo mismo ocurre en la provincia de Córdoba. Desde el año 1934 está consagrado en las normas legales aplicables en la provincia de San Luis. En la provincia de Jujuy, desde el año 1946, el obrero tiene mayor salario que el de la Capital, porque expresamente se determina que la jornada del día sábado terminará a las 12, pero el salario se abonará por la jornada completa.

En un momento en el cual el régimen de policía laboral ha pasado a la Nación, aun en contra de la opinión de los sectores opositores de esta Honorable Cámara, no se comprende por qué razón, estando consagrada en gran parte del país la jornada laboral de 44 horas, no se fija esta norma en el proyecto que estamos considerando.

La redacción de los artículos 213 a 217 del proyecto, que dejan a salvo la vigencia de las normas provinciales en aquellos lugares donde se ha establecido la jornada disminuida de 44 horas, no es un paliativo para esta omisión legislativa que se podría haber evitado en esta oportunidad inmejorable para hacerlo.

Creo que a esta altura del debate el proyecto ya ha sido exhaustivamente analizado. En consecuencia, sólo me resta decir que en la crítica debemos incluir un aspecto que desde diciembre de 1945 forma parte de las inquietudes de la clase trabajadora argentina, porque el decreto 33.302/45 incluía en su texto inicial el régimen de coparticipación de los trabajadores en las ganancias y en la conducción de las empresas.

Esa aspiración también forma parte de las inquietudes de la mayoría de los partidos políticos argentinos, y ha sido bandera de muchos de los partidos en la última campaña electoral. Es cierto que en este proyecto de contrato de trabajo se contempla esta aspiración, aunque no en forma directa, pero considero que debió ser consagrada de manera concreta, de la misma forma que se pidió que lo fuera en la ley de promoción industrial, como un factor positivo para conceder apoyo crediticio a aquellas

empresas que ya tenían ese régimen de coparticipación. Estimo, por lo tanto, que en este contrato de trabajo debió figurar de manera coercitiva.

Con este somero análisis dejo fundamentado mi voto positivo en general al proyecto de ley sometido a la consideración de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Humberto Suárez.

Sr. Suárez (H. F.). — Señor presidente: el proyecto de ley sobre contrato de trabajo, que está en consideración, procura sistematizar en forma orgánica y ordenada todas las normas, doctrina y jurisprudencia dictadas hasta el presente en relación con el derecho del trabajo; y lo logra en gran medida, no obstante que pueden señalarse algunos aspectos poco claros o negativos que, dada la importancia del debate, he de procurar sintetizar en el curso de esta exposición. Anticipo desde ya en forma clara y precisa nuestra identificación, la identificación del Partido Provincial Rionegrino, con los principios y la filosofía que inspiran el proyecto, así como también en cuanto a su finalidad, por ser totalmente coincidentes con los postulados filosóficos y doctrinarios de nuestro partido.

Dentro de este esquema, apoyado en el concepto humanista del trabajo que inspira el proyecto, debo destacar nuestra satisfacción, tanto más cuanto que el fundamento de nuestra política es el respeto a la dignidad de la persona humana, porque entendemos que el hombre es el fin de toda la vida económica y social. Consideramos al trabajo como instrumento del desarrollo, pero primordialmente fuente de toda dignidad y causa determinante de respeto y protección social. Consecuentemente, por ser obra del hombre, el trabajo es el principal factor de la producción, y lo concebimos integrado al capital y a los bienes de la naturaleza, pero nunca subordinado a ellos.

Concebimos el trabajo en función social y económica, podemos decir que el trabajo en función social dignifica al trabajador, y en función económica implica la participación y el esfuerzo de cada habitante en el desarrollo común. Surge así la necesidad de establecer un orden estable con nuestros semejantes y con mayor motivo con aquellos que contribuyen con su inteligencia y con sus brazos a que prosperen las empresas en que empeñamos nuestra acción.

Defendemos así la vigencia en plenitud de la legislación laboral para la protección de los trabajadores y propiciamos su promoción mediante nuevas normas, que ajustadas al concepto de la función social y económica del trabajo, favorezcan la función del trabajador, sin incidir negativamente en los otros sectores que hacen al desenvolvimiento de nuestra tarea.

Frente al individualismo anárquico del pasado, fuente de múltiples desencuentros, expresamos claramente nuestra posición en favor de

una democracia social, lealmente entendida, y seguro vehículo de progreso.

Consideramos y reafirmamos que los derechos del trabajador deben ser reconocidos, respetados y defendidos, entendiendo necesario conceptualizarlos como una circunstancia jurídico-social presente, que debe ser objeto de permanente actualización. Estimamos inevitable tal actitud ante la dinámica de nuestro tiempo.

Sostenemos que este proyecto forma parte del conjunto de medidas que en el todo conforman el concepto de justicia social, la que concebimos como el principio que sustenta el «otorgar a cada uno lo que realmente le corresponde por equidad, derecho y primordialmente por pertenecer al género humano». Sabemos que, más allá de las garantías que establece la ley en sentido jurídico, existe un campo no protegido por las normas legales, en el cual el hombre está librado a sus propias fuerzas. Es en este espacio de la actividad humana no amparada por la ley, donde resulta siempre triunfador el más fuerte, o el de mayor poder económico, o quien tuvo mejores oportunidades. Al no existir normas jurídicas que puedan impedir ese desequilibrio, muchas veces dramático, es el Estado, mediante el ejercicio de una política imbuida de un profundo respeto hacia la condición humana, quien debe concurrir con su acción a reparar tal desajuste social.

Por ello invocamos, no sólo las virtudes del derecho, sino también las de la equidad, como concepción filosófica que, estando más allá de lo jurídico, constituye la más pura esencia del respeto del hombre hacia sus iguales.

Es absolutamente necesario en el mundo de hoy corregir las injusticias y las desigualdades, instaurando el verdadero orden de las cosas y de los bienes, de forma tal que la vida del hombre llegue a ser más humana.

Volviendo sobre el proyecto en consideración, señor presidente, debemos reconocer que él ha de marcar y fijar una etapa muy valiosa en la historia del derecho del trabajo argentino, cuyos inicios datan desde principios del siglo, allá por 1905. Desde aquel año en adelante, la historia del derecho laboral argentino nos muestra la permanente y constante preocupación para ir dando forma a la legislación de la materia, llegándose a sancionar más de 33 leyes fundamentales, desde 1905 hasta 1942, referidas exclusivamente a la materia laboral. Debemos agregar a ellas las innumerables iniciativas presentadas en el Parlamento que o bien no tuvieron sanción definitiva o quedaron como simples proyectos, pero que de por sí hablan con elocuencia de la preocupación de nuestros hombres públicos sobre el problema laboral del país. Para no abundar en detalles que puedan llevar esta exposición más allá de lo prudente me remito, sobre estos antecedentes, a los agregados al Diario de Sesiones del Honorable Senado de los días 5 y 6 de junio del corriente año, página 605.

Decía al comienzo de mi exposición, señor presidente, que no obstante coincidir y apoyar en general este valioso documento, debo señalar algunas falencias que inciden negativamente en su contexto general. En este aspecto, debo puntualizar que resulta poco feliz y peligrosa la redacción del artículo 22 en su segundo párrafo, cuando dispone que «ni sus ingresos por salarios, en la cuota prevista de embargabilidad, ni sus otros bienes, podrán ser afectados al pago de costas, salvo el caso demostrado de mejoramiento de fortuna». Tal como resulta del texto mencionado, puede fomentarse a través de la propia ley la aventura jurídica por parte del trabajador, sabedor de que cualquiera fuere el resultado del litigio, jamás deberá abonar nada por ningún concepto. Debe inexcusablemente modificarse este artículo, haciendo que las costas deban ser soportadas por quien resulte perdedor en el pleito. En su defecto, propongo desde ya, formalmente, como agregado a dicho artículo, lo siguiente: «Las costas que pudieran corresponder soportar al trabajador serán abonadas por la organización sindical a la que pertenezca el trabajador».

Con este agregado, señor presidente, evitaremos crear una situación por demás irritante, cual es la de dejar al profesional, que ha puesto su trabajo y su sapiencia en un pleito, sin posibilidad de percibir remuneración alguna. También es paradójico que tratando la ley que discutimos la situación de los trabajadores y su protección, en esta misma ley creemos las normas de desprotección de un sector de la sociedad: los profesionales del derecho que, como cualquier otro profesional, tienen el derecho constitucional de percibir una remuneración por su trabajo.

Se podrá argumentar que lo dispuesto por el artículo 19 del proyecto, en el sentido de que «las desigualdades que creara esta ley en favor de una de las partes sólo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación», justificaría la redacción del artículo 22; pero es el caso de que en éste se castiga a alguien que no es ninguna de las partes de la ecuación, la que está planteada, como es sabido, entre trabajador y patrono, o viceversa.

En el caso de que se trata, la ley crea una disposición injusta para con un tercero ajeno a la relación laboral y que, por su especialidad, pone su trabajo al servicio de la justicia y, por tanto, habiendo aportado su trabajo debe constitucional y moralmente percibir por su esfuerzo la remuneración que le corresponde.

Tampoco resulta equitativo que quien ha ganado en la contienda judicial, que bien puede ser un zapatero defendiéndose de una demanda de su obrero, o un contratista de viña defendiéndose de la demanda de su peón de campo, o de un pobre altañil defendiéndose de la demanda del «media cuchara» que le sirve de ayudante, tenga que soportar con sus magros

recursos los honorarios del profesional que lo defendió frente a un reclamo injusto, arbitrario o ilegal. Este castigo no se justifica, señor presidente, y solamente tiende un manto obscuro sobre los sanos y justificados principios que inspiran la ley.

En el capítulo II del título III, artículo 104, se dispone que «Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 271 de esta ley». Este párrafo no concuerda con el título que acompaña o encabeza el artículo, que se refiere al «Despido antes del vencimiento del plazo - indemnización».

Del cotejo del texto de los artículos 102, 103 y segundo párrafo del artículo 104 aparece una situación totalmente incongruente y que escapa a la finalidad del título que nos ocupa. En efecto, se admite la existencia del contrato a plazo fijo hasta un máximo de cinco años (artículo 102). Además se dispone que las partes tienen la obligación de preavisar la extinción del contrato so pena de producirse la conversión del mismo como de plazo indeterminado (artículo 103). Pero, y aquí surge la incongruencia cuya rectificación desde ya peticiono, en el segundo párrafo del artículo 104 se dispone que estando el contrato íntegramente cumplido y mediante el preaviso impuesto por el artículo 103, le asiste al obrero el derecho a percibir una indemnización por despido.

De acuerdo con esta circunstancia, resulta evidente que la autorización de contratación a plazo fijo es innocua y carece de relevancia jurídica dentro del contrato de trabajo toda vez que, aunque venciere y se cumplieren las disposiciones legales pertinentes, se considera al trabajador como despedido.

En otro orden de ideas, en el título XI, que trata de la «transferencia del contrato de trabajo», se establece en el artículo 249 la solidaridad. Dice la norma que «quedarán solidariamente obligados todos quienes, por cualquier título y para surtir efecto en forma permanente o transitoria, cediesen o adquiriesen un establecimiento en cuanto a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo...». Esta disposición, en la forma en que está redactada va a hacer de imposible realización, a partir del momento de la sanción de esta ley, la venta o transferencia definitiva de cualquier establecimiento, ya sea industrial, comercial o agropecuario.

Ello es así por cuanto al establecer e imponerse esta solidaridad se deja eternamente obligados en las relaciones emergentes del contrato social a los poseedores de un establecimiento, aunque hayan concretado su venta, pese a las claras disposiciones del artículo 246 que reglamenta la transferencia del establecimiento, por un lado, y a la norma del artículo 247, que en estos casos faculta al trabajador a considerar

extinguido el contrato de trabajo cuando ciertas circunstancias le hacen prever un perjuicio actual o futuro en su contra.

Así las cosas, considero inaceptable y muy riesgoso establecer la solidaridad para los casos en que la transferencia del establecimiento es a título de venta y en forma permanente. Toda vez que, como ya he señalado, el antiguo propietario quedaría supeditado a los aciertos o desaciertos en los manejos de la empresa que efectúen los nuevos adquirentes, haciéndole asumir obligaciones por hechos y actos en los cuales no ha tenido ningún tipo de participación ni de resolución. Esta circunstancia resulta también lesiva a los principios generales del derecho, así como también a los principios que informan las normas del derecho del trabajo, puesto que, como reza el artículo 4º de este proyecto, se considera trabajo a los fines de esta ley «toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración».

Concordantemente, el artículo 23 exige la prestación de servicios a favor del empleador y la relación de dependencia para que se considere subsistente el contrato de trabajo. Y si ello es así, resulta incongruente que se establezca solidaridad frente a la relación laboral para quien no sólo no tiene bajo su dependencia al obrero, sino que tampoco recibe los beneficios del trabajo de éste, ya que quien percibe el beneficio y recibe directamente la prestación es el adquirente o nuevo propietario de la empresa.

Señor presidente: en mérito a los fundamentos expuestos, dejo planteada la inquietud respecto de la redacción del artículo 249 y solicito a la comisión su modificación, eliminando del primer párrafo los términos «por cualquier título y para surtir efecto permanente o».

En definitiva, con estas observaciones consideramos formuladas las críticas que puede merecer el proyecto. Hago votos para que esta ley, que viene a llenar una sentida necesidad del pueblo trabajador argentino, sirva efectivamente para humanizar el trabajo, para morigerar las tensiones sociales que desde largo tiempo afectan la convivencia nacional y, en síntesis, como vínculo de unión y de paz en las relaciones entre trabajadores y empresarios para bien del país.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Señor presidente: antes de considerar un proyecto de tanta trascendencia hubiera sido conveniente requerir la opinión de la cátedra, de la magistratura especializada y de los técnicos en derecho laboral que han acreditado, además de una clara versación en la materia, el deseo de concretarla en normas legislativas adecuadas.

Del mensaje y de la propia exposición de motivos que acompaña al proyecto resulta que sus normas no han tratado de legislar a nuevo sobre las instituciones del derecho del trabajo. Sus autores han tomado en consideración, según se

expresa, ideas fundamentales de justicia social y luego, a partir de las normas constitucionales, el material legislativo acumulado en la estructura vigente, en normas derogadas y aun en aquellas que habiendo obtenido sanción legislativa, como la ley 16.881, no tuvieron vigencia por acto de veto.

Se afirma también haber atendido a las enseñanzas de la doctrina nacional y extranjera y a la jurisprudencia del fuero laboral en el país e, incluso, a las previsiones de las convenciones colectivas. Así mismo, se ha tomado en consideración la legislación extranjera en muchas de sus disposiciones, las propuestas y recomendaciones de congresos internacionales, documentos de la Organización Internacional del Trabajo y proyectos elaborados en el país, en especial el del Código del Trabajo de los doctores Nápoli, Despontin y Tissebaum, del año 1966.

Lamentablemente, no se consignan individualizados concretamente los antecedentes compulsados. Los autores del proyecto no han creído necesario hacerlo, ni tampoco les ha parecido propio anotar las fuentes de cada artículo o disposición, salvo en determinados casos. Esta omisión hace menos cómodo el estudio de los preceptos que integran el proyecto.

Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por el prestigioso ex juez de la Nación doctor Amadeo Allocatti, podemos decir en términos generales que el proyecto ha tenido como fuente fundamental, no sólo el proyecto de Código de Trabajo elaborado por especial indicación del presidente Illia, elevado en 1966, sino también la ley nacional del trabajo de México y así mismo, fundamentalmente, el proyecto de bases para una ley de contratos de trabajo elaborado en 1966 por el Instituto Argentino de Estudios Legislativos.

No obstante, podemos afirmar que el proyecto es coherente y el método empleado positivo. En 1965, esta misma Cámara consideró en el mes de octubre el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo elaborado sobre la base de los distintos proyectos presentados precisamente con respecto a un tema idéntico, es decir, el contrato de trabajo. Uno de esos proyectos llevaba mi firma, juntamente con la de los diputados Roberto M. Pena, Mario Lavalle, Eduardo H. Herrera y Eduardo Solari. Esta preocupación sobre el tema es la que me ha impulsado a participar en este debate.

En los fundamentos expresábamos entonces que existe acuerdo general sobre la necesidad de actualizar la legislación laboral argentina, coincidiendo al respecto los especialistas en la materia, los trabajadores, las asociaciones gremiales que los representan y no pocos empresarios. Es necesario —decíamos entonces— sistematizar las disposiciones que legislan sobre contrato de trabajo, eliminando las dudas que dan origen a distintas interpretaciones jurisprudenciales y

doctrinarias, y llenando algunas lagunas que con el correr del tiempo se han hecho evidentes.

Decíamos también que la ley 11.729, del año 1933, a falta de una legislación sobre contrato de trabajo se había convertido prácticamente en una ley general sobre la materia, que en la actualidad ampara a la gran mayoría de los trabajadores del país. Sosteníamos también que era indispensable mantener la individualidad del derecho del trabajo por constituir un derecho de excepción frente al derecho común, civil y comercial, esencialmente móvil por estar sometido a las influencias políticas, económicas y sociales, imponiendo la necesidad de desvincular la legislación sobre contrato de trabajo del Código de Comercio y reglarlo en forma amplia y comprensiva de todas las situaciones posibles, para lograr una mínima estabilidad jurídica en las relaciones laborales.

Respecto al proyecto de contrato de trabajo que estamos tratando, podemos decir, sintéticamente, y en términos generales, lo siguiente:

Primero: que coincidimos con el espíritu humanista que lo inspira, así como también con su carácter nacional, unificador e igualitario.

Segundo: que recoge normas en vigencia y la mayor parte de la jurisprudencia más positiva del país.

Tercero: que es un paso importante hacia la codificación.

Cuarto: que faltan normas que protejan al trabajador de nacionalidad extranjera, el que se encuentra desamparado cuando no ha cumplido con los trámites de radicación, lo que facilita el abuso patronal.

Quinto: que omite, lamentablemente, resolver el problema de la jornada legal del trabajo, sin tener en cuenta el proyecto radical de los senadores Angeloz, Solari Yrigoyen y de la Rúa, que ya cuenta con sanción del Senado, por el que se fija en cuarenta y cuatro horas la duración de la jornada semanal de trabajo. Los países más adelantados del mundo tienen ya la jornada de cuarenta horas y se está luchando por la implantación de la jornada de treinta y seis horas. Convendría que rigiera en todo el país, por un principio elemental de igualdad y no a expensas de las normas que las provincias pudieran dictar al respecto. El diputado Araya, al informar, en nombre de nuestro bloque este proyecto en el día de ayer, hizo una exposición exhaustiva sobre la duración de la jornada legal del trabajo en provincias argentinas como las de Córdoba, San Luis, Jujuy y Mendoza, que se anticiparon a una jornada menor a la establecida por la ley 11.544.

En sexto lugar, podríamos decir también, señor presidente, que salvo casos especiales se mantiene un sistema de despido potestativo por parte del empleador, que debe ser reexaminado en

la vieja concepción liberal sobre el derecho de la propiedad.

En su brillante exposición del día de ayer, el señor diputado Bravo hizo un análisis exhaustivo sobre el problema de la estabilidad en el contrato de trabajo, fijando el criterio de que frente a la concepción moderna que se tiene de la empresa y del trabajo —también esto fue considerado por el señor diputado Marino—, era necesario superar el criterio liberal capitalista e individualista.

Lamentablemente, el proyecto de ley sobre contrato de trabajo no hace otra cosa que establecer una protección frente al despido arbitrario, pero no garantiza de una manera eficiente la estabilidad en sí misma, que es una cuestión fundamental en el siglo que vivimos en materia de relaciones laborales.

Séptimo: es lamentable que mientras este proyecto incorpora normas que tienden a la estabilidad, el Estado mantenga en la administración pública el régimen de la prescindibilidad, que provoca tanta angustia y zozobra en muchos hogares argentinos.

Octavo: de las normas derogadas se ha suprimido —ya lo dijo ayer el señor diputado Marino— el decreto ley 18.598/70, promulgado por la dictadura militar. Según la propuesta de la Confederación General del Trabajo, los trabajadores bancarios y del seguro readquirirían la estabilidad propia que habían establecido la ley 12.637 y los decretos 20.268 y 21.304. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratar este problema, consideró inconstitucional la estabilidad absoluta que consagraban esas normas. Propiciamos, entonces, incorporar también ese decreto entre los derogados por el proyecto de ley que estamos considerando.

Noveno: debemos destacar como loable que el proyecto de ley sobre contrato de trabajo recoja el principio del salario mínimo vital y móvil, aunque no lo haga con la amplitud que contenía la ley dictada durante la presidencia del doctor Illia. Y era mucho mayor, porque incluía también, dentro del concepto de la movilidad, a las asignaciones familiares que, en virtud de lo dispuesto por el proyecto de ley sobre contrato de trabajo que estamos tratando, quedan excluidas.

Sin el ánimo de mantener ninguna disidencia con mis compañeros de bloque con respecto al planteo que voy a hacer, simplemente deseo traer a la consideración de la Honorable Cámara la necesidad de estudiar a fondo el artículo 39 del proyecto, que según el distinguido tratadista y ex juez de la Nación doctor Amadeo Allocati, repugnaría a claros preceptos constitucionales al admitir la aplicación a juicios pendientes de ciertas normas, como por ejemplo las de los artículos 22, 51, 75, 87, 107, 194, 197, 218, 224, 264, 272, 281 y 291, que afectaría, según su criterio, situaciones concluidas o consumadas conforme a leyes anteriores.

Con referencia al artículo 22, sobre gratuidad, es opinable el aserto del primer párrafo del precepto por la generalidad de sus términos. Del texto surgiría que el mejoramiento de fortuna debe operarse con posterioridad al pleito, amparando así a trabajadores que en el momento de litigar tendrían medios suficientes para afrontar el pago de las costas. Sería injusto, pues, que teniendo el trabajador medios para satisfacer los gastos a su cargo, no lo hiciera hasta tanto mejorara de fortuna. El precepto resulta así una invitación a la aventura judicial, que tanto preocupa a los autores Unsain y Pozo. Si se insiste en mantener la norma, habría que poner a cargo del Estado los gastos que debe efectuar el trabajador cuando se le impongan las costas. Así lo han hecho algunas provincias, como por ejemplo Córdoba (artículo 46 de la ley procesal 4.163) Santiago del Estero (artículo 58 de la ley procesal 2.415) y Chubut (artículo 39 de la ley de igual naturaleza). La sanción establecida en el segundo párrafo del artículo 22 nos parece notoriamente excesiva o desproporcionada a la conducta asumida. Generalmente, las leyes procesales sancionan esos excesos sin llegar a lo propuesto por el proyecto.

Con respecto al artículo 32, sobre subcontratación y delegación, si bien en términos generales adherimos al principio de solidaridad, que procura en el fondo proteger al trabajador, convendría que en el momento de considerar en particular este artículo lo analizáramos más profundamente. Esta es una invitación que formulo a los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo, por cuanto cabría señalar que, en principio, cuando se acredite que el contratista o subcontratista reúne condiciones de solvencia, profesionalidad y establecimiento, no parecería equitativo ni ajustado a derecho extender la responsabilidad como se pretende. Sobre este punto, al considerar el proyecto en el Honorable Senado, dijo el señor senador Leopoldo Bravo que si bien la norma tiende a proteger al trabajador —y en esto estamos de acuerdo—, ocurre que en la práctica se correría el serio peligro de que por imperio de esta norma se viera perjudicado precisamente el sector al que se quiere dar mayor protección. En oportunidad del tratamiento en particular de este artículo, me reservo el derecho de proponer algunas modificaciones.

No quiero terminar mi exposición sin hacer una breve referencia a los antecedentes de la legislación laboral argentina, por cuanto asignar el monopolio —digamos así— de la autoría o la paternidad de dicha legislación a un sector o a un partido político determinados, nos conduciría a cometer una tremenda injusticia. El esfuerzo viene de lejos; podríamos decir que los hombres vienen luchando desde los tiempos de Adán y Eva en esta materia. Así se ha avanzado desde el fondo de los siglos a través de todas las formas sociales y económicas, desde las tribus bárbaras a las sociedades civilizadas, su-

perando la esclavitud, las jornadas inhumanas, los salarios de hambre, la peste, la desnudez, la ignorancia, el analfabetismo, el privilegio de castas feudales, militares, clericales; se avanzó perfeccionando las formas de producción, la remuneración, la higiene, la instrucción, la vivienda, la legislación del trabajo; se avanzó declarando y estableciendo los imprescriptibles e inalienables derechos de los hombres que todas las dictaduras violan y desconocen.

Crisólogo Larralde, en un trabajo publicado en 1945, dice: «Nuestros próceres, los espíritus monitores, no dejaron nada de un día para otro; organizaron el país y desde 1810 afrontaron y resolvieron, con el criterio y los medios de la época, los problemas sociales, económicos y políticos a medida que se iban presentando.

»Así, Manuel Belgrano —desde 1794 como secretario del consulado de Buenos Aires, luego como consejero de Hipólito Vieytes, desde las columnas del «Semanario de Agricultura», o en 1810 como director del «Correo del Comercio»— inicia una intensa obra social tendiente a establecer las primeras industrias en el país, mejorar los métodos agrícolas, proteger a los labradores y enseñar oficios técnicos a los trabajadores argentinos, ya sea enviándolos a Europa o trayendo de allí maestros artesanos.»

Y más adelante continúa expresando Crisólogo Larralde: «Mariano Moreno, fundador de la Biblioteca Nacional, defiende la libertad de prensa, como medio de dignificación popular, edifica la libertad de los argentinos entregando su vida a la resolución y redacta el más meditado alegato de la época contra el monopolio comercial».

Sigue diciendo: «El Cabildo de Buenos Aires, entre 1810 y 1830, dicta una serie de acuerdos fijando precios máximos a los artículos de consumo —carne, pan, vino, yerba, etcétera—; estas medidas se repiten durante la época de Rosas».

En otro párrafo señala: «La Asamblea General Constituyente de 1813, que decreta la libertad de vientres, la abolición de la esclavitud, la supresión de los títulos de nobleza, otorga licencias para el establecimiento de industrias y fomenta el trabajo nacional».

Para no distraer en demasía la atención de la Honorable Cámara, solicito la inserción de los antecedentes que figuran en el trabajo de Crisólogo Larralde al que he hecho referencia, donde se consigna toda la elaboración de la legislación del trabajo en el país desde 1905 hasta la época en que se publicó el folleto.

Tampoco quiero dejar de hacer algunas reflexiones sobre la misión que nos corresponde cumplir en este momento difícil por el que atraviesa la Argentina.

No debemos engañarnos: este proyecto no es revolucionario; es, sí, una importante reforma que recoge toda la labor realizada en la materia por los distintos sectores políticos y gremiales, por la doctrina y la jurisprudencia. Nosotros

celebramos la sanción de esta importante iniciativa, pero recalco que ella no es ni representa el famoso cambio prometido ni la transformación de estructuras que el país exige. Los propios autores del proyecto admiten que si alguna pretensión no tiene es precisamente la de su originalidad.

Hay una iniciativa en el Senado propuesta por el bloque de la Unión Cívica Radical, ya aprobada por ese cuerpo, por la cual se dispuso constituir una comisión especial que proyecte los siguientes estatutos: Código del Trabajo; participación de los trabajadores en propiedad y en las ganancias; cogestión y control en la producción y colaboración en la empresa; protección contra el despido arbitrario y estabilidad en el empleo; preservación de las fuentes de trabajo; derecho de huelga y seguro social obligatorio. Llama la atención que a pesar de haber tenido ya sanción del Senado, este proyecto duerma en las carpetas de las comisiones de esta Honorable Cámara. Una auténtica transformación estructural en el campo laboral será solamente lograda cuando se cumplan los objetivos precedentemente señalados.

Sabemos bien, señor presidente, que éste es un gobierno de emergencia nacional que ha tenido que afrontar la tremenda crisis heredada; sabemos que el proceso de institucionalización es constantemente agredido por los grandes intereses preocupados en el derrumbre de las instituciones democráticas. Sabemos también que todo ello impone la necesidad perentoria de estrechar filas y de estar permanentemente prevenidos contra los enemigos del país. Sin embargo, habrá que convenir que la recuperación de las instituciones no puede ser un fin en sí mismo.

De ahí la necesidad de motivar al pueblo, de conmoverlo en lo más hondo agitando las más caras banderas de un auténtico nacionalismo. Mientras no encaremos a fondo la gran transformación esperada, la juventud tendrá todo el derecho de dudar de nuestras convicciones y de sospechar que los grandes intereses siguen moviéndose en la sombra para mantenernos en el estancamiento y en la miseria.

Señor presidente, señores diputados: seamos capaces de levantar el potencial de la fe de todo un pueblo que puede caer adormecido. Hay mayoría en el país para la liberación; hay mayoría en el país para la ruptura de la dependencia; hay mayoría en el país para enfrentar a todos los imperialismos; hay mayoría en el país para enfrentar a la oligarquía. Entonces, cabría preguntarse qué estamos esperando para comenzar la gran tarea. En 1966, invocando una revolución, se destruyeron las instituciones y la revolución no se hizo.

Ahora que el pueblo las ha recuperado, recobrando su soberanía, se trata de conservarlas no como un fin en sí mismo, sino como el medio más idóneo para canalizar las exigencias revo-

lucionarias, para producir el cambio deseado, para realizar las transformaciones que el país espera.

Más que una determinada plataforma partidaria, el 11 de marzo de 1973 el pueblo votó un proceso revolucionario, un programa de liberación nacional, cuyo cumplimiento el pueblo exige.

El radicalismo está identificado con ese proceso y con ese programa y votará las más audaces y atrevidas reformas que importen concretar las grandes banderas que el pueblo argentino ya ha hecho suyas.

Es cierto, señor presidente, que el Parlamento ha realizado una intensa labor legislativa en el rumbo apuntado por el pueblo, pero no es menos cierto que es mucho lo que falta realizar para lograr la liberación tan soñada.

Aprovechemos el mandato que nos ha otorgado el pueblo para demostrar en los hechos que es posible realizar una revolución sin sangre, desalentando así la acción subversiva y guerrillera, que especula con el fracaso de la democracia y aprovecha de la inexperiencia juvenil para alentar y promover con su canto de sirena un mundo preñado de fantásticas e ilusorias transformaciones sociales, políticas y económicas.

Que mañana, señor presidente, nadie pueda enrostrarnos que en esta instancia histórica las grandes mayorías argentinas tuvieron acceso al poder y no fueron capaces de romper la dependencia, destruir los imperialismos y lograr la liberación.

Que nadie tenga derecho a decir mañana que hemos negociado nuestra permanencia en el poder a cambio del mantenimiento de los viejos privilegios de las minorías detentadoras de importantes resortes de la economía nacional. Que solamente puedan seguir pensando en los golpes de Estado los enemigos del pueblo, los que no quieren que la revolución se realice.

Yo sé, señor presidente, que la violencia lleva en sus entrañas un afán de destrucción incontenible; que ella tiene, desgraciadamente, una dimensión universal y que es el resultado, en muchos casos, de un proceso de locura colectiva que, seguramente, ninguna reforma, por progresista que fuera, sería capaz de erradicar definitivamente. Pero no es menos cierto que la injusticia que el pueblo ha sufrido durante tantos años ha generado el clima favorable para su expansión incontrolada.

Esto no importa de ningún modo subestimar la impostergable necesidad de preservar a toda costa el proceso de institucionalización cuya prioridad nadie discute, sino legitimarlo con la realización de los cambios prometidos.

Entre otros uno de los problemas candentes es el del petróleo. Ayer mismo aplaudíamos la medida adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación, pero, como bien lo ha dicho el presidente de nuestro bloque, señor diputado Tróccoli, esto no es suficiente. Es necesario nacionalizar todo

el proceso de comercialización, producción e industrialización del petróleo argentino. En este sentido, el comité nacional de nuestro partido acaba de producir un documento histórico señalando la necesidad impostergable de nacionalizar el petróleo en todas las etapas de su procesamiento.

No permitamos con nuestro silencio y con nuestra demora que el pueblo pierda la fe que tanto necesita para defender al gobierno surgido de las urnas. Sólo una gran mística nacional, una gran voluntad y una férrea decisión de llevarlo adelante podrán contribuir en esta hora confusa de la Argentina a poner una muralla de admonición y de fe en el clima turbulento y apasionante que vivimos. (*Prolongados aplausos.*)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Ritvo.

Sr. Ritvo. — Señor presidente: pocas veces esta Cámara ha tratado un asunto de tanta relevancia como este proyecto de ley de contrato de trabajo; alrededor de este tema se ha exteriorizado un consenso amplio siguiendo el curso del debate parlamentario.

Hay, evidentemente, una coincidencia, no obstante las objeciones que se formulan en particular a algunos artículos de este instrumento jurídico, que revela que todos estamos de acuerdo en que ésta es una ley con un gran fondo revolucionario. Y digo revolucionario en el mejor sentido del vocablo, es decir, la revolución pacífica que los pueblos deben realizar a través de las leyes y que la clase trabajadora argentina organizada viene realizando desde hace décadas, utilizando los instrumentos de la ley dentro de la estructura que corresponde en el sistema en que estamos encuadrados.

Este proyecto ha de significar una nueva conquista para la clase trabajadora. Estas conquistas se mantendrán y ampliarán en la medida en que nuestra clase trabajadora, que es un ejemplo para el mundo en materia de organización, mantenga sus cuadros, los robustezca y siempre siga bebiendo en la savia de esta filosofía, de esta gran doctrina universal que es el justicialismo, para poder realizar una revolución totalmente pacífica.

La historia de la conquista y reforma de las leyes obreras y sociales de nuestro país está muy estrechamente vinculada a la acción del movimiento obrero. Basta recordar que en 1902 se hizo un intento para sancionar un código de trabajo y ello fue suficiente para que los sindicatos que por aquel entonces funcionaban y accionaban se pronunciaran en contra de esa iniciativa, pues dudaban y no tenían fe en el gobierno que por aquel entonces manejaba los destinos del país. Ello bastó para que la iniciativa se enervara y el código no fuera sancionado.

También cabe recordar que en esos comienzos del siglo hubo otras iniciativas que aparente-

mente podían dar un beneficio a la clase trabajadora y que, sin embargo, ésta rechazó. La clase trabajadora reclamaba en plenitud la libertad de organizarse y de accionar, así como también de poder actuar en política con funciones claras y precisas, para que los trabajadores, mediante el comicio, pudieran defender sus conquistas, ampliarlas y consolidarlas.

Deseo vincular toda esta evolución que se ha experimentado en el país en materia de legislación obrera a la acción de los trabajadores. Así, en la confección del proyecto en consideración han tenido activa participación los compañeros dirigentes de la Confederación General del Trabajo que, con su experiencia, su asesoramiento y aun su exigencia, han posibilitado la redacción de este despacho que, en definitiva, significa un avance en nuestra legislación obrera.

Hay problemas que quedan solucionados con la sanción de esta ley. Hay problemas que deberán resolver las provincias en un futuro, como es el caso de la ley de la jornada semanal de 44 horas que, evidentemente, a través de este proyecto se procura promover su sanción y extensión al resto del país; eso dependerá de la acción que desarrolle cada provincia. Las provincias quedan autorizadas a dictar en sus respectivas jurisdicciones las normas que incorporen definitivamente y con claridad el sábado inglés a su legislación. Es decir que podrán sancionar leyes que limiten la jornada semanal hasta 44 horas, pero entendiéndose bien que el principal deberá pagar 48, porque ése es el sentido de la ley del descanso del sábado inglés.

Cabe aquí el recuerdo de que, aparentemente, la ley del sábado inglés es una realidad vigente en el país. Hasta hace no muchos años la legislación en nuestro país olvidaba o dejaba relegada la protección al trabajador jornalizado. Es muy interesante gozar del descanso del sábado a la tarde y tener asegurado el salario, como también disfrutar de un asueto o de un feriado imprevisto, que son frecuentes en nuestro país. El empleado y el obrero mensualizados cobran sus salarios, pero la víctima de todas estas distorsiones es el obrero jornalizado que no cobra los feriados o los asuetos y que aparentemente goza de un sábado inglés, pero sólo cobra medio jornal.

Provincias como Córdoba, Mendoza y otras han sancionado leyes con auténtico sentido social, como es el de darle la retribución por las horas no trabajadas el sábado a la tarde, pero que, evidentemente, han creado, como bien lo señalara el señor diputado Araya, el problema de la competencia entre empresarios o de competencia desleal en la misma industria.

Yo anticipo que este problema quedará solucionado en el curso de este año porque, incluso, en mi provincia se están movilizandolos gremios para pedir la sanción de la ley de 44 horas semanales.

Así mismo, quiero señalar a la Honorable Cámara que estas leyes sociales a veces traen modificaciones y señalan pautas que contribuyen a que la legislación en el orden civil sea mejorada a fin de superar ciertas deficiencias que hemos heredado del viejo sistema. Aquí se incorpora una novedad en cuanto al cobro de las indemnizaciones por los derechohabientes en caso de fallecimiento del obrero o del empleado. En aquellos casos de grupos familiares mal avenidos o que tienen algunas deficiencias, al morir el titular, la indemnización no podía ser cobrada por la mujer que aparentemente había vivido como cónyuge del fallecido, tratándose de un hombre soltero o casado y separado.

Aquí se autoriza, con muy buen criterio y con un sentido de avanzada a que el derechohabiente, o la mujer que aparentemente ha vivido como cónyuge del fallecido, cobre la indemnización. Esto es importante por los derechos que protege, pero también porque va a tener su influencia, y muy decisiva, en el régimen previsional, porque ocurre —y en ese sentido hay jurisprudencia, aunque contradictoria— que en el caso del hombre que fallece siendo soltero para la ley, pero que ha convivido con una mujer durante años, que aparentemente ha sido su cónyuge legítima, deja en total abandono a quien lo tuvo a su cargo durante toda su vida. Entonces, por analogía se podría aplicar este principio para que se puedan solucionar estos problemas, que son de importancia vital para el mantenimiento consolidado de los núcleos familiares.

También esto está señalando que en alguna medida este Congreso tendrá que incursionar en el campo de la legislación civil a fin de reformarla o adecuarla para que se puedan solucionar estos conflictos familiares y no haya tanta gente padeciendo los inconvenientes que le crea una situación de familia que no se puede remediar, por causas que muchas veces están más allá del ánimo de los hombres.

Pero también quiero señalar como detalle importante de esta ley que, además de consolidar y mejorar las indemnizaciones por despido y por falta de preaviso de los empleados mercantiles y de los obreros de la industria, consolida estos derechos y amplía el monto de la indemnización, ya que el tope actual desaparece para elevarlo hasta tres veces el equivalente al importe del sueldo mínimo, vital y móvil. Deseo destacar que avanza todo aquel sistema indemnizatorio que establecen los estatutos especiales y las leyes que reglamentan la actividad de muchos gremios en nuestro país al incrementar todas las indemnizaciones en un monto del 50 por ciento.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Luis Antonio García.

Sr. Ritvo. — Creo que el país y su legislación darán un paso muy positivo con la sanción definitiva de esta ley, y tengo confianza en los re-

sultados de la vigencia y la aplicación de la ley. También tengo confianza en que esta ley funcionará para consolidar la auténtica y pacífica revolución que realizan nuestros trabajadores, porque la clase obrera organizada sabrá ser depositaria de este instrumento y sabrá hacerlo respetar, velando por su vigencia. En esa medida se podrá apreciar hasta dónde y con qué profundidad se realiza la revolución que nosotros, los peronistas, nos proponemos concretar a través de la legislación.

Aunque ya estamos al frente en materia de legislación con respecto a los demás países de nuestro continente, creo que con esto se abre el camino para que a breve plazo tengamos nosotros también el Código de Trabajo que todos aspiramos a sancionar para el país, que es absolutamente necesario, y del cual esta ley del contrato de trabajo es el mejor anticipo con respecto a la calidad y a la categoría que ese instrumento va a tener.

Y creo también que éste es un instrumento positivo para el cambio que los argentinos aspiramos a realizar, que los justicialistas aspiramos a realizar, porque con una legislación que proteja y asegure los derechos del trabajador en toda su extensión y en la mayor profundidad se pueden efectuar los cambios económicos y sociales a que aspira el país y que estén seguros los señores diputados, los vamos a llevar a cabo, porque detrás de este instrumento está el país entero y, por lo tanto, la clase trabajadora organizada que hará que ésta sea una verdadera conquista revolucionaria, en el mejor sentido de la palabra, que abrirá el camino para todas las realizaciones a que aspiramos nosotros; en primer lugar, el bienestar de la clase trabajadora. Estos son nuestros anhelos y nuestros ideales.

Con una clase trabajadora que viva sin ser explotada, el país puede hacer la gran revolución a que aspiramos y que nos señaló nuestro conductor el general Perón. (Aplausos.)

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra la señora diputada Sanguinetti.

Sra. Sanguinetti. — Señor presidente: me propongo desarrollar algunas consideraciones relacionadas con este proyecto de ley de contrato de trabajo, en lo que concierne a la situación en que se coloca a la mujer y al menor trabajadores en el marco de las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que referencian la actual situación y los objetivos de política gubernamental que ha señalado la señora presidente de la Nación.

Como ha quedado demostrado con las palabras de los miembros informantes, no cabe duda alguna de que el presente proyecto de ley busca otorgar una mayor protección con respecto a los trabajadores que desarrollan sus tareas en relación de dependencia. En general, podríamos definir tres funciones que cumple este proyecto de contrato de trabajo. La primera es ampliar los beneficios legales que actualmente

poseen los trabajadores; la segunda consiste en clarificar y resolver situaciones dudosas que se plantean en la legislación actualmente vigente; y la tercera procura otorgar nuevas garantías para afirmar la estabilidad de los trabajadores en su empleo.

El teniente general Perón, como presidente de la Nación y esencialmente como conductor y ejecutor de la voluntad del pueblo argentino, luego de su histórico retorno a la patria y al poder, definió con claridad una herramienta para la ejecución de una política de reconstrucción y de liberación nacional. Esa herramienta —y en igual forma lo ha señalado la señora Isabel Perón en su mensaje a los trabajadores del mundo en la ciudad de Ginebra ante la Organización Internacional del Trabajo— es la unidad de acción de las fuerzas sociales y económicas del pueblo argentino, con el concurso del gobierno y del Estado para lograr esta reconstrucción y esta liberación buscadas. A esta herramienta legítimamente el general Perón la denominó Pacto Social. Si es utilizada con coherencia y con exactitud, tal cual lo han señalado el general Perón y nuestra presidente, ella implica la necesidad de instaurar la justicia social como base de convivencia en una comunidad orgánica.

A esto se refiere este proyecto de ley de contrato de trabajo. Como la justicia social, base de convivencia comunitaria a la que aspiramos, es, digámoslo así, la «idea fuerza» de nuestra doctrina —incluso la que le da su nombre de justicialismo—, quisiera desarrollar dos ideas básicas en cuanto a la concepción que la doctrina justicialista tiene sobre el trabajo.

Para el justicialismo, el trabajo constituye un deber del ser humano y al mismo tiempo un derecho. Es un derecho porque el trabajo crea la dignidad del hombre y sirve de base para la realización de la grandeza de los pueblos. El trabajo es un derecho para el justicialismo porque solamente en el esfuerzo solidario y en el trabajo personal se puede edificar la comunidad libre y feliz a que todo ser humano tiene derecho, máxime que, como lo ha destacado Isabel Perón, solamente a través del trabajo el ser humano puede alcanzar su cénit y sólo por su intermedio cumple el ser humano la función de servir a la humanidad.

Pero para nosotros también el trabajo es un deber, porque en el esfuerzo individual, positivo y consciente está la base de la realización de toda comunidad organizada, y porque es justo, como lo ha señalado el general Perón, que cada uno produzca por lo menos aquello que consume o, como lo ha recordado recientemente Isabel Perón, aquella cita evangélica del apóstol Pablo cuando dice en una de sus epístolas que el que no quiere trabajar que no coma.

Por ello, hoy el movimiento peronista, al enarbolar esta realización de justicia social en sus contratos de trabajo, señala a éstos un alto obje-

tivo, que es la dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y punto de llegada del justicialismo en materia de teoría social. Y, más aún, puede hoy el movimiento justicialista exhibir el resultado concreto de esta dignificación, que hace que en nuestro país los trabajadores organizados constituyan la columna vertebral de la Nación.

Pero el movimiento justicialista no se ha limitado solamente a los principios doctrinarios, ni a enmarcar las leyes que promueve con tales principios, porque esas leyes pueden ser derogadas por otras, sino que trató de darles permanencia incorporándolas a la Constitución justicialista de 1949.

Me voy a permitir recordar los derechos especiales consagrados por la citada Constitución, que en su artículo 37, punto primero dice: «Derecho a trabajar: el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite». El punto segundo de dicho artículo 37 dice: «Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales, o sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado».

Si el movimiento peronista defendió y consolidó los derechos de trabajador, es necesario destacar que atendió y concedió privilegio permanente a la situación de la mujer trabajadora, la que también con su cotidiano esfuerzo demuestra toda su capacidad y toda su competencia en el desarrollo de las tareas manuales e intelectuales, evidenciando la injusticia de las disposiciones que establecían su discriminación respecto de la legislación que regía para el hombre.

Esta situación de la mujer trabajadora es de antigua data en la humanidad. A partir de la Primera Guerra Mundial, alrededor del año 1914, comenzó una era de sucesivas transformaciones en lo que hace a la participación de la mujer en las tareas de la sociedad, en parte porque el hombre se encontraba en el frente de batalla y la mujer comenzó a capacitarse y a asumir no sólo las tareas de tipo productivo, sino las que hacen a la función pública, la cátedra universitaria, el Parlamento y la judicatura.

En nuestro país, este proceso también fue sumamente complejo y penoso para la mujer. Voy a dar lectura de lo que decía, a fines del siglo XVIII, Manuel Belgrano, entonces secretario del Consulado de Buenos Aires, en la «Gaceta de Comercio», en cuyos artículos —prácticamente diarios— reflexionaba acerca de la si-

tuación de la mujer. Decía así: «Yo suplico al lector que examine cuáles son los medios que tiene la mujer para subsistir, qué rama de industria hay a la que se pueda aplicar y que le proporcione ventajas, y de qué modo puede reportar utilidades su trabajo, y estoy seguro que a pocos pasos que dé en esta empresa, el horror le retraerá y no podrá menos que lastimarse conmigo de la miserable situación del sexo privilegiado, confesando que es el que más se debe atender por la necesidad en que se ve sumergido».

Sin embargo, estas palabras de Belgrano fueron medianamente escuchadas y recién cien años después, en 1926, se sancionó la ley 11.357, en virtud de la cual la mujer argentina es considerada capaz civilmente. Siendo mayor de edad y cualquiera fuera su estado civil, la mujer podría ejercer por sí todos los derechos y todas las funciones civiles que le correspondían al hombre.

Esta ley brindó parcialmente la posibilidad de que la mujer ejerciera cualquier actividad lícita fuera del hogar. Y digo parcialmente, porque el ejercicio de tales derechos quedó siempre determinado por las condiciones de la realidad económica, que fueron las que le establecieron sus verdaderos límites, porque no sólo la realidad económica social impidió la equiparación de la mujer, sino que, más aún, favoreció su explotación social por quienes encontraron en la mano de obra femenina la fuerza del trabajo necesaria para provocar la reducción de los salarios que ya eran bajos para el hombre.

Frente a esa situación, el que era entonces coronel Perón proclamó el 3 de octubre de 1944: «Poco será cuanto se haga para evitar la explotación en el trabajo de las mujeres, pues son ellas las que contribuyen a ampliar con su esfuerzo el campo de la producción, asegurando la vida honesta y digna a sus hogares». Y fue también el justicialismo el que, al mismo tiempo que amplió las posibilidades laborales de la mujer, aseguró su dignificación mediante el establecimiento de una legislación adecuada y de un control que asegure el cumplimiento de tales normas de derecho.

Quiere decir entonces que tanto en la ley como en la práctica social, y tanto en el principio doctrinario como en la realización y ejecución de esos principios, la mujer trabajadora encontró en Perón y en Eva Perón la consideración a la cual con su esfuerzo se hizo acreedora. Y por ello hoy la mujer argentina, que con la futura sanción de este proyecto de ley conquista un importante lugar y una importante dignificación dentro de la sociedad, debe saber también que ello se ha logrado mediante su esfuerzo, mediante el esfuerzo de miles de compañeras trabajadoras que, adheridas a la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista, hicieron posible esta conquista. Y que no solamente se dignifica socialmente como mujer, sino que este proyecto también le otorga el reconocimiento de menor y a la familia, porque

todos comprendemos que armonizando las necesidades y exigencias a veces contradictorias, no antagónicas, pero sí contradictorias de la mujer como madre, como esposa y como trabajadora, defendemos a la familia como célula básica de nuestra comunidad.

Sostenemos la constitución y la existencia de la familia, las que están íntimamente vinculadas al ejercicio de todas sus funciones sociales, ya que nuestra doctrina afirma que es en el seno de la familia en donde el ser humano recibe las bases de su futura formación cultural, social, económica y política, y que es la familia —fundamentalmente la madre— la que pone en ejercicio el contenido social que todo ser humano posee.

Es decir que, como afirma nuestra doctrina, es en la familia, a la que nosotros protegemos, donde primero se desarrolla la personalidad social y la conciencia social del ser humano. Fruto de estas consideraciones es el artículo 187 del presente proyecto de ley, en el que se establece que no podrá consagrarse ninguna discriminación laboral hacia la mujer, garantizándose el principio sostenido por la rama femenina del movimiento peronista, por todo el movimiento obrero y por nuestra doctrina, de que a igual trabajo debe corresponder igual salario.

En el artículo 189 también se protege a la familia al hacer posible por medio de la legislación laboral una armónica relación de la mujer con su esposo y sus hijos, pues se prohíbe ocupar a mujeres en tareas nocturnas, excepto en aquellas ocupaciones de naturaleza no industrial que deban ser preferentemente desempeñadas por mujeres.

Así mismo, el artículo 192 prohíbe ocupar a las trabajadoras en tareas penosas, peligrosas o insalubres, y lo mismo se dispone con respecto a los menores.

En virtud del artículo 193 se otorga a la mujer una licencia de 45 días anteriores y de 45 días posteriores al parto, pudiendo optar la interesada porque se le reduzca la licencia anterior al parto a 40 días, acumulándose el resto al período posterior al parto. En caso de que estas disposiciones no se cumplan, la ley prevé una indemnización equivalente a un año de remuneraciones más lo que corresponda por despido injustificado.

Además, el artículo 195 establece que toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos descansos de media hora durante el transcurso de la jornada laboral, para amamantar a su hijo.

El artículo 199 del proyecto consagra una conquista fundamental, propugnada en un proyecto que varios legisladores presentamos a la Honorable Cámara, y que la decisión de la señora presidente ha ampliado maravillosamente. Se trata del período de excedencia, no inferior a seis meses ni superior a un año a contar de la fecha del nacimiento del niño, para que la ma-

dre pueda atender a su cuidado. La ampliación a que me refería atiende a la situación de la madre trabajadora en relación de dependencia que tuviere un hijo enfermo menor de edad, en cuyo caso también se reconoce el derecho de acogerse al beneficio de excedencia.

Con respecto a los menores, queda prohibida la ocupación de los menores de 14 años, aunque sea en actividades sin fines de lucro, y rigen para aquellos que tuvieran entre 14 y 18 años prohibiciones semejantes a las que se han establecido para la mujer con respecto a las tareas nocturnas. Así mismo, se establece que el empleador deberá gestionar una libreta de ahorro en la institución de ahorro oficial —en este caso, la Caja de Ahorro y Seguro— para depositar el diez por ciento de la remuneración mensual que corresponda al menor.

A mediados de 1973, el general Perón e Isabel Perón, antes de ser electos presidente y vicepresidente de la Nación, convocaron a la mujer argentina al Teatro General San Martín y tuvo allí lugar un diálogo ideológico entre el conductor de la Nación y las mujeres argentinas. Frente a la situación de un país enfermo de infrapoblación e infraproducción, el general Perón reclamó el ingreso de siete millones de brazos femeninos en la tarea productiva. Pero todas entendimos que ese esfuerzo social que debía ser desarrollado por la mujer no sería en modo alguno en desmedro de sus funciones de madre y esposa, que son también funciones sociales. Nos señaló además que correspondía a la mujer una gran tarea, quizá la más importante, que es la reconstrucción del hombre argentino y, fundamentalmente, la reconstrucción de su moral.

El presente proyecto de ley, específicamente en lo que hace a las normas que consagra con respecto a la mujer y al menor, nos hace pensar a las mujeres argentinas que gracias a esta decisión de los trabajadores organizados, al accionar de la rama femenina y a la firme voluntad puesta de manifiesto por la señora Isabel Perón, también para las mujeres la justicia será, como ha dicho el poeta italiano, la alta esperanza de los siglos venideros. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (García).— Tiene la palabra el señor diputado Moyano.

Sr. Moyano.— Señor presidente: voy a hacer esta breve exposición para considerar algunos aspectos que me parecen de interés desde un punto de vista federal, pensando en las provincias, y acerca de algún asunto substancial que a nuestro criterio debió haber sido contemplado en este proyecto y que no lo está.

En este largo debate se han pronunciado medulosas exposiciones de colegas nuestros especialistas en la materia, que prácticamente han agotado la cuestión desde un enfoque jurídico.

No voy a retacear la ponderación que me merece este proyecto por la circunstancia de que

no sea revolucionario o por no constituir el código de trabajo que aspiramos se dicte algún día. Creo que es un esfuerzo digno de ponerse de manifiesto, principalmente de ordenamiento jurídico, que será útil para la debida comprensión, estudio y aplicación de una temática normativa tan importante como lo es la legislación laboral.

No podemos calificar jurídicamente esta iniciativa ni como recopilación ni tampoco en el nivel de código; por otra parte, los autores del proyecto no se atribuyen esta última intención.

El proyecto de contrato de trabajo se asimila más, según mi entender, a una consolidación de disposiciones normativas, tal como se la conoce en el ámbito jurídico. Digo esto por cuanto las recopilaciones son el aglutinamiento desordenado de disposiciones legales de diversa índole, en un momento y en un país determinados. Codificar es algo muy diferente; es el ordenamiento sistemático y exclusivo, con una unidad característica, de un aspecto del derecho, que se hace a los fines de unificar la temática, facilitando así su aplicación, lo que tiene efectos políticos trascendentes, como lo demuestra el movimiento general de la codificación del siglo pasado, que contribuyó a afirmar el principio de la nacionalidad de los pueblos.

Ubico el proyecto en consideración más aproximado a una consolidación, porque constituye un ordenamiento de normas jurídicas laborales que en su inmensa mayoría ya están vigentes a este momento. Es un ordenamiento sistemático, porque acá hay un método que ha inspirado al legislador y además porque unifica en una sola sanción legal todo lo que fue anteriormente un catálogo desordenado de normas jurídicas laborales que hacían sumamente complejo el estudio de la materia y su aplicación por parte de los jueces.

En materia de derecho laboral, debemos decir que a esta altura de los tiempos no podemos considerarla como una mera bandera política. Reconozco, sin embargo, el derecho de invocar la paternidad de algunas o de muchas normas por todos los sectores, diría yo. Pero en este momento del siglo XX que vivimos, el derecho laboral tiene por sí, desde hace años, categoría de institución jurídica valiosa, para sacarlo de la mera especulación valorativa que tienen las postulaciones políticas puras. El derecho laboral está preñado de política, como está preñado de política todo derecho, pero ya pertenece a una categoría jurídica reconocida e indiscutida en todo el mundo, porque en todas partes ha debido legislarse sobre este derecho.

Resulta ocioso, resulta falto de interés hablar vituperando la concepción de la locación de servicio cuando nos referimos al trabajo humano, porque va de suyo que todos estamos convencidos de que el trabajo es consubstancial con la dignidad de la persona humana y merece tener una legislación protectora, a la que debe asignársele la trascendencia de norma tuitiva.

Destacamos la conveniencia de codificar esta materia tal como lo prescribe nuestra Constitución Nacional y esperamos que se esté trabajando en los organismos especializados del Poder Ejecutivo en el proyecto correspondiente. Esta tarea que se ha iniciado aquí será, cuando la cumplamos, un paso positivo en cuanto al ordenamiento de normas y en cuanto a la consagración de los principios actuales que va demandando la evolución natural y pacífica de las instituciones.

Quiero poner de manifiesto un aspecto que, a mi juicio, constituye un avance sobre el federalismo, no por parte de este proyecto sino de una disposición anterior que se ha consagrado por este Poder Ejecutivo, que es la que establece que la autoridad de aplicación de las normas laborales es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros oportunamente efectuamos la crítica de esta medida de gobierno, que puede haberse dictado con la inspiración de centralizar la interpretación de la normatividad jurídica laboral a través del Ministerio de Trabajo, pero que evidentemente avanza sobre el poder de policía provincial de modo violatorio de la Constitución Nacional, e inconveniente para los intereses del propio trabajador, porque desde las provincias, desde los órganos de policía provincial, resulta más constructiva la tarea de policía de trabajo y más expeditivo el tratamiento de cada caso en particular.

Los hombres del lugar, no sometidos a la autoridad del poder central de la Capital Federal, tienen a su alcance remedios más rápidos y expeditivos, por el conocimiento que se posee de los casos lugareños para hacer funcionar de manera más ágil y dinámica las normas del derecho laboral.

Esto lo podemos decir los provincianos que hemos visto funcionar a nuestros respectivos departamentos provinciales de trabajo en forma paralela con las delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. En aquéllos, el trabajador provinciano tenía un amparo directo e inmediato, y en éstos, por encima de la buena voluntad de los funcionarios delegados, la tarea en todo caso se hizo siempre pesada y difícil. Y esto ocurre de manera notoria a medida que nos alejamos de la Capital Federal hacia el interior.

Por ello, no quería dejar pasar esta ocasión sin señalar nuestra discrepancia, sobre todo cuando el artículo 99 del proyecto de ley consagra expresamente que la autoridad de aplicación de estas normas será el Ministerio de Trabajo nacional.

En relación con otro tema, también dejamos constancia de que este proyecto se ha quedado corto en materia de duración del trabajo, porque no sólo no trae al debate la temática moderna, que deberíamos estar considerando de la reducción de la jornada de trabajo a treinta y seis o a cuarenta horas semanales, sino que

ni siquiera consagra para el ámbito de la Nación lo que ya es ley desde hace muchos años en varias provincias argentinas. Esto lo ha señalado muy bien el señor diputado Arraya.

El 31 de diciembre de 1932 se dictó en la provincia de Mendoza la ley 1.002 de sábado inglés, que consagra la jornada de cuarenta y cuatro horas semanales de trabajo, con el aditamento del pago como si fuesen cuarenta y ocho horas, lo cual implica un aumento en la remuneración del 9,1 por ciento.

Creemos que el adelanto de la técnica tiene que repercutir en el trabajo, acortando la jornada de labor. Y esto no tanto porque sea más compleja la tarea del hombre cuando maneja la máquina, sino porque en el esfuerzo por dignificar el trabajo, debemos tener presente que es parte substancial de la labor humana las varias horas que deben dedicarse al descanso, a las vacaciones, y que nosotros hemos apuntado hace relativamente poco tiempo a que cierto sector de trabajadores, por la índole de sus tareas, tengan una jornada de treinta y nueve horas. Me refiero al proyecto de ley que hemos presentado con el señor diputado Sileoni para fijar la jornada de trabajo de los empleados de comercio, que esperamos sea sancionado a la brevedad por esta Cámara, tal cual lo hizo oportunamente la Legislatura de mi provincia.

Hay dos temas que hacen substantivamente al contrato de trabajo que debieron haber sido legislados, porque están en el ánimo y en la inquietud de todos los señores diputados: la co-gestión y el seguro de desempleo.

Pensamos que la co-gestión empresarial se debe incorporar a la legislación argentina. No me refiero meramente a la participación de los obreros en las utilidades de la empresa que ha incorporado este proyecto, sino a la co-gestión como instituto que traza el camino de la coparticipación de responsabilidades en el manejo de la empresa.

La empresa no pertenece exclusivamente al capitalista que aporta los recursos mayoritarios para fundarla, sino que la concebimos como la conjunción de esfuerzos de quien aporta el capital, de quien dirige esa empresa colaborando con el propietario, y de quien labora en todos los niveles aportando su esfuerzo muscular o intelectual para la consecución de los fines lícitos para los cuales ella fue fundada.

En la coparticipación de responsabilidades habremos de encontrar mejores resortes de control y de éxito para la consecución del fin buscado. También creo que significará un elemento de juicio valedero para la solución de los conflictos internos del trabajo, por cuanto coparticipar en la responsabilidad de la dirección de la empresa hará también coparticipar a todos en la responsabilidad que tienen en la provocación de conflictos, sea desde la dirección o sea desde las comisiones internas de trabajo.

Creemos que esta iniciativa, como ya lo dije anteriormente, está en el ánimo de todos los señores legisladores y habremos de concretarla en una ley antes de que concluya nuestro mandato en 1977.

En materia de desempleo, flagelo que todas las comunidades pretenden superar, que constituye la preocupación permanente del ser humano en cuanto a la inseguridad de su propio futuro, pero que en lo que hace a quien está sin empleo constituye el drama de vivir la inseguridad de su propio presente, para él y para su familia.

Debemos, en este período legislativo que concluye en 1977, y para el que hemos sido elegidos por el pueblo, procurar dar sanción a la ley de seguro de desempleo, tal como lo solicitara el senador de mi partido, doctor Frúgoli, a fin de que de una u otra manera se vaya dando un paliativo para aquellos sectores que están sin la debida protección del Estado y sin la debida protección comunitaria en cuanto a ese elemento tan fundamental del hombre, cual es su propia seguridad y la de su familia.

Creemos que en esta materia no debemos centrar la discusión en que sean las empresas las que hagan los aportes para el fondo de desempleo, teniendo en cuenta el número de sus empleados o bien su propia productividad. Entiendo que debemos lanzarnos al ensayo de esta legislación que, sin duda, será un aporte importante para la evolución de las instituciones laborales y, sobre todo, una contribución fundamental para la pacificación de nuestra sociedad, porque la violencia está inspirada muchas veces en el resentimiento que provoca la impotencia para ir hacia adelante, y esa impotencia está siempre presente en el hombre que no tiene trabajo o que sabe que su ocupación durante el año es el trabajo de la golondrina.

Creo que estas dos iniciativas que proponíamos —sin pretender colocarlas en el marco de lo revolucionario, ya que están consagradas en otras legislaciones del mundo— constituirán un cambio de los que queremos ensayar los argentinos; un cambio que sea base del entendimiento y de la concordia que necesitan las instituciones para ser eficaces.

Quiero terminar, señor presidente, expresando nuestra satisfacción por este proyecto, que reconozco es perfectible, pero que, en definitiva, es un gran aporte a la legislación argentina.

Hubiese deseado que la preocupación que han demostrado los sectores de la mayoría para lograr la sanción de este proyecto —que seguramente hoy se producirá— en lo referente a la protección del trabajador, se hubiese compadecido también con el tratamiento del tema de la prescindibilidad del empleado público. Esto ya se dijo por otros oradores, pero creemos que todos los trabajadores argentinos tienen derecho a la estabilidad en sus empleos, porque es un derecho natural que el Estado tiene el deber de

proteger, ya que uno de los grandes problemas humanos, tal vez el más importante, es el de la propia seguridad en el trabajo, para sí, para su familia y para el futuro.

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra el señor diputado Lucena.

Sr. Lucena. — Señor presidente: con singular emoción e incontestable apasionamiento entro a la consideración de este proyecto de ley.

Es caro a nuestra filosofía y a nuestra cosmovisión todo lo inherente al trabajo y, con mayor razón, en lo tocante a sectores de población disminuidos, desposeídos, porque un sistema jurídico e institucional perimido los puso en situación de inferioridad o desigualdad.

El proyecto, como bien lo han dicho los miembros informantes de la mayoría como lo deja traslucir el mensaje del Poder Ejecutivo, y como lo han acotado algunos otros expositores de las bancadas no oficialistas, es un esfuerzo tendiente fundamentalmente a crear o recrear en una nueva dimensión la dignidad del trabajo y fortalecer el amparo de su ejercicio libérrimo, legítimo y compensatorio.

Evidentemente, el proyecto tiende también con toda justicia a avanzar más en un proceso de sustitución de una sociedad liberal que fue la que imprimió el sello a la Argentina finisecular y de comienzos de este siglo para llevarla a una concepción dada por la mayoría a un Estado justicialista pero que en término teóricos y genéricos más amplios significaría el paso a un Estado no liberal, un Estado que supera las pautas y modelos que conformaron el Estado liberal, para llevarnos hacia una nueva coyuntura, hacia una nueva conformación social que permita no solamente una visión para los argentinos, sino la fijación de nuevos objetivos y fines que hagan posible dejar para siempre atrás a la Argentina encasillada en los cánones de un Estado gendarme, para pasar a ser realmente dinámico y promotor, fundamentalmente, del bien común, a fin de dinamizar todos los sectores esenciales de la sociedad, para que todos y cada uno de ellos se sientan partícipes y protagonistas de la realización total de la comunidad nacional. En ese sentido, pues, es plausible que este proyecto intente avances como elaboración forzosa para ir plasmando un nuevo modelo.

Es lamentable, sin embargo, decir que tanto en la elaboración del marco teórico que presenta el Poder Ejecutivo, así como también en la redacción concreta de las normas, el proyecto queda a mitad de camino en cuanto a las aspiraciones del gobierno, y que no se compadecen las exposiciones teóricas, doctrinarias e ideológicas de algunos expositores de la mayoría, con las cuales coincido totalmente, en relación con lo que en definitiva resulta plasmado en las normas positivas. Es decir que el sistema institucional que estamos tratando dista de reflejar en su totalidad la cosmovisión que el justicialismo ha querido imprimir a este proyecto, a fin de que sirva de pauta orientadora después, como

un elemento integrador más del proyecto total nacional que la Argentina tiene formulado como un desafío histórico para constituirse en líder de la solidaridad y de la comunidad americana en el año 2000.

Sin embargo, eso no me desanima sino que, por el contrario, me alienta al ver allí el germen, el núcleo central, donde todos los argentinos nos agruparemos en torno a esas pautas ideológicas y esa cosmovisión expuesta por los oradores que —repito para subrayarlo quizás abundantemente— no se traduce en todo el contexto de la ley, y me alienta porque significa saber que tenemos un punto de partida común, en el cual todos los argentinos estamos convocados para un trabajo y un esfuerzo de realización destinado a elaborar ese proyecto nacional que nos dé el perfil definitivo de lo que queremos y que es lo que se ha dado en llamar la Argentina Potencia.

¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en ese punto de partida cuando reiteradamente en el recinto los expositores y sostenedores del dictamen de mayoría han dicho que está enmarcado en un cuadro filosófico que responde a una cosmovisión humanista, cristiana y personalista. Estamos totalmente consubstanciados con esto, porque como acabamos de decir, se trata de un esfuerzo realmente plausible para dar por definitivamente clausurado el proceso de un Estado que ha distorsionado la realidad del país y nos abre la perspectiva de poder elaborar un nuevo modelo de Estado en función de una nueva concepción, en la que rigen las pautas fundamentales con las cuales nosotros estamos consubstanciados.

Sin decirlo expresamente, en el espíritu del mensaje y proyecto y de las exposiciones está el pensamiento de que en el Estado del futuro que ha de regirnos deben incluirse necesariamente, como principios rectores de esa labor promocional que le corresponde, los principios de solidaridad, de socialización, de humanidad y de participación, todos ellos entendidos en el cabal concepto técnico de las palabras. Se trata, entonces, de una sociedad pluralista, democrática, participante, socializadora y emancipadora de la dignidad del hombre.

Por eso, nuestra bancada, dentro de ese marco teórico y de esa cosmovisión que anima a todo el proyecto, no puede menos que apoyarlo fervientemente.

Nosotros creemos que este proyecto nos da la prueba cabal, por un lado, de que ha llegado a un punto de madurez en el pensamiento argentino la necesidad del cambio estructural del país. Pero también nos demuestra cabalmente que no hemos avanzado lo suficiente, ni hemos desarrollado lo necesario la elaboración concreta de las pautas que fijen el marco normativo positivo de esa nueva cosmovisión y concepción. Los intentos en el campo de la literatura del ensayo, desde las cátedras universitarias o desde los centros de altos estudios significan, evidentemente, esfuerzos positivos para poder arribar

a tan urgente tarea y magna labor. Pero, en una actitud sana y humilde de autocrítica, nuestro Parlamento debe incentivar el esfuerzo de una manera acelerada, ansiosa y sin pausa, para dar cuanto antes con todas esas pautas y requisitos que permitan configurar la concepción de una nueva sociedad, de un nuevo Estado, en la cual podamos realmente nosotros generar y dar luz a un nuevo hombre argentino, con una nueva dimensión, y así poder dar lugar al nacimiento de instituciones y de institutos del trabajo que realmente signifiquen una verdadera revolución en nuestro país.

No voy a pretender en este momento, por ser abundante y ocioso, detenerme a explicar por qué no significa toda esta plasmación positiva un cambio revolucionario. Muchos oradores que me han precedido en el uso de la palabra lo han apuntado. Así mismo, lo han reconocido los propios autores en el tratamiento cordial, directo y franco del diálogo en la mesa de trabajo de la comisión legislativa.

De modo, pues, que simplemente valga lo dicho en esta introducción de carácter teórico como una aspiración de avanzar hacia la formulación de un modelo y para dejar sentada nuestra insatisfacción con el proyecto en el que pudiéndose haber hecho más no se ha hecho, en el que pudiéndose haber tenido más audacia no se la ejerció, en el que pudiéndose haber dado testimonio de que realmente un pueblo se ha convertido en conductor y propietario del destino de las decisiones gubernamentales, no lo hizo en la medida en que estaba obligado y a la altura de su oportunidad histórica.

Pero —repito— lejos está eso de desanimarnos, sino, por el contrario —y particularmente al que habla— nos crea un incentivo acuciante para que intensifiquemos esta labor, a fin de que podamos realmente lograr las conquistas no solamente en el sector laboral, sino en todos los aspectos sectoriales de la vida social del país, para que de una vez por todas podamos superar todos estos estados conmocionales de insatisfacción que conmueven al país, que crean desazón, incertidumbre y, muchas veces, desgraciadamente, cierto escepticismo para nuestras instituciones.

Con viva satisfacción hemos leído que el señor ministro del Interior, doctor Rocamora, quien fuera nuestro compañero de trabajo en el recinto, ha reafirmado el propósito de realizar una convocatoria para la reforma constitucional. Ningún sector político y social, representado o no en este recinto, puede dejar de admitir que la Constitución no es intangible, sino que por el contrario necesita la incorporación, la inyección, de savia nueva, que está recogida muchas veces con carácter jurisprudencial o, simplemente, por los hechos o los usos constitucionales, de una serie de institutos que evidentemente contribuyen a plasmar ese nuevo proyecto al que nosotros aludimos.

Nos hubiera agradado, señor presidente, que el proyecto en tratamiento —desde la perspectiva del Estado— deshiciera un poco esa imagen paternalista que tiene para con el sector laboral. Nos hubiera agradado más que lanzase al sector laboral a una función protagónica, de autodesarrollo, de incentivos, para crear, recrear y perfeccionar los institutos laborales que le permitieran liberarse, de una vez por todas, de las tutorías tanto públicas como privadas. Sin embargo, en ciertos institutos de la legislación encontramos esa actitud paternalista que no se compadece con la filosofía expuesta.

El proyecto, además de lo que acabo de decir, refleja aparentemente una contradicción entre el afán de no constituirlo en una simple ley, como lo que realmente es, y el de darle una jerarquización mayor, ya que en algunos casos pretenciosamente se pretende vincularlo a un verdadero código de trabajo.

Si bien es cierto que nadie lo ha afirmado categóricamente, pareciera ser que este proyecto constituiría —como ha dicho uno de los miembros informantes de la mayoría— el hito necesario para que podamos considerar de aquí en adelante la legislación de un código de trabajo.

La sistematización del proyecto, la estructuración de ciertos institutos, la confusión de ciertos conceptos, la deficiencia de algunas redacciones, que son observaciones menores, que son evidentemente situaciones de carácter no substancial o fundamental —y es por eso que apoyamos en general el proyecto en consideración—, hacen que estemos lejos de considerar la pretensión de que se haya elaborado un verdadero vademécum, para que de allí en adelante pueda dictarse o elaborarse realmente un código del trabajo. Como verificación de lo expuesto basta decir que por un lado se pretende conceptualizar ciertas instituciones laborales, y por otro se cae en ciertas partes del proyecto en un casuismo propio de la reglamentación administrativa o de las normas procesales.

Ayer he escuchado con satisfacción la exposición del señor diputado Arraya, sobre aquellos aspectos en que se pretende conceptualizar ciertos institutos, como ocurre en los primeros artículos del proyecto con respecto al trabajo, a la empresa, al empresario, al establecimiento, al contrato de trabajo y a otros institutos.

Yo adhiero a la fundamentación filosófica con la que el señor diputado Arraya puso en evidencia las falencias de ese desarrollo conceptual que se pretende insertar en el proyecto. Los diputados de esta bancada hubiéramos preferido, no porque lo eludamos sino porque las exigencias del tiempo y del programa político del Poder Ejecutivo así lo imponen, no detenernos en calificar las ideas. Como acertadamente lo expuso en su último mensaje del 1º de mayo el general Perón, califiquemos internamente nuestras ideas para que recién elaboremos nuestros proyectos.

Es evidente que en esas conceptualizaciones —no obstante haber coincidencias en cuanto al núcleo de la cuestión— faltaban la elaboración, la precisión y el pulimento necesarios y la determinación de lo que queremos para una sociedad nueva.

Deliberadamente, en la mesa de trabajo de las comisiones evitamos ese trabajo esclarecedor de las ideas que nos hubiera permitido elaborar los marcos de referencia para que los diversos institutos laborales sirvieran de punto de partida para la elaboración de la futura legislación del derecho del trabajo.

Creemos sinceramente que, en honor a la actitud de posponer ese esclarecimiento, hubiera sido preferible en algunos casos erradicar del proyecto toda pretensión de definición.

Anticipamos nuestra disconformidad con la forma en que están redactados algunos conceptos, en primer lugar porque no se compadecen con la filosofía expuesta reiteradamente por el justicialismo. Afirmamos de manera categórica que la sociedad del futuro ha de ser pluralista, personalista, humanista y cristiana; y dentro de esa concepción filosófica, debemos elaborar con audacia e inteligencia todos aquellos elementos conceptuales de carácter fundamental con los que habremos de manejarnos para que, de aquí en adelante, los argentinos utilicemos un lenguaje común, una expresión común que signifique el logro de una unidad nacional y de la consolidación de una concepción unitaria del país, de tal suerte que conforme a la Nación verdaderamente en una personalidad única y avasalladora, en el mejor sentido de la palabra, dentro del concierto americano.

Decíamos que desgraciadamente no se compadece, porque las definiciones y los conceptos dejan escapar un cierto sabor de la forma cultural que quedó sellada y grabada en nuestra Argentina en los últimos cien años. Todavía los argentinos de hoy no hemos podido desprendernos de la formación especial que, siguiendo al maestro Freire, se llamaba «la educación bancaria»; no hemos podido despojarnos de esa conformación liberal del siglo pasado. Todavía no hemos aprendido a plasmar nuestro propio lenguaje, que recoja las expectativas y las ansiedades de nuestro pueblo; todavía no hemos podido uniformar nuestra expresión y nuestra comunicación con todos los sectores del país en un lenguaje moderno y acorde.

Nosotros reconocemos honradamente que el proceso que ha inaugurado el peronismo en el país nos da la posibilidad de tener allí los elementos de juicio necesarios para trabajar en la elaboración de tal lenguaje, en ese modo de comunicación y en esa conformación de esa sociedad moderna.

Pero, repito, las notas conceptuales que figuran en el proyecto lejos están de satisfacer dicha cosmovisión. Por el contrario, en algunos aspectos todavía se mantiene la vieja antítesis de

capital y trabajo. No se termina con la consideración del trabajo como una mercancía o simplemente como una cosa a la cual le es debida una contraprestación en dinero; no se terminan de superar las antinomias de divisiones sectoriales que permiten dar cabida después, como contrapartida, como antítesis, a la elaboración de doctrinas reñidas con el sentir nacional, facilitándose la reelaboración de nuestro modo de vida a partir de una perspectiva evidentemente antitética, que nada tiene que hacer con nuestra trayectoria cristiana y humanista.

Tampoco se desliga definitivamente de cuál es el concepto de empresa que debe regir y cuál es el sentido protagónico del trabajo dentro de aquella, ni de esos modelos que hemos tomado de una manera desgraciada, como si tuviéramos una *capitis diminutio*. No nos hemos liberado de aquel nefasto sistema del *white collar system*, o del sistema de los *managers*, al determinar la categoría de los empresarios, representantes directos o por interpósitas personas, con lo cual evidentemente está lejos de estas concepciones nuevas que nosotros queremos plasmar.

Por todos estos motivos, entendemos que este proyecto debè servirnos para saber que es lo que queremos, pero fundamentalmente para advertir los grandes vacíos que debemos llenar y que la urgencia de los tiempos y las exigencias de los sectores sumergidos nos plantean con una requisitoria realmente de fuego. O somos capaces de darles satisfacción o no habremos cumplido con la misión histórica de este Parlamento de brindar la solución que más de un ochenta por ciento de los argentinos votó para que nosotros la diéramos. El desafío todavía está abierto. Aquí está la prueba de la alternativa de hierro que nosotros tenemos que afrontar. Dios quiera que este Parlamento tenga el coraje y la fuerza suficientes para no cejar en el esfuerzo de arribar a la meta deseada.

Sr. Presidente (García). — La Presidencia hace notar al señor diputado que ha vencido el término correspondiente a su exposición.

Sr. Lucena. — Señor presidente: deseo informarle — a la vez que solicito la benevolencia de la Honorable Cámara—, en primer lugar, que no se encuentran todavía en el recinto varios oradores anotados; y en segundo lugar, que soy miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo y que he presentado un despacho en disidencia que obra en Secretaría. Por lo tanto, encarezco a la Presidencia, con la venia de la Honorable Cámara, que me asigne el tiempo suficiente para formular algunas aportaciones o aportaciones al proyecto.

Sr. Presidente (García). — Ruego al señor diputado que sea lo más breve posible.

Sr. Lucena. — Así lo haré, señor presidente.

Para satisfacer la exigencia de la limitación en el tiempo, pido excusas a la Cámara por no poder exponer mis aportaciones o aportaciones,

como he dicho, en forma ordenada y sistemática. Sólo he de seleccionar algunos puntos o institutos fundamentales, sin perjuicio de que en la oportunidad del tratamiento en particular se nos permitan brevisimas fundamentaciones a algunos artículos con observaciones de menor cuantía, pero que son necesarias para mejorar —ésta es nuestra intención— el amparo legal al sector laboral.

No repito aquí, por ser innecesario y porque me solidarizo con ello, todos los avances positivos y las verdaderas conquistas que el proyecto contiene. Por lo tanto, quedo relevado de hacer el detalle minucioso de lo que, con gran satisfacción, nuestra bancada apoya como verdaderos aportes o adelantos de este proyecto de legislación laboral.

En primer lugar, voy a seleccionar una media docena de puntos del proyecto, y si el tiempo me lo permite avanzaré respecto de otros.

En el artículo 155 del proyecto, que habla de los recaudos para darle seguridad al trabajador en la percepción de la contraprestación que le es debida, cuando se habla de los recibos por separado se incluye también lo que corresponde a indemnizaciones debidas al trabajador con motivo de la relación de trabajo o su extinción. Nosotros creemos que este tema de las indemnizaciones está sujeto a una previsión y estamos de acuerdo cuando dice: «Ello en la medida que no medie una autorización administrativa facultando al empleador a usar un recibo único».

Es por todos conocido, y más concretamente para los hombres de derecho que nos dedicamos a la materia laboral, como también por los jueces y magistrados que entienden en casos laborales, cómo se distorsionan la justa reparación e indemnización y el cobro de lo que le es debido al empleado o al obrero después de haber finalizado un pleito en el cual se condena al empleador y gana el juicio el trabajador.

Por eso vamos a recoger esta experiencia, que nace de nuestra propia actividad profesional, de nuestras conversaciones con otros colegas y de ponencias o conclusiones de congresos internacionales, para presentar una redacción a fin de que sea insertada como párrafo final, recogiendo la inquietud de un gran magistrado de la justicia laboral, con una trayectoria de más de 15 años en nuestra provincia. Me refiero al doctor José Alberto Cabuñas González, quien nos ha inspirado la redacción del agregado que proponemos para el artículo 155, que dice así: «Las deudas del empleador provenientes de la falta de pago, en los términos, modos y plazos fijados en esta ley de las remuneraciones del trabajador, indemnizaciones por despido o falta de preaviso, originadas en una conciliación extrajudicial o judicial, o en el caso de sentencia judicial, deberán depositar su importe y los intereses que se hubieren devengado a nombre del dependiente o de sus derechohabientes, en el

tribunal laboral de turno competente, en los dos primeros supuestos, y en el que se tramita la causa en el restante.

»La autoridad judicial competente efectuará el pago directamente, mediante cheque judicial, a nombre de quien correspondiere, según los supuestos previstos en el párrafo anterior.

»Todos los pagos que los empleadores hicieren directamente al dependiente o a sus derechohabientes, en los casos previstos en este párrafo no los liberará de sus obligaciones, siendo nulo y carente de eficacia como remedio extintivo de las mismas.»

Con este párrafo pretendemos superar ciertas corruptelas en lo que hace al amparo legítimo de las prestaciones debidas al trabajador por sentencia judicial o por arreglos extrajudiciales o conciliatorios. De esta manera, sobre todo en nuestra realidad provincial, podremos garantizar a nuestro trabajador sus indemnizaciones y los intereses debidos, pues no reciben la cantidad que por sentencia judicial le ha sido acordada.

El proyecto también incluye —gracias a la benevolencia y a la sensibilidad de la comisión en lo que respecta a la caracterización del salario mínimo, vital y móvil—, como elemento integrante para considerar la determinación de este salario, la educación del trabajador. Bien lo ha dicho el señor diputado Ponce: sin una base de educación, sin garantizar la educación del trabajador, evidentemente no podremos hacer ningún proceso revolucionario, ni ningún cambio revolucionario en las instituciones laborales.

Yo he sentido con viva satisfacción el desafío que ha hecho el señor diputado Massolo para que hagamos nosotros una legislación revolucionaria. Pero esa revolución ha de comenzar en las bases mismas, es decir en el proceso educativo del sector laboral, para comprender los antecedentes históricos y las pautas conceptuales que permitan asegurar los recursos revolucionarios y lograr la plena realización del hombre.

Como ya se ha dicho antes, el hombre argentino comprende que no basta simplemente tener más, sino que es necesario ser más. Y ser más es tener más educación y comprender la concepción actual de la política argentina, para que el trabajador sea elemento protagónico y dinámico de la política nacional.

El proyecto en debate recoge dos sanciones de esta Cámara. Una es la referente a la actualización de la indemnización teniendo en cuenta la depreciación monetaria. Tenemos el honor, sin falsa modestia, de que haya sido nuestra bancada, a través de una iniciativa del Senado ratificada luego por Diputados, la primera en proponer este nuevo instituto que obliga al juez a aplicar de oficio, esto es, sin necesidad de petición de parte, la actualización de los montos indemnizatorios teniendo presente la devaluación de la moneda.

La otra sanción que se recoge y de la que también hemos sido iniciadores es la que se refiere a la materia prescriptiva. Compartimos plenamente

todo lo que puede ser ampliación de los plazos, pero desearíamos que el señor miembro informante aclarara, para sentar doctrina en la materia, lo que en el proyecto se llama suspensión de los plazos prescriptivos.

Es cierto que la jurisprudencia y la doctrina son pacíficas en lo que hace a la suspensión en materia civil, pero ello no ocurre en materia laboral. Nosotros nos inclinamos porque toda gestión iniciada frente a las autoridades administrativas laborales no solamente suspenda los plazos, sino que directamente interrumpa la prescripción.

Garantizamos así aún más el amparo de los derechos del trabajador, que muchas veces se ve perjudicado por razones de distancia, de falta de infraestructura para el asesoramiento jurídico, etcétera, como ocurre en las provincias del Norte y de la Patagonia, donde a menudo esos factores han impedido a los trabajadores ejercer en tiempo sus derechos.

Volviendo a la indemnización por despido, quiero señalar que nosotros no participamos del criterio de fijarle un tope. Es cierto que recogiendo las inquietudes de muchos legisladores de distintos sectores se ha modificado el tope de la indemnización, pero nosotros pretendemos que no se coloque ninguno, porque cuando el hombre de trabajo lleva más de veinte años en la empresa y el empleador lo despide, recibe un monto indemnizatorio totalmente desacorde con la remuneración que percibe. Además, en un país caracterizado por un proceso inflacionario continuo, el empleador hace un buen negocio al despedir a un trabajador con más de veinte años de servicios.

Si bien es cierto que estimamos un avance positivo tomar la remuneración mejor del último año, entendemos que no puede indicarse ningún tope, pues un hombre que ha entregado su vida al trabajo, después de 20 años de servicio, tiene el justo derecho a no ver cercenada de golpe la remuneración que ha conquistado merced a su sacrificio e idoneidad, luego de haber recorrido todos los tramos escalafonarios y ascensos. Aquí no sólo se vería privado de una remuneración material, sino que este hombre sería objeto de una sanción moral, de acuerdo con el texto que consideramos, porque luego de haberse comportado debidamente y haber guardado fidelidad para con la patronal en toda su carrera profesional, justo en el momento en que más lo necesita —en la época en que seguramente peina canas y enfrenta sus mayores responsabilidades familiares, especialmente porque sus hijos están en la etapa de los estudios superiores— es cuando percibe, evidentemente como una afrenta moral, esta indemnización con fijación de tope.

Con respecto a los menores, interpretamos que existe confusión en la redacción de las normas. Para no abusar del tiempo de que dispongo, habré de referirme en detalle a ellas en ocasión del tratamiento en particular. Pero en cuanto a los menores de más de 14 años y menos de 18,

desde ya adelante que la redacción no tiene un tecnicismo jurídico apropiado. En este aspecto hay un punto que concretamente queremos puntualizar: se refiere al régimen de licencia general.

Resulta que de acuerdo con el mecanismo del proyecto, el menor que por ley está supuestamente autorizado a trabajar desde los 14 años, puede llegar a enfrentar la situación de que jamás pueda gozar ni siquiera del mínimo de la licencia que le corresponde por el inciso a) del artículo 164. Entendemos que ésta es una laguna, una omisión. De allí que pretendamos, con sentido de persuasión, respetuosamente, que la comisión recoja nuestra inquietud. Nosotros entendemos que en el caso planteado no puede aplicarse el mecanismo que se estableció en el régimen general de licencia ordinaria, pues los menores de más de 14 años y menos de 18 años de edad podrían llegar a no gozar jamás del mínimo de la licencia.

Sr. Salomón. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Lucena. — ¡Con mucho gusto, señor diputado!

Sr. Presidente (García). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — El artículo 211 del régimen de contrato de trabajo dice: «Los menores de uno y otro sexo gozarán de un período mínimo de licencia anual, no inferior a 15 días, en las condiciones previstas en el título V de esta ley». Vale decir que los menores efectivamente están protegidos por la norma en consideración, y habrán de gozar de vacaciones.

Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Presidente (García). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Lucena.

Sr. Lucena. — Yo requiero del señor miembro informante que oportunamente nos brinde una explicación, porque el artículo 165 del régimen de contrato de trabajo establece que para tener derecho a la licencia anual se necesita haber trabajado por lo menos la mitad de los días hábiles del año. Y sin embargo, el párrafo final de ese mismo artículo dice: «Para gozar de este beneficio no se requerirá antigüedad mínima en el empleo».

No es que plantee ninguna observación, pero realmente no alcanzo a interpretar claramente este artículo. De allí que solicite para su oportunidad la explicación necesaria.

Pero esta norma a que me refiero habla del régimen general, y se vincula con el artículo 164, en donde se establecen los períodos vacacionales mínimos según fuere la antigüedad que pudiera tener el trabajador. En cambio, pienso que en algunos casos puede darse la situación de que el menor trabaje el lapso que determina el artículo 165, y a pesar de ello no goce de las vacaciones, por no estar expresamente incluido en el tratamiento de los menores. De modo que en

su oportunidad quisiera que se contemplase la posibilidad de satisfacer esta inquietud que tengo.

Es por todos sabido que los permisos especiales para exámenes constituyen una verdadera conquista, a fin de que quienes trabajan puedan gozar del permiso que les permita hacer su preparación y reforzar sus conocimientos en los días previos al examen. Al respecto, el artículo 172 del proyecto, en su inciso e), determina para estos casos de licencia especial un plazo máximo de diez días por año calendario. Nosotros pensamos que, conforme a las reglamentaciones y prácticas universitarias y a lo que dicta la experiencia, este término máximo debe ser aumentado a catorce días.

Según el artículo 164, inciso b), el trabajador debe gozar de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado «de veintiún días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco años no exceda de diez». Creemos que esta cláusula debe ser adicionada con una referencia al hecho de que con anterioridad el trabajador hubiese gozado del régimen establecido en el artículo 211 (título VIII). Vale decir que nosotros buscamos correlacionar el sistema de licencias, a fin de lograr un verdadero avance y mayores beneficios para el trabajador.

Quiero apuntar ahora algunas discrepancias más que tenemos con el proyecto, con la salvedad de que algunas observaciones las dejaremos para la oportunidad del debate en particular. En primer término, quiero hacer referencia a la modificación al artículo 217 que propone el señor diputado Lumello. Como a nuestro entender el agregado propuesto perfecciona evidentemente el artículo y salva un importante vacío legislativo en la materia, desde ya le prestamos nuestro más decidido apoyo.

En otro orden de ideas —y ruego a los señores diputados que excusen la falta de sistematización de esta exposición—, nosotros consideramos que el proyecto de ley omite, o por lo menos deja de lado, un tratamiento sistemático de toda la normación legal referente a las convenciones colectivas de trabajo. El Parlamento debe recoger ese instituto de las convenciones colectivas de trabajo, que ha significado una verdadera conquista de la clase obrera, para que pueda ser objeto de un tratamiento global, en lugar de hacer algunas simples referencias en el articulado de este proyecto de ley.

Otro aspecto al que deseo referirme ligeramente es el que atañe a las invenciones de los trabajadores. El proyecto dispone que las invenciones realizadas por el empleado u obrero son de propiedad de la fábrica o del empleador. Yo reivindico este derecho de los trabajadores, no solamente porque es ya parte de un consenso jurídico internacional recogido en ponencias de diferentes congresos, sino también porque hace a un deber de justicia y porque coincidimos con el concepto del trabajo expuesto por la señora diputada Sanguinetti, así como también compar-

timos, la idea de que el trabajo tiene una categoría moral y es un deber por el cual el hombre ha de ejercitar la plenitud de sus facultades, a fin de lograr la realización plena de su destino. Esa concepción del trabajo, que también ha sido sostenida por la mayoría, tiende a que el individuo acreciente su actividad creativa. Si éste es el concepto de trabajo que anima todo el contexto legal, no me explico por qué razones vamos a donar gratuitamente el esfuerzo creativo del obrero que, reflejado en la invención, puede significar para la empresa una ganancia multimillonaria o la incorporación de un proceso tecnológico de avanzada. En realidad, esto desalienta el trabajo creativo y la dedicación del trabajador, pudiendo llegar a constituir —aun cuando quizás sea un poco arriesgada la expresión— un verdadero despojo a un derecho de autoría, el cual es evidentemente irrenunciable en virtud de un principio laboral. De esta suerte, sostenemos que corresponde al obrero la titularidad de la invención, creyendo incluso que debe tener un derecho a la participación en las utilidades que reporte la innovación creativa o tecnológica que produzca el empleado en el desempeño de su función.

Además, nosotros creemos en esta oportunidad, de manera definitiva, porque así lo ha entendido y se lo considera altamente valioso, que nuestra Comisión de Legislación General debe tener la permeabilidad suficiente para dar forma legal y para incluir todas aquellas cosas que signifiquen verdaderos aportes, verdaderos avances y verdaderas mejoras, lo que haremos en el trámite en particular. Por eso, me he referido solamente a los puntos fundamentales que entendemos deben estar contemplados en esta legislación.

Termino, señor presidente, con lo que empezamos. La grandeza de nuestra patria se funda necesariamente en el trabajo. Si nosotros logramos perfilar en su dimensión trascendental, en su dimensión moral y de dignificación del ser humano para lograr la plenitud de todos los hombres argentinos, habremos puesto la piedra fundamental, no solamente del proyecto nacional, no solamente de nuestra Constitución, que es para todos los argentinos, sino también la piedra fundamental de la grandeza definitiva e irreversible a que evidentemente está llamada esta Argentina nuestra.

Sr. Presidente (García). — Tiene la palabra el señor diputado Lumello.

Sr. Lumello. — En el proyecto de ley que se considera, y que recepta en su articulado todas las instituciones principales de la relación contractual laboral, ocupan lugar importantísimo los preceptos vinculados con la jornada de trabajo que ha sido, en esta Cámara, preocupación decisiva de las representaciones partidarias.

En tal sentido, señor presidente, el diputado que habla presentó en agosto de 1973 a consideración de esta Honorable Cámara un proyecto

de ley que tendía fundamentalmente a actualizar los principios de jornada a los tiempos que vivimos, principios estos que están parcialmente incluidos en el proyecto que analizamos.

En consecuencia, deseo referirme expresamente a los aspectos vinculados con la denominada jornada de trabajo insalubre. Desde hace ya tiempo ha sido preocupación de las vanguardias sociales la reglamentación de la jornada de trabajo y de los descansos. Las sangrientas luchas de la clase trabajadora europea durante el siglo XIX fueron antecedentes por todos conocidos, luchas éstas a las que se reincorporaron, en una segunda etapa, las direcciones gubernamentales de algunos países más desarrollados.

Desde la sanción por Alemania, en 1891, de la primera ley sobre reposo semanal, transcurrieron pocos años hasta que la Argentina dictó su ley de descanso dominical en el año 1905. Comienza, un poco así, la larga marcha de la legislación social argentina; larga marcha que aún continúa.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Antonio Pereira.

Sr. Lumello. — El proyecto de ley que hoy nos ocupa constituye una verdadera vanguardia en materia legislativa. Esto debe enorgullecernos, pero la ley por sí sola no basta. Deben actualizarse de inmediato las estadísticas de siniestros laborales, para permitir establecer regímenes modernos de producción que, mediante controles estrictos, permitan evitar las enfermedades de todo tipo que nos ha legado la industria moderna.

De allí que una urgente limitación de la jornada posibilitaría, sin dar solución definitiva y de fondo, que los efectos del industrialismo causen menores estragos entre la clase trabajadora.

Las líneas de montaje de las grandes fábricas, a través de los ojos asombrados de un visitante, impresionan favorablemente; pero muy distintos son los análisis que de esa misma línea de montaje establecen los médicos especialistas mediante el estudio de los trastornos agudos que presentan los compañeros cuando han cumplido varios años en el mismo servicio, como ser: trastornos físicos, deformaciones de columnas vertebrales, várices, pérdida de visión, lesiones audiotraumáticas que llevan a la sordera, lesiones psíquicas que llegan a perturbar las posibilidades de procreación, hasta la esterilidad, y muchas otras.

Ello nos obliga —y no deseo dramatizar, sino ajustarme a una realidad— a establecer de inmediato una limitación nacional de la jornada como un primer paso hacia la actualización y renovación de toda la legislación vinculada a la seguridad y la higiene del trabajo.

Vale decir que no pretendemos únicamente establecer límites productivos reales, sino establecer, con iguales responsabilidades para el empresario, los tiempos y límites nominales, es decir, aquellos en los que el trabajador, directa o indirectamente, está a disposición del patrono, así como también aquellos tiempos en que se cumplimentan actos indispensables al proceso productivo aunque no sean directamente creadores de riquezas.

La ley que nos ocupa, en su afán de eliminar los riesgos emergentes de la realidad industrial, peligrosa y dañosa para el trabajador, pretende limitar la jornada de trabajo no tan sólo a aquellos casos de tareas o ambientes declarados insalubres, sino a todas aquellas situaciones en las que, por acción de la tarea cumplida, el trabajador ve perjudicada de muy diversas maneras su potencialidad, su juventud, su salud.

Aún más: queremos proteger con una jornada limitada a todas aquellas tareas que imponen condiciones penosas y riesgosas al trabajador que debe cumplirlas. Para fundamentar esta posición nos guía el convencimiento de que en 1974 no deberíamos hablar ya más de trabajos insalubres, porque no puede permitirse que existan trabajos que afecten la salud del asalariado. Debemos poner énfasis, teniendo en cuenta los modernos adelantos técnicos, para que todas las tareas sean salubres; para ello, habrá que modificar los procedimientos de trabajo y sanear los ambientes laborales. De allí que la medicina laboral moderna se haya fortalecido con la doctrina que pretende desterrar la existencia de tareas insalubres y se promueva la aplicación obligatoria de nuevas técnicas que eliminen las causas originadas en trabajos perjudiciales al operario.

Esa debe ser la tendencia; pero mientras ello no ocurra, no podemos desproteger a todos los trabajadores que cumplen tareas en lugares perniciosos o ambientes insalubres. Además debemos proteger a todos aquellos trabajadores que, sin trabajar en los ambientes señalados, sufren por la acción de la técnica industrial graves deformaciones físicas y psíquicas. A ello va destinada la reforma que establece que la jornada debe ser de seis horas en todas aquellas tareas en que se produce agotamiento físico, psicológico, etcétera.

Recapitulando, podemos señalar que debemos desterrar de nuestra patria los llamados trabajos insalubres, cualquiera sea el costo industrial que imponga; y, además, debemos limitar la jornada para todas aquellas tareas que, sin reconocer esa condición de malsanas, producen efectos graves para el trabajador. De ahí que en este proyecto hayamos mantenido la jornada de seis horas para las tareas insalubres y hayamos ampliado la vigencia de esa jornada limitada de seis horas también para los casos de las tareas que reconozcan condiciones de peno-

sas, mortificantes, riesgosas, determinantes de vejez o agotamiento prematuro.

Será responsabilidad de este Congreso dictar a la brevedad la legislación integral de higiene y salubridad que tenga por objeto desterrar del mundo productivo argentino las tareas insalubres que tantas víctimas han cobrado.

Es importante destacar, así mismo, que el propio Poder Ejecutivo nacional, sensible a los avances de la técnica de higiene y seguridad en el trabajo, haya concretado para el tipo de trabajo que nos ocupa un régimen jubilatorio de excepciones, cual es el reglamentado por decreto 182, del 19 de julio de 1974, que establece que en aquellos casos de trabajos penosos, mortificantes y de vejez prematura que se practican en las forjas y fraguas de todo el país, la jubilación ordinaria se obtenga a los cincuenta años de edad y cumplidos los veinticinco años de servicios.

Este reconocimiento por parte del Estado de la situación especial que reconocen las tareas de forja y de fragua nos está confirmando la necesidad urgente de extender la protección de la jornada limitada de seis horas para todos aquellos trabajos que, afectando la salud, directa o indirectamente, puedan no caer en la calificación genérica de trabajo insalubre.

Preciso se hace destacar, señor presidente, ya que me he referido a las tareas de forja y fragua, que los trabajadores de la industria metalúrgica y del automotor de todo el país vienen luchando desde hace años para lograr que las tareas prestadas en esas secciones de forja y fragua gocen de la limitación de seis horas diarias. La continuidad de las tareas prestadas en ambientes con niveles permanentes de ruido superiores a los 90 y de hasta 115 decibeles, unida a las altísimas temperaturas propias de la actividad y a la emanación de gases por acción del forjado, transforma a la vieja e idílica tarea del forjador en un verdadero infierno, intolerable e injustificable en el siglo que vivimos.

Hemos dicho que la solución para estos y otros casos no es tan sólo la jornada limitada de seis horas; sabemos que la única forma de evitar los daños de salud es establecer controles desde que una fábrica se comienza a construir para evitar —desde el inicio— las causas de los futuros daños a la salud del trabajador. Ese control debe ir acompañado de la prevención periódica mediante estrictos controles sanitarios, ya previsto en la ley nacional de higiene y salubridad industrial, todo ello unido a una política social que permita cubrir integralmente todos los aspectos de la vida cotidiana del trabajador para posibilitar la implantación de la justicia esperada. Pero todo ello no se cumple o tardará tiempo en concretarse; de allí que hoy sea imperioso preservar la salud por la vía legislativa de la limitación de la jornada diaria, resguardando el salario de modo que las

limitaciones no signifiquen de manera alguna disminución de lo que el trabajador viene percibiendo.

Quede bien en claro que no propiciamos la ampliación de la jornada limitada de seis horas para los casos que he enumerado, tan sólo como una forma de obtener mayores recursos económicos que, si bien podría ser motivo justo y suficiente, no es la solución al problema que la realidad nos plantea.

Consideramos que es ésta la manera de comenzar a efectivizar medidas que tiendan a resguardar —insisto— la salud integral del trabajador, y que esta medida debe necesariamente continuar con la aplicación estricta y urgente de la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo evitando como hasta ahora, que queden en letra muerta los dispositivos de la ley 19.587 y sus decretos reglamentarios. De allí que la limitación de jornadas para determinadas tareas deberá acompañarse de medidas conjuntas e inmediatas, de reformas de los sistemas productivos, acondicionamiento de las condiciones ambientales, modificaciones de técnicas productivas y todos aquellos recursos técnicos que la experiencia mundial aconseje y que han sido receptados en nuestro país en los trabajos presentados a los congresos de higiene y medicina del trabajo.

Creemos, pues, al extender el régimen de jornada reducida de seis horas a las tareas penosas, monótonas, riesgosas, determinantes de vejez o agotamiento prematuros, comenzar una larga marcha cuyos objetivos finales deben ser lograr la integral defensa del hombre de trabajo, no ya en sus aspectos materiales, sino en un aspecto máspreciado, el de las condiciones de trabajo y el resguardo del máximo capital que tiene nuestra patria: el capital humano.

La producción capitalista moderna, con sus grandes fábricas de ritmos agotadores, mortificantes, sabemos que será superada por la nueva sociedad que anhelamos. Pero mientras tanto debemos cancelar toda posibilidad de que se continúe causando daños irreparables a la salud del trabajador.

Así analizado el aspecto de jornada limitada de seis horas, podemos señalar finalmente que el objetivo que nos lleva a solicitar su sanción es el de actualizar en un texto legal parte de una realidad económico-laboral que nos está golpeando cotidianamente y cuya urgencia conocemos sobre todo los trabajadores en carne propia.

Esta ley reconoce dos tipos de contornos: uno social y otro técnico-económico. El primero es el de que los trabajadores exigen que se actualicen los regímenes laborales en todos aquellos temas vinculados con el tiempo en que venden su fuerza de trabajo; y el segundo contorno, el técnico-económico, es el de que el desarrollo de las empresas argentinas, privadas o públicas, está en condiciones de adecuarse sin tropiezos

a las actualizaciones temporales que por esta ley propugnamos.

En el proceso de socialización iniciado en el mundo, y al que la Argentina se ha incorporado plenamente con el gobierno justicialista, elegido por las amplias mayorías que revelan los resultados, la técnica industrial deba estar al servicio del hombre y, por ende, de la colectividad hacia la nueva sociedad con el hombre nuevo.

No dudamos que esta concepción también encontrará apoyo en integrantes de los demás agrupamientos políticos, porque entendemos que a todos nos guía un imperativo de justicia social y progreso.

El gobierno justicialista, señor presidente, tiene por norma no tan sólo cumplir con elaborar hermosos proyectos; su obligación comienza al propiciar que se sancionen las leyes y, por sobre todo, que se cumplan efectivamente en la práctica de la vida cotidiana.

La histórica asunción de nuestro querido conductor y líder de América el teniente general Perón a la Presidencia de la Nación, debe constituir para todos, sin diferencias de banderías, un signo de que la Argentina retoma para sí y para el mundo el camino de la redención y de la liberación nacional y social del hombre.

Nuestra patria, señor presidente, exige de todos los ciudadanos y, más aún, de los representantes del pueblo, plena conciencia de nuestro destino histórico como Nación, superando falsas antinomias y consagrando definitivamente en unidad, grandeza y progreso, la patria grande que soñaran nuestros mayores.

El país ha iniciado una revolución; los peronistas, que hemos posibilitado con nuestras luchas la recuperación popular del poder del Estado, generosamente hemos convocado a todos los patriotas, sin distinciones, a sumar su esfuerzo en pro de la liberación integral del hombre argentino. No es hora de dudas ni de vacilaciones: la historia no acostumbra esperar. Y este proyecto importa, entre otras cosas, reconocer en favor de los trabajadores lo que nunca les debió ser negado y que el peronismo, como siempre, está dispuesto a reconocer.

Queremos integrar a todos en la gran tarea, y ésta es una oportunidad de llevarlo a la práctica. Sancionando esta ley habremos superado el tiempo de las declamaciones, para pasar al tiempo de la reconstrucción revolucionaria. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Zavala Rodríguez.

Sr. Zavala Rodríguez. — Señor presidente: nuestro bloque estima que es de trascendental importancia y de profunda significación este proyecto de ley que regula las múltiples situaciones que hacen al contrato de trabajo.

Consideramos que, dentro de nuestro sistema jurídico-político, esta iniciativa, al exaltar el significado de la justicia social, enriquece el proceso de institucionalización en favor de la clase

trabajadora, sector que es evidentemente la columna vertebral en todo intento de transformación de la sociedad.

Tomamos como elementos realmente positivos los aportes que hace este proyecto de ley, el que originariamente fue elaborado por la Confederación General del Trabajo y al que luego el Poder Ejecutivo introdujo algunas modificaciones. Nuestro análisis tendrá en cuenta aquel proyecto originario y las reformas introducidas sucesivamente por el Poder Ejecutivo, por el Honorable Senado y por las comisiones de esta Honorable Cámara.

Como primera consideración debemos decir que un aspecto fundamental es el que se refiere a la unificación, en un solo cuerpo legal, de la jurisprudencia más avanzada vigente en esta materia, con lo cual se pondrá fin a la dispersión y a las contradicciones de múltiples decisiones judiciales.

Por otra parte, el proyecto introduce en nuestra legislación a la justicia social como fuente del derecho, respondiendo a la concepción que sostuviera el general Perón desde su primer gobierno, acerca de la necesidad de enmarcar toda la legislación que regula a la clase trabajadora en el concepto de justicia social. Esto implica un avance evidente y manifiesto en lo que hace a la legislación laboral.

Por otro lado, se le da prevalencia a los usos y costumbres más favorables al trabajador sobre lo normado por la ley. Sabemos que en todo aquello que se refiere a las relaciones de trabajo, lo importante, lo substancial, es el hecho fáctico de la protección del trabajador antes que la norma en sí. Por eso rescatamos como altamente ponderable este aporte del proyecto.

Se establece el principio de la solidaridad entre contratistas y subcontratistas, así como también de las empresas relacionadas o subordinadas entre sí. En nuestra práctica como abogados, en nuestra defensa de los trabajadores, hemos observado múltiples maniobras que llevaban a burlar la ley a través de la existencia de subcontratistas insolventes y contratistas sumamente solventes, pero éstos no obligados a la relación laboral. Al introducir el proyecto la solidaridad en la responsabilidad de contratistas y subcontratistas, elimina esta forma de violar la ley y permite garantizar los derechos de los trabajadores y que éstos sean remunerados como corresponde por la labor realizada.

Por otra parte, se permite determinar con mayor facilidad que hasta ahora la existencia del contrato de trabajo, fijándose en forma precisa y reglamentarista una serie de exigencias para la patronal como, por ejemplo, el caso de los recibos, la forma de llevar los libros, etcétera, facilitándose ampliamente a los trabajadores la prueba de la existencia del contrato de trabajo.

Esto es importante porque a través de las argucias que determinaban la imposibilidad de probar el contrato de trabajo, muchas veces por

una omisión dolosa por parte de la patronal, se burlaban los derechos de los trabajadores al eliminarse la posibilidad probatoria ante un juzgado.

Se permite que el trabajador elija su propio médico en caso de enfermedad, y se acortan los plazos de antigüedad requeridos para cobrar los salarios durante el período de aquélla. Esto es importante porque implica la participación de los trabajadores en cuanto a la conservación de su salud y a la libre elección del médico para permitir de esa manera una mejor atención.

A pesar de mantenerse el sistema actual en materia de preaviso e indemnización por antigüedad se aumentan los montos, cosa que consideramos digna de destacar.

Se establecen, así mismo, indemnizaciones por muerte del trabajador y del empleador, equiparándose en cuanto al beneficio a la mujer que hubiera vivido durante un plazo de cinco años con el trabajador. Este es un hecho muy frecuente que no podía dejar de contemplarse ante lo que significa el avance de la legislación social, cosa que este proyecto realiza.

Por otro lado, se aumenta el plazo de prescripción a cuatro años, salvo para las acciones derivadas de accidente o enfermedades profesionales, que se mantiene en dos años. Vamos a solicitar su modificación porque estimamos que toda prescripción debe ser de cuatro años.

El proyecto mejora notablemente el tratamiento de la huelga y otras medidas de acción directa a través de los artículos 143 y siguientes.

También faculta expresamente a los trabajadores a manifestar sus opiniones políticas, elemento de fundamental importancia porque en nuestra sociedad contemporánea la política no puede estar desvinculada de las actividades productivas y materiales que realizan cada uno de los hombres. Los trabajadores, como cualquier individuo que participa en la sociedad, tiene el derecho y la obligación de explicitar sus opiniones políticas y enmarcarlas dentro del panorama del proceso de liberación argentino.

Por otra parte, se establece la inembargabilidad, salvo por alimentos, del salario mínimo, vital y móvil. Esta norma, dispuesta en alguna legislación ya vigente, es sumamente importante incluirla en este régimen de contrato de trabajo.

Así mismo, protege la maternidad, estableciendo un plazo de excedencia, aspecto éste de suma importancia, por cuanto la mujer —elemento indispensable y base de sustentación de la familia en el orden social— tiene que tener el derecho a trabajar, y a la vez el derecho y la obligación de mantener a sus hijos. De allí que debemos darle todas las garantías necesarias para que esa obligación de madre se complementa con todos los beneficios que la ley debe garantizarle.

En otro orden de cosas, vamos a puntualizar algunas omisiones que entendemos este proyecto no ha salvado. No obstante ello, adelantamos

que, en términos generales, nuestro bloque va a apoyarlo, aunque habremos de solicitar algunas modificaciones que estimamos son indispensables. Estas modificaciones se encuadran en el análisis comparativo efectuado entre el proyecto remitido por la Confederación General del Trabajo y el que actualmente estamos considerando.

En cuanto al artículo 29 del régimen de contrato de trabajo, estimamos que al dejarse de lado los estatutos especiales —en los casos de actividades regladas por estatutos o regímenes particulares, leyes generales y/o especiales—, claramente no se contemplan los casos de los trabajadores de la construcción y los portuarios, que nosotros conceptuamos que es necesario sean incluidos en los beneficios que establece la norma en consideración.

El segundo párrafo del artículo citado dice: «En ambas circunstancias la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta». Este párrafo es confuso y en su interpretación jurisprudencial puede traer consecuencias negativas para la protección de los derechos que les corresponden a los trabajadores. Perfectamente sabemos que en materia de interpretación jurisprudencial de la ley puede llegarse, cuando la norma da la posibilidad a través de párrafos oscuros, a distorsionar la norma misma, mediante la aplicación de fallos en casos concretos. De allí que solicitamos su supresión.

En cuanto al artículo 22 del régimen de contrato de trabajo —que establece la gratuidad para los procedimientos judiciales y administrativos que lleve adelante el trabajador—, debemos ampliar su alcance. En el origen de los conflictos individuales, la contradicción entre el empleador y el empleado se efectúa a través de las comunicaciones mutuas por medio de telegramas. En la legislación vigente y en este régimen de contrato de trabajo, según su artículo 261, se establece la gratuidad del telegrama colacionado únicamente para los casos de renuncia o de extinción del contrato de trabajo. Al respecto, consideramos necesario que el proyecto establezca un párrafo que diga expresamente lo siguiente: «Por aplicación de este principio (o sea el de la gratuidad), serán siempre gratuitos los despachos telegráficos que debiere remitir el trabajador al empleador con motivo o por aplicación del contrato de trabajo». Estimamos que no solamente la gratuidad se debe referir al caso de extinción del contrato de trabajo sino a todos aquellos casos en los que existan situaciones conflictivas individuales, porque no siempre el empleado u obrero tiene el dinero suficiente como para poder remitir los telegramas o las comunicaciones que hacen a la defensa de sus derechos.

El artículo 28 del proyecto dispone que «se considera empleador a la persona física o con-

junto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador». Con fines de una mayor claridad, estimamos que el artículo debería redactarse del siguiente modo: «se considera empleador a la persona física o jurídica, o conjunto de ellas, tengan o no personalidad jurídica propia, ...». Por una cuestión de técnica legislativa es imprescindible poner juntas las expresiones «persona física» y «o jurídica», para lograr una mayor claridad en la cláusula legal.

Con relación al artículo 76, que se refiere al establecimiento de controles personales por parte del empleador, estimamos que debe ser modificado, para incluir el artículo recomendado por la Confederación General del Trabajo, que textualmente dice así: «*Controles personales*. Artículo 77. — No se podrán disponer controles personales del trabajador, salvo que ello fuese indispensable para la protección de los bienes de la empresa. Los sistemas que en todos los casos se empleen deberán tener la aprobación de la asociación profesional firmante de la convención colectiva aplicable y de la autoridad administrativa competente. Los controles se realizarán con intervención de delegados designados especialmente por la asociación profesional».

«Los sistemas de control que se aprueben conforme al artículo anterior de esta ley —agrega el artículo 78— deberán salvaguardar la dignidad del trabajador, deberán practicarse con discreción y se harán por medio de selección automática destinada a la totalidad del personal. Los controles del personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a personas de su mismo sexo.»

Evidentemente, con respecto a este problema de los controles debemos tener en cuenta el estado de desarrollo de nuestro movimiento obrero y el estado de conciencia de la clase trabajadora, que determinan la necesidad de una coparticipación efectiva en la forma de controlar al personal. No se puede dejar al libre arbitrio del empleador la elección del procedimiento de contralor, sino que debe darse participación a la representación de los trabajadores, a los sindicatos y a las comisiones internas, a los efectos de garantizar que no se violen los derechos del conjunto de trabajadores de un establecimiento.

Así mismo, solicitamos la inclusión en el proyecto del artículo 80 de la iniciativa de la Confederación General del Trabajo que, referido también a los sistemas de control, establece lo siguiente: «no podrán emplearse sistemas de control a distancia de la actividad de los trabajadores. Para la instalación de equipos de medición del trabajo o rendimiento del trabajador se requerirá la previa aprobación de la asociación profesional firmante de la convención colectiva de trabajo aplicable y de la autoridad administrativa competente». Con esto se garantiza la participación de todos los sectores inte-

resados y se garantiza también la defensa de los derechos del trabajador, que pueden ser violados por parte de la patronal.

El artículo 79 establece que «la autoridad de aplicación podrá dictar reglamentaciones de carácter general, por zonas o por actividad, por rama de actividad, . . .». Estimamos que este artículo es innecesario, y puede llevar a distorsiones de la finalidad y el sentido de la ley. Como está bastante explícita la forma de regulación y la reglamentación del contrato de trabajo en diferentes normas de la ley, esta norma es innecesaria, por lo que solicitamos su supresión.

En lo que se refiere a los artículos 91 y 92 del proyecto, relativos a las invenciones del trabajador y a la forma de participación del trabajador y del empleador en el producto de esas invenciones, nosotros solicitamos que se vuelva al sistema establecido en el proyecto de la Confederación General del Trabajo, cuyo artículo 93 dice lo siguiente: «Si de las invenciones o descubrimientos previstos en el segundo párrafo del artículo 92 de esta ley (o sea, las invenciones de los trabajadores) se derivara un beneficio desproporcionado en favor del empleador, con relación a la retribución abonada al trabajador y a su participación en la invención o descubrimiento, éste será acreedor a una compensación adecuada, que se abonará en la forma y tiempo que convengan las partes, un tercero a elección de éstas o el juez o tribunal a falta de acuerdo. Queda prohibida la renuncia anticipada de este derecho, el que podrá ser exigido por el trabajador aun después de extinguida la relación laboral, y a los terceros que emplearan la invención o descubrimiento con licencia del empleador.

»Las partes están obligadas a guardar secreto sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas.

»El empleador deberá ser preferido, en igualdad de condiciones, a los terceros, si el trabajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento, en el caso del primer párrafo del artículo 92 de esta ley.»

Vale decir que debemos garantizar la actividad creadora y los frutos del aporte real al desarrollo de la ciencia y de la técnica que pueden producir los trabajadores. No es posible permitir con respecto a los inventos realizados por el trabajador, cuando tales inventos afecten esencialmente a la actividad económica y productiva del país, que se introduzca una distorsión en cuanto al destino de los beneficios que tales inventos pueden originar. Por ello consideramos necesario suprimir el artículo 92 del proyecto, y substituirlo por el artículo 93 del proyecto de la Confederación General del Trabajo.

Por otro lado, en este proyecto de contrato de trabajo se tiene en cuenta el trabajo a destajo. Nosotros sabemos que ese sistema de remuneración fue inventado por el capitalismo más

descarnado, como una de las formas de llevar hasta las últimas consecuencias la superexplotación de los trabajadores. Estos son los antecedentes que, en nombre del desarrollo económico y de la mayor productividad, aplicaron países, como los Estados Unidos, a través del taylorismo, lo que condujo a la superexplotación de los trabajadores, situación que incluso admitió la Unión Soviética para incrementar su producción.

Enmarcados en los principios del justicialismo y en lo que significa la justicia social, nosotros no podemos admitir la inclusión del trabajo a destajo y la reglamentación de ese sistema de remuneración en una ley como ésta. Por eso, en los diferentes artículos donde se hace referencia al trabajo a destajo, vamos a proponer la supresión de tal referencia y la aplicación estricta del pago de la remuneración al trabajador conforme a las convenciones colectivas de trabajo y a las reglamentaciones vigentes, y no por la cantidad de producto que aquél realice.

Luego, el artículo 126 habla del salario mínimo, vital y móvil y garantiza este salario para todos los trabajadores mayores de dieciocho años. Entendemos que existe una incongruencia en este proyecto, porque el artículo 207 establece la posibilidad de que los trabajadores menores de 16 a 18 años puedan llegar a trabajar 8 horas diarias con autorización pertinente. En consecuencia, vamos a solicitar la inclusión en este artículo de la garantía del salario mínimo, vital y móvil para los menores de 16 a 18 años cuando trabajen una jornada de ocho horas diarias.

El artículo 146, que habla de retenciones o de descuentos sobre salarios, establece en su inciso g) que podrá existir esta clase de retenciones en el caso de reintegro del precio de compra de acciones de capital o de goce adquirido por el trabajador a su empleador y que corresponda a la empresa en que presta servicios.

Aquí damos lugar a una posible trampa, a una posible burla y a un descuento injustificado del salario del trabajador. Por esta vía se establece una nueva forma de cobro del precio de las acciones. No existe ningún motivo para que así sea y en el caso de que el empresario venda acciones al trabajador, que se las cobre mediante los medios que le da la ley y no mediante un descuento compulsivo de su salario. Además, introduce directamente una vía para realizar simulaciones por parte de los empresarios, o sea que si las acciones de la empresa tienen que ser vendidas al trabajador, o existe la posibilidad de que sean vendidas, nosotros no podemos dar la vía para que de esta forma se introduzca un elemento que vaya en detrimento de la remuneración de los trabajadores.

Por otro lado, en el artículo 164, donde se habla de descanso anual remunerado, consideramos necesario tener en cuenta lo que significa el trabajo insalubre, penoso y peligroso, que no

está contemplado y que debe tener un beneficio mayor que el trabajo normal. Por eso vamos a incluir en este artículo un agregado que establezca que «los plazos establecidos se extenderán en un 30 por ciento cuando el trabajador se haya desempeñado en tareas declaradas insalubres, penosas o peligrosas».

En el artículo 180 se habla de días feriados y no laborables. Nosotros nos inclinamos por el proyecto de la Confederación General del Trabajo, pero si se mantiene este artículo vamos a solicitar un agregado que diga lo siguiente: «Quedan equiparados a los feriados nacionales los declarados días del trabajador en los distintos gremios instituidos por convenciones colectivas de trabajo». Esto corresponde al artículo 190 del proyecto de la C.G.T., y es de importancia, porque en la actualidad, en todos los convenios colectivos de trabajo de todos los sindicatos del país se garantiza la existencia del día del trabajador respectivo, y corresponde incluirlo en esta ley y considerarlo como feriado nacional.

En el artículo 195, donde se habla de descanso diario por lactancia, vamos a solicitar que se amplíe el plazo porque la madre que amamanta a su hijo, por la necesidad que tiene de contacto con su hijo, no puede tener un plazo tan restringido, y pedimos que se amplíe a una hora, dos veces por día.

A la vez, como consideración general, este artículo debería establecer el número de mujeres requeridas para que el empresario deba obligatoriamente poner una guardería, ya que si la reglamentación no se dicta el artículo es inaplicable. Existe la necesidad de establecer inmediatamente el número necesario o el mínimo indispensable de mujeres trabajando en un mismo lugar para instalar una guardería. Por otro lado también sería necesario considerar el caso de las guarderías en zonas industriales o fabriles donde por establecimiento no existe el mínimo de trabajadoras con hijos pero que, por la diversidad de la zona y por la forma en que está establecida la relación productiva, el Estado puede garantizar la existencia de dichas guarderías para atender la buena crianza y desarrollo de los infantes.

En el artículo 199, referido al estado de excedencia, vamos a solicitar que se incluya el proyecto de la Confederación General del Trabajo referido a esta materia.

El artículo 200 determina la reincorporación de la mujer trabajadora luego del estado de excedencia. Consideramos que lo establecido en el inciso b) de este artículo da la posibilidad al empleador de reintegrar a la trabajadora en un cargo superior o inferior. Pensamos que de esta manera se abre una vía que realmente puede ser coercitiva a los efectos de no reintegrar a su empleo a la mujer trabajadora. En consecuencia, vamos a solicitar la supresión de ese inciso b) y también la del párrafo que establece la posibili-

dad de no reincorporación, dejando como única posibilidad la reincorporación de la obrera.

En el artículo 201 vamos a solicitar que se reduzca el plazo de un año de antigüedad a seis meses.

En el artículo 209 observamos una omisión en cuanto a la forma en que deben reintegrarse los ahorros al menor trabajador por cuanto se determina el reintegro de los ahorros a los padres o tutores al extinguirse el contrato de trabajo, o cuando el menor cumpla los dieciocho años de edad. Sin embargo, se omite el caso de la emancipación del menor trabajador por casamiento, y esta circunstancia también debe tenerse en cuenta para el reintegro de los ahorros acumulados durante el tiempo de trabajo.

El artículo 210 determina para el empleador la obligatoriedad del depósito del diez por ciento de la remuneración del menor en su cuenta de ahorro. Nosotros pensamos que este diez por ciento tiene que estar a cargo del empleador y del menor trabajador en forma proporcional porque, evidentemente, el empleador que contrata a menores tiene beneficios que no posee aquel otro que contrata a mayores de dieciocho años de edad, porque se ahorra el aporte jubilatorio y, además, tiene también beneficios de otra índole que son de importancia. En consecuencia, ese empleador tendría que aportar el cinco por ciento al ahorro que el menor trabajador debe realizar obligatoriamente.

El artículo 213 hace referencia a la extensión de la jornada de trabajo y se remite a la reglamentación y a la legislación vigente en diferentes zonas del país. Nuestra bancada considera como necesaria la instauración de la jornada de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales, y así mismo llama a la reflexión sobre algo que hay que tener en cuenta. Permanentemente defendemos la descentralización en lo que hace a la radicación industrial. Propugnamos la necesidad de desarrollar el interior del país, y si existe una desproporción entre las cuarenta y ocho horas semanales de trabajo establecidas en la Capital Federal y zonas aledañas y las cuarenta y cuatro horas consagradas en algunas provincias, es lógico deducir que la radicación industrial se va a producir con mayor beneficio para las zonas que ya cuentan con una alta concentración industrial, como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, estimamos necesaria una regulación uniforme y estable de la jornada de trabajo en todo el país.

Sr. Presidente (Pereira). — La Presidencia advierte al señor diputado que ha vencido el término de que disponía para su exposición.

Sr. Zavala Rodríguez. — Termino ya, señor presidente.

Otro elemento que hay que incluir es la estabilidad absoluta establecida en el título XIII del proyecto de la Confederación General del Trabajo. Estimamos que este concepto de la estabilidad absoluta importa un aporte substancial

para la defensa de las fuentes de trabajo y de los derechos del trabajador. Estamos en desacuerdo con la supresión de esta institución en el proyecto del Poder Ejecutivo, y por eso vamos a solicitar su inclusión en el que estamos tratando.

Para sintetizar nuestra posición, vamos a señalar algunos puntos finales, adelantando desde ya que durante la consideración en particular propondremos modificaciones y supresiones.

El proyecto no tutela las condiciones de trabajo, a pesar de mantener la vigencia del sistema de destajo. No se otorga a los trabajadores la facultad de controlar las actividades de los empresarios ni los métodos que utilizan para incrementar sus ganancias, aun a costa de la salud del trabajador. Deja abierta la puerta para la no aplicación de la ley a los trabajadores de la construcción y se excluye a los trabajadores a domicilio y a los trabajadores portuarios.

En materia de despidos, al no contemplarse la estabilidad absoluta, evidentemente entra en contradicción con los postulados establecidos en la Constitución de 1949, que en su artículo 37 garantizaba los derechos del trabajador, otorgándole el derecho a una retribución justa y determinando condiciones dignas de trabajo.

En definitiva, si bien pueden formularse críticas importantes al proyecto —críticas que indudablemente debemos tener en cuenta en el futuro—, nuestra bancada va a apoyarlo porque estima que constituye un aporte sumamente positivo dentro del proceso de garantizaci6n de la justicia social, por la que tanto bregó el general Perón.

Sr. Presidente (Pereira). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Ponce.

Sr. Ponce. — Deseo aclarar, señor presidente, que teniendo en cuenta que el contrato de trabajo requiere para su aprobación una ley complementaria, o sea que por el artículo 19 de esta última se aprueba en general y en particular todo el contrato de trabajo, los señores diputados que deseen formular observaciones deberán manifestarlas antes de la votación de dicho artículo.

Todos hemos tenido el tiempo suficiente como para poder interpretar el tratamiento que dio el Honorable Senado al proyecto en consideración, motivo por el cual deseo aclarar que todas las observaciones en particular se tienen que hacer antes porque no hay votación en general sino que será en general y en particular.

Sr. Presidente (Pereira). — Ese es el criterio que se ha utilizado en el desarrollo del debate. Por eso la Presidencia en alguna circunstancia, como en el caso del diputado preopinante, fue flexible en el plazo concedido para que se pudieran hacer las observaciones en particular al proyecto.

Sr. Ponce. — Deseaba manifestar a la Presidencia que las observaciones que se puedan plantear en particular tienen que considerarse antes del tratamiento del artículo 19 de la ley,

que aprueba el texto en general. Por lo tanto, la comisión a partir de este momento se pone a disposición de todos los diputados para contestar por la afirmativa o la negativa las sugerencias o modificaciones que se pretendan introducir en la ley de contrato de trabajo.

Sr. Presidente (Pereira). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Entiendo que lo que quiere decir el señor diputado Ponce es que no va a haber debate en particular, pero que se va a seguir el método de hacer las proposiciones a medida que se fundamenten los artículos.

Sr. Presidente (Pereira). — Así es, señor diputado.

Sr. Falabella. — Es decir que vamos a mantener el mismo método de otros debates.

Sr. Presidente (Pereira). — Con ese criterio se ha desarrollado el debate.

Tiene la palabra el señor diputado Aragonés.

Sr. Aragonés. — Señor presidente: no participo de este debate para analizar el contenido total de la ley en particular, porque ello ya ha sido hecho extensamente y porque además comparto totalmente los conceptos del miembro informante de la comisión sobre el proyecto de ley. Solamente quiero hacer algunas reflexiones en relación con algunos señores legisladores que han participado de este debate y que pareciera que lo han hecho en una doble condición: como legisladores y como profesionales especializados en la materia laboral. Los trabajadores participamos en las deliberaciones como en mi caso particular, con un único diploma que es el de la escuela y con el que se nos ha dado como consecuencia de haber sido ungidos diputados de la Nación, gracias a la innovación que introdujera el general Perón en el sentido de participar todo el pueblo y en particular la clase trabajadora en las grandes decisiones del país.

Algunos señores diputados manifiestan en su condición, más que de legisladores, de profesionales, que han tratado muchos casos vinculados con las leyes del trabajo y que como consecuencia de ello, tratan de buscar una solución a través del contenido de la ley de contrato de trabajo. Los trabajadores decimos —con esos únicos títulos de la escuela y de diputado, porque nosotros no tenemos otros diplomas, pero sí tenemos el título de trabajadores o, en algunos casos, el de dirigentes— que también durante muchos años —espero que sepan interpretarme los integrantes de alguna bancada porque lo digo con mucho respeto—, durante dieciocho años, hemos tratado de lograr lo que hoy constituye la expectativa general del país y en particular de la clase trabajadora. Esa expectativa, después de votarse el artículo 301, dará lugar al alborozo, a la alegría y a un poco de tranquilidad, porque sabremos que mañana, cuando enfrentemos nuevamente aquellos malos empleados tendremos una ley que nos ampara, que nos resguarda, y ya no habrá más jueces que se

puedan equivocar en la interpretación del contenido de lo que va a ser en el futuro el contrato de trabajo.

Señor presidente: también se dijo que esto habría merecido el análisis previo de quienes pareciera que son los entendidos en derecho laboral, los profesionales en la materia. Profesionales también somos los trabajadores, que resguardamos el derecho a la estabilidad, la tranquilidad y la paz social que el gobierno justicialista nos enseñó y que nosotros, el pueblo argentino, queremos.

Cuando hablo de los trabajadores organizados me resulta forzoso referirme —y no por hacer alusión al gremio al que pertenezco— a la acción que nosotros desarrollamos. Hemos recorrido los cuatro puntos cardinales del país y hemos hecho el gran parlamento con los compañeros trabajadores, a fin de que nos hicieran llegar su opinión sobre el contenido de este proyecto de ley dentro de un clima de paz y tranquilidad.

La Confederación General de Empleados de Comercio recorrió el país, por medio de sus representantes, convocando a magnas asambleas en las que participaron tanto quienes comulgan con nuestra ideología política como quienes no están de acuerdo con ella. Y en esas reuniones no sólo vertieron su opinión los trabajadores, sino los representantes de las fuerzas empresarias, las fuerzas armadas y el clero, es decir de todo lo que hace al consenso de las fuerzas vivas de los distintos lugares de la República. Es por ello que nosotros, los trabajadores —y yo en particular— nos sentimos con la autoridad suficiente para afirmar que esta ley de contrato de trabajo que hoy vamos a votar es el fiel reflejo de la opinión de la clase trabajadora organizada. Es posible que alguno de sus artículos no llene totalmente las aspiraciones de algún sector, pero el 99,9 por ciento de este proyecto traduce el consenso general de los trabajadores argentinos.

Esta conquista de hoy me trae a la memoria el recuerdo cercano del año 1970, cuando la nueva conducción de la Confederación de Empleados de Comercio trató, luego de aquel fracaso de sus dirigentes en el año 1964 en que se vetaron las modificaciones a la ley 11.729, de efectivizar ese viejo anhelo de reformar la citada ley, la que en su momento no fue una conquista de los empleados de comercio sino de todos los trabajadores, que iniciaron en 1932 la lucha que culminó con la sanción de la ley en 1934, por la cual se modificaron los artículos 157 y 158 del Código de Comercio. Pero, si bien es cierto que fue una avanzada en la legislación laboral, esto trajo como consecuencia que se confundiera a dicha ley con el Código de Comercio.

Avanzando un poco más en el tiempo llegamos al año 1945, en que el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo, había dado el inicio a la gran revolución, a la revolución en paz, la revolución de la justicia social, con la

sanción del decreto 33.302, que ampara a toda la clase trabajadora. La lucha que trajo como consecuencia esa conquista continua hoy día y nos muestra claramente que se han hecho necesarias las modificaciones que hoy se proyectan para el contrato de trabajo.

Nuevamente es el gobierno peronista quien en esta segunda etapa de la gran revolución —revolución justicialista, revolución del pueblo— hace participe a la clase trabajadora de todos los actos de gobierno. Hoy aquí, en el Parlamento, ayer allá, en esas magnas asambleas a las que hacía referencia, los trabajadores tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión con respecto a esta ley sobre contrato de trabajo. Creemos y entendemos que con ella obtendremos la seguridad y el amparo que estuvimos reclamando durante tantos años.

Por eso, señor presidente, reitero que el gobierno justicialista, que nos ha traído estas buenas nuevas que hacen a las expectativas generales del país, pretende que no sólo la clase trabajadora, sino todos los argentinos que quieren realmente al país en paz y tranquilidad, vean concluidas las injusticias a través de una ley de contrato de trabajo que satisface a todos por igual.

Los empleados de comercio no podemos olvidar a ese hombre, a ese artifice, que contribuyó a conformar el primer gobierno justicialista y que se llamó don Angel Gabriel Borlenghi, quien inició en 1932 la lucha que recién cristalizara en 1934, interpretando en su real y justa medida los derechos y las obligaciones que todos los trabajadores tenemos.

Por eso, señor presidente, como legislador y como trabajador que forma parte del conjunto de un millón de empleados de comercio, expreso al gobierno justicialista y a todos los sectores que están representados en esta Cámara, que este contrato de trabajo nos satisface, porque es la real y auténtica expresión de los deseos que hacen a la clase trabajadora para vivir en paz y en justicia social. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Aguirre.

Sr. Aguirre. — Señor presidente: entramos a este debate con la humilde pretensión de ubicar el tema en su justo término, porque en las exposiciones escuchadas hasta este momento hemos visto que se han querido introducir en el proyecto de ley las reformas que responden concretamente a la posición ideológica de sus expositores.

Se ha expresado, como crítica generalizada, que este proyecto de ley no es revolucionario. Nosotros le respondemos a esa crítica sosteniendo, concretamente, que este proyecto de ley ha recogido toda la experiencia que hemos vivido en la materia y todas las enseñanzas de la mejor doctrina y de la más encumbrada jurisprudencia nacional y extranjera. No sabemos si

corresponde o no calificarlo de revolucionario; pero estamos seguros de que con adecuado método legislativo va a responder concretamente en todos los conflictos que se producen a diario con motivo de la relación laboral. Entendemos que es mucho más positivo legislar de esta manera que hacerlo con declaraciones pomposas que, sin lugar a dudas, no contribuirían en la práctica a resolver los conflictos.

No quiero dejar de recordar alguna historia bastante reciente. En cierto momento estuvimos en la cima del progreso en materia laboral. Inclusive ocupamos un lugar de privilegio en el constitucionalismo social cuando en 1949 incorporamos en la Carta Magna los derechos del trabajador, que el teniente general Perón ya había anunciado concretamente a un año de su elección como presidente de la República. Aquella declaración, sin lugar a dudas, condensa en sus diez apartados lo más avanzado y progresista que se haya elaborado en el país en la materia, y hasta me animo a sostener sin hesitación que estaban sintetizados allí todos los principios y las bases jurídicas necesarias para elaborar el mejor código del trabajo. Si hemos sufrido, en esta materia, un estancamiento o un retroceso, ha sido por causas políticas conocidas por todos los señores diputados y que no es del caso repetir en este momento.

El proyecto que hoy consideramos condensa, en términos generales, todos los principios que, si bien estaban enunciados en la doctrina y en la jurisprudencia, necesitaban a esta altura del proceso una instrumentación legal a fin de que sirvieran de fuente inspiradora y de farol luminoso para todas las interpretaciones y aplicaciones futuras de este derecho positivo que seguramente dentro de poco terminaremos por consagrar.

Entre las críticas formuladas por algunos diputados preopinantes se anotan algunas omisiones o algunos interrogantes que quedarían sin la condigna respuesta. A ello contestamos que, en virtud de aquellos principios consagrados en los primeros artículos, no ha de quedar para los jueces de la materia caso alguno que no encuentre solución o fundamento jurídico y legal en este cuerpo que habremos de sancionar en la sesión de hoy.

No es posible, y esto lo saben todos los legisladores, contemplar en una norma de esta naturaleza todos y cada uno de los hechos que pueden producirse en la relación diaria, en las múltiples y varias relaciones e interrelaciones que caracterizan a nuestra sociedad moderna. Por ello, siguiendo el mejor método, a nuestro criterio, hemos preferido consagrar en el texto legal principios generales claros, concretos y determinados que, en lo sucesivo, sirvan para la resolución de todos los casos que puedan suscitarse en la vida de relación, en los estrados judiciales o en sede administrativa.

A este proyecto varios señores diputados le han criticado que contiene algunas definiciones,

las que en materia legislativa no serían convenientes. Ello no es estrictamente cierto, señor presidente. Hay corrientes doctrinarias que con sólidos fundamentos sostienen que las leyes deben contener algunas definiciones que las caractericen y tipifiquen. Sin necesidad de enrolarnos en ninguna de esas corrientes nosotros sostenemos que hay conceptos que por ser tan fundamentales y decisivos para el futuro merecen ser recogidos por la norma. De allí que hayamos adoptado el método de una definición clara, genérica, que no cierra las puertas a ningún caso que quiera plantearse.

Algunos señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra expresaron que no era conveniente la disposición del artículo 4º del régimen que define el concepto de trabajo. Con énfasis sostenemos que tal concepto necesariamente debe estar incluido en la ley, porque todo su contexto general —a lo largo de más de 300 artículos— no es sino la explicitación de este concepto primordial del trabajo.

Sin ánimo de molestar a sector alguno, quiero expresar que nosotros tenemos una doctrina muy clara sobre este tema. Como recordarán los señores diputados, tenemos la declaración de los derechos del trabajador, que aunque derogada como norma nunca ha salido de la conciencia de la clase trabajadora argentina, ni de la de nuestro pueblo, que vio en ese decálogo una definición política esencial, propia del justicialismo. En esa declaración de derechos de los trabajadores está perfectamente explicado el concepto de trabajo, cuando dice el teniente general Perón —que es su autor— «que el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad». Esto es que el trabajo, en primer lugar, para nosotros los peronistas, es una atribución propia y específica del hombre; es un atributo de la propia personalidad de cada hombre, pero a la vez ese hombre está obligado a dar también parte de su esfuerzo para la realización de la sociedad jurídicamente organizada, en la que vive, se desarrolla y muere.

Por eso dice nuestra definición que es un derecho; pero también reconocemos que es un deber. Y ambos términos están unidos por un concepto que hace a la esencia de nuestra doctrina y de nuestra filosofía política: el concepto de la función social, que ilumina y señala todo el régimen de este proyecto que hoy estamos considerando. Por esa razón nosotros, los peronistas, no vamos a poder satisfacer a los señores diputados que bregan para que suprimamos esta definición del artículo 4º. Esta definición, señor presidente, no solamente es cara a nuestro sentimiento, sino que es suficientemente concreta y jurídica para que sirva a todos los tribunales y a todos los jueces en la interpretación que en lo sucesivo han de hacer de esta ley que hoy vamos a aprobar.

También se pregona que se suprima el artículo 59 de este proyecto porque hay señores diputados que no están conformes con la caracterización que en él se hace de la empresa. Los enfoques realizados aquí, por algunos señores diputados, definen a una empresa que posiblemente responda a lo que ellos creen que debe ser, pero legislar para ideas y para inquietudes no es el método legislativo correcto, sino que hay que legislar para realidades concretas que se producen aquí, hoy y todos los días. Esto sin cerrar las puertas a todos los avances que en materia política, social o económica puedan llegar al país, porque el peronismo no le tiene miedo a ninguno de ellos.

Nosotros decimos con toda claridad en el proyecto de ley y en el mensaje del Poder Ejecutivo que no pretendemos expresar un concepto acabado de lo que debe ser la empresa, pero sí decimos —y eso es necesario entenderlo— que caracterizamos la empresa al solo efecto y exclusivamente a los fines de esta ley. Eso, señor presidente, es lo que realmente importa, y es por ello que también vamos a mantener este artículo, que no puede ser suprimido bajo ningún concepto del cuerpo general de la ley.

También se ha dicho en este recinto que el artículo 39 va a ser fuente de innúmeros conflictos. Ello no es acertado, porque este artículo sigue con toda claridad, en lo que hace al derecho internacional, lo que siempre ha sido tradición en nuestra República Argentina: sigue como principio de aplicación la ley del lugar de la ejecución del contrato o de la ejecución de la obligación. Está claramente definido como principio enfáticamente expresado, diciendo inclusive que es una inquietud argentina para que se siga en todos los congresos y en todos los tratados internacionales; principio que nosotros consideramos hoy en la ley de contrato de trabajo.

Se ha dicho, señor presidente, que este contrato adolece de algunas omisiones; esto es, que algunos institutos no están contemplados en el texto de la ley. A ello respondemos que el proyecto que hoy tratamos no es —como lo dijeron y lo dijeron algunos señores diputados— un código de trabajo, en el que sí tendrían que estar contemplados todos aquellos institutos. Esta es una ley, señor presidente, que solamente legisla sobre una parte, muy importante por cierto —quizá la más importante del derecho del trabajo—, pero por esa razón no entra a definir las normas y situaciones de las convenciones colectivas de trabajo que aquí se mencionaron hace un momento.

No va a ser posible modificar esta ley tan copiosamente como quieren algunos señores diputados. No porque nosotros tengamos la pretensión de ser perfectos, ni tampoco porque queramos o pretendamos negar el derecho que tienen todos los señores diputados a opinar. Es sabido que una ley de esta magnitud debe con-

servar su coherencia, debe conservar su unidad doctrinaria y debe conservar, incluso —para facilitar su interpretación y posterior aplicación—, un estilo perfectamente definido, claro y cateórico. Ello no implica, bajo ningún concepto, que no se vayan a admitir aquellas modificaciones que no alteren el conjunto del contexto de la ley.

Señor presidente: para no abusar de la atención de esta Honorable Cámara, voy a concluir mi exposición sosteniendo que entregamos esta legislación al país con la absoluta seguridad de que la clase trabajadora ha de saber aplicarla con toda corrección y perfección y, especialmente, con la absoluta convicción de que aquí estamos sentando y ordenando los principios fundamentales para así lanzarnos, en lo sucesivo, a ese código de trabajo que la clase trabajadora requiere y que nosotros estamos dispuestos a otorgarle.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

Sr. Falabella. — Señor presidente: distintas circunstancias hacen que seamos muy breves en el tratamiento de este tema.

Primero, porque la Comisión de Labor Parlamentaria nos ha reducido el tiempo usual para nuestra exposición. De manera tal que no es posible en un lapso de veinte minutos entrar en el análisis pormenorizado de esta ley.

Segundo, porque ya es éste un largo debate donde se han dado las más diversas opiniones y resultaría difícil ingresar en él con originalidad, máxime si tenemos en cuenta las exposiciones vertidas en torno de este tema desde la enjundiosa pieza oratoria del señor senador Pennisi hasta la del señor diputado Aguirre.

Tercero, porque este proyecto de ley nos conforma. No tiene graves errores materiales o conceptuales. Recoge con vitalidad experiencias judiciales, voces doctrinarias e institutos de una casi tradicional legislación argentina.

Cuarto, porque ya está dicho y adelantado que los representantes del dictamen mayoritario no están dispuestos a aceptar modificaciones al contexto de la ley.

Como presidente del bloque, me voy a ocupar exclusivamente de justificar el voto afirmativo de mi partido, en tanto el señor diputado Acevedo tomará un aspecto no analizado de la ley que puede significar un aporte de futuro.

Estamos de acuerdo con esta ley por muchas circunstancias. Creemos que el gobierno contesta a un reclamo popular y cumple con una promesa. Pero estamos fundamentalmente de acuerdo porque ésta es convicción que ya ha impuesto nuestro partido, el Partido Conservador argentino que, como todos, es un núcleo operativo de producción de ideas y doctrinas. Enfáticamente dijimos en este recinto, para que no se nos confundiera y para que valiera como clara definición de nuestro grupo político, que el conservadorismo no es liberal en materia social y económica. Hicimos un muy breve es-

quema para decir que si éramos liberales en política, no lo éramos en materia social y económica. Esto fue sustentado largamente dentro del conservadurismo por el grupo interno en que los tres legisladores aquí presentes militamos, y las argumentaciones que entonces se dieron muy sintéticamente pueden valer ahora.

No queremos una libertad en el campo económico y social dada a todos en la misma cuota y en la misma proporción, porque si en el campo social se da una libertad o un derecho en la misma proporción a todos, se concluye inevitablemente con la grave injusticia de mantener, consagrar y a veces agravar las enormes diferencias y los graves desniveles que se dan en el contexto de la sociedad.

De tal manera, creemos que el Estado debe intervenir en la relación laboral y debe hacer efectiva esa intervención, teniendo fundamentalmente el objetivo de proteger al más débil y al más desfavorecido sin descuidar el objetivo de la viabilidad y el andamiaje de la empresa.

En el proyecto que estamos considerando se pueden preverse, por supuesto, normas defensivas de la empresa sino solamente normas defensivas del trabajador.

Esta posición del partido es tradicional, porque el senador Pennisi hace nacer el proceso de reivindicación de estos derechos de las masas en el primer libro que se escribe con la formulación de un proyecto de ley y que lo suscribe el ministro de Roca, Joaquín V. González, presidente fundador del Partido Demócrata Liberal de La Rioja.

Y es tradición de nuestro partido porque —aunque a veces se quiere negar o desconocer, ha debido ser citado aquí— el propio senador Pennisi dijo que las conquistas arrancan con la ley 11.729, por la que se modifica al Código de Comercio y que constituye la primera, sólida, firme y viable defensa del hombre dependiente en la relación laboral.

De manera tal que dejó fundamentada muy brevemente la posición del partido con respecto a este proyecto de ley. No lo vamos a observar en detalle, pero tiene algunas pequeñas fallas que, como veo que el tiempo me alcanza, las voy a enunciar.

En primer lugar, señalo que la denominación es mala e impropia y el día de mañana puede plantear equívocos para la actividad judicial. No puede denominarse «de contrato de trabajo» una ley que evidentemente rebasa y desborda el contrato de trabajo, que va dirigida a llenar sus vacíos, a ser suplementaria de él; que declara incluso la prevalencia de los usos y costumbres por encima del contrato de trabajo; que acepta en algunos casos la aplicación de la ley extranjera cuando es más beneficiosa para el trabajador. Puede haber un juez que se encuentre limitado por la denominación de la ley y no quiera salir de la interpretación del contrato, dejando de aplicarla por esa circunstancia.

Nada cuesta darle una denominación más propia: legislación del trabajo o código del trabajo, que podrían ser un anuncio de que se va a integrar y completar con nueva legislación, cubriendo lo que podría llegar a ser eventualmente una laguna o un vacío.

No obstante lo que han dicho los señores diputados Ponce y Aguirre, paso a señalar obscuridades de la ley.

La doctrina casi siempre ha sostenido la inconveniencia de definir dentro de la ley. A veces es imprescindible definir. Pero aquí esas definiciones no resultan claras y una definición que no va a llenar su cometido tendría que ser suprimida, porque va a significar una interferencia a la fluidez en la aplicación de la ley.

Obsérvese qué párrafo más abstruso contiene el artículo 5º. Esta es una ley muy importante porque está dirigida a todos los hombres de este territorio al cubrir a la mitad de sus habitantes, y está además legislando sobre millones de relaciones laborales, de manera tal que inmediatamente después de su sanción sus disposiciones van a ser aplicadas mil veces por día. Y no se puede dejar la observada redacción del artículo 5º porque puede traer inconvenientes.

Dice así: «A los fines de esta ley, se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos». ¿Qué quiere decir «organización instrumental de medios personales»? Yo diría, nada más que para dar un ejemplo, que a veces una empresa es un hombre sin siquiera un escritorio; es un hombre con una valija, con un portafolio o con una libreta. Entonces, puede darse el caso de que el juez entienda que no hay tal organización instrumental, como algo exterior que hace a la caracterización objetiva de la empresa. ¿Por qué no buscar una definición más simple o por qué no suprimir por ahora este artículo 5º, que puede ser una dificultad?

De cualquier manera, graves errores no los hay; fallas técnicas no las hay. Hasta se apuntó que en esta redacción y en la compilación —que no era fácil— han intervenido hombres que conocen la materia y que tienen una gran experiencia. De manera tal que nos parece que es una ley bastante bien proyectada en su redacción, muy clara en los objetivos que persigue y que, además, es justa y puede señalar una valiosa contribución a la paz social que todos los argentinos deseamos.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Acevedo.

Sr. Acevedo. — Mi intervención, señor presidente, no puede ser muy extensa por muy variadas razones. Pero acaso la fundamental sea la circunstancia de que el proyecto de ley en análisis ha sido materia de comentarios muy exhaustivos, altamente ponderables, tanto en la medida en que se ha querido esclarecer el sen-

tido de las disposiciones que la integran cuanto en la medida en que se quieren introducir modificaciones que se entienden convenientes, útiles o necesarias para el mejor funcionamiento de la normativa prevista.

Mi exposición va a ser reducida y circunscrita. Ya ha expresado el señor diputado Falabella, en representación del bloque que yo también integro, nuestra aceptación en general del proyecto. Pero yo quisiera recalcar que esta aceptación se funda todavía en alguna otra razón que es preciso reafirmar. El señor diputado Aguirre dijo en algún instante, recogiendo observaciones que se habían formulado en el recinto, que una de las críticas que habían recaído sobre el proyecto en examen consistía en que no era suficientemente revolucionario. Yo digo que no es cuestión de apoyar todo lo revolucionario porque sea revolucionario en sí mismo. En todo caso, cuando se apoya alguna legislación revolucionaria, sería útil que estuviera suficientemente fundamentada en razones que puedan justificar su inserción en la vida jurídica del país. Acaso por eso nos complazca más este proyecto —y es éste el fundamento en el que quiero reparar—; porque recoge una dilatada experiencia, tiene en cuenta las disposiciones de las leyes que hasta este momento rigen en temas ahora contenidos en el proyecto en cuestión, así como una larga, profunda e inteligente aplicación jurisprudencial y una no menos inteligente y abundante crítica doctrinaria. Y si todo esto es así, ¿cómo no vamos a tener la tranquilidad de que el contrato de trabajo estará regido en función de una provechosa experiencia y que esa experiencia es recogida con cuidado y sensatez en el proyecto en cuestión?

Dije que mi intervención en este debate iba a ser circunscrita y limitada; y voy a eso, señor presidente. En el año 1957, la Convención Constituyente que en definitiva no concluyó el programa que se había fijado a sí misma introdujo una modificación substancial al artículo 14, en virtud de la cual alcanzó jerarquía constitucional la norma que da lugar a la participación del trabajador en las ganancias de las empresas, amén de otorgarle control sobre la producción y colaboración en la dirección de ella. Dicha disposición constitucional no fue regulada en ningún momento. Solamente en estas circunstancias aparecen algunas disposiciones, muy limitadas, pero a mi modesto entender también muy atinadas, para que se ponga en marcha una institución de la que a mi juicio mucho cabe esperar y que representa el primer paso en un proceso en el que se insinúa, cada vez más firmemente, la participación del trabajador en el ámbito de la empresa. Pero esa participación no debe estar, como aparece en este proyecto, estrechamente limitada a la participación en las utilidades, sino también a otras materias que son precisamente las que recoge la disposición constitucional a que he hecho referencia.

Viene bien decir, señor presidente, cuando se habla de la legislación en particular y de la legislación que tiene una temática social, a fin de evitar las críticas infundadas, ligeras y gratuitas, cuál ha sido la sensibilidad del conservadorismo en la vida del país y en esta materia. Precisamente este tema, el de la participación del trabajador en las ganancias de la empresa, tiene su primera expresión a través de un proyecto de Carlos Pellegrini. Así mismo, en materia de legislación social, se ha recordado aquí en qué circunstancias fue sancionada la ley 11.729, que comportó un positivo adelanto para los intereses de los trabajadores argentinos. Y por si fuera poco, en el año 1957, en la discusión de este mismo precepto constitucional que recién recordaba, se contó con la participación de los constituyentes integrantes del bloque del centro, entre los que cabe recordar, en primer término, a Aguirre Cámara, a Pastor, a Jofré, a González Bergez, y a algunos otros que seguramente escapan a mi memoria. Todos ellos no solamente prohibieron la disposición que después tuvo cabida en la Constitución Nacional, sino que la fundaron con extensión y con inteligencia.

De allí pues que nos parezca útil referirnos a la forma como ha sido legislada en el proyecto que se debate pero, más que eso, cuáles son las posibilidades que abren en la sociedad del futuro previsiones de este género, que hacen al tema —candente por un lado, tremendamente polémico por otro— de la participación de los trabajadores en la empresa. Por supuesto, el concepto no sólo comprende la participación en la propiedad y en las utilidades, sino también en la gestión y en la dirección de la empresa.

Cuando se ha querido precisar con qué fundamento se buscó este objetivo de dar participación a los obreros en las utilidades de la empresa, se recordó que en definitiva se tiende a interesar a más personas para producir más bienes y servicios y distribuirlos entre un mayor número de individuos. Es cierto también que este triple objetivo ha sido muy discutido cuando se trató de legislar para llevarlo a la realidad práctica.

Por otro lado, las ventajas en que se funda el instituto parecen tener contrapartidas más o menos importantes, recogidas en una crítica no muy frecuente, pero sí muy tenaz, donde se señala una serie de inconvenientes que yo no tengo por tales, por lo menos en la medida en que se los quiere hacer aparecer.

Si se toman ciertos recaudos —y vamos a ver en qué medida la ley los adopta—, éste es un instituto provechoso del que vale la pena que se haga eco el trabajador argentino, porque hace a las posibilidades de una futura sociedad mejor, conforme lo expondré en el momento final de mi exposición.

Se suele decir que este régimen sirve para consagrar alguna injusticia, porque iguala al trabajador meritorio con aquel que no lo es. A

este respecto, quiero decir simplemente que el hecho de que excepcionalmente el instituto pueda dar lugar a una crítica fundada en esa circunstancia, no sirve para invalidarlo en sí mismo, si es que la regla consistirá siempre, precisamente, en premiar al más meritorio.

Se suele añadir que las ganancias de las empresas dependen de otros factores y no solamente del factor mismo de la producción; que pueden deberse a circunstancias excepcionales y contingentes que pueden dar lugar a que en un determinado instante una empresa pueda exhibir en un balance una ganancia interesante. A lo que respondo más o menos lo mismo que recién expresara para desvanecer la crítica anterior: no debemos confundir lo que es excepcional con lo que es normal o lo que es la regla.

Se suele agregar —siempre en actitud crítica— que lo que interesa a los accionistas es constituir reservas en las empresas, de tal modo que sus acciones se valoricen; que lo que interesa a los directivos es obtener buenas retribuciones al cabo del ejercicio; y que unos y otros son obstáculos que cooperan para impedir un buen o adecuado funcionamiento del instituto. Es decir que el egoísmo de los hombres en sus intereses quiebra la posibilidad de armonía que es indispensable, porque en ella subyace el fundamento primero de esta institución.

Pero a propósito de esto he de decir, por supuesto, que la institución de la participación de los obreros en las ganancias de la empresa supone un grado de capacitación lo suficientemente elevado en aquellos que tienen aparentemente intereses diferentes o antagónicos como para alcanzar por la vía de la reflexión y de la comprensión que si ese antagonismo desaparece va a ser fructífero para empresarios, capital y trabajo y, más aún, para la sociedad misma, que aprovecharía del desenvolvimiento de una institución de este género.

Se dice también que las discusiones que engendra la mecánica de su aplicación a menudo son factores de roce y de conflicto. Es válido para esta observación crítica lo que dije con anterioridad. En todo caso hay alguna otra que sí parece tener un cierto fundamento. Se afirma que la participación, en la medida en que asocia al empresario con el trabajo, suele constituirse en perjudicial para el interés de los consumidores. Por cierto que esto podría ocurrir pero depende también de la política que se adopte en materia económica, porque si las posibilidades del mercado son fluidas y abren la alternativa de cotejo, esto no es una crítica que pueda tener ni andamiaje ni fundamento.

En síntesis, para no exagerar, ninguno de los inconvenientes que se proclaman tiene la suficiente entidad como para que nosotros podamos decir que institutos de esta naturaleza deben ser desalentados o eliminados de nuestra legislación. Yo le veo ventajas ciertas; y añado, ade-

más, que en la forma en que ha sido recogido en el proyecto, según lo preceptuado en los artículos 112, 113, 119, 120 y disposiciones complementarias, lo veo satisfactoriamente elaborado, pese a que se trata de un conjunto muy reducido de normas. En primer lugar, porque no lo impone con un criterio imperativo o coactivo. Es decir que ésta es una facultad que se abre a empresas y trabajadores para que puedan acordar, convenir y pactar esta forma de retribución, conforme así resulta de lo dispuesto en el artículo 113 del proyecto en examen. En segundo lugar, porque con antelación a toda posibilidad de distribución de beneficios, utilidades o ganancias se asegura al trabajador un salario justo —y cuando menos el mínimo vital y móvil—, lo que permite entender esta participación en las ganancias como una mejora de la retribución, ya de por sí suficiente, pero que tiende a expresar que aquel que contribuye a la creación de la riqueza debe también ser retribuido por esta circunstancia y en relación al aporte por él efectuado.

Lo único que confieso me preocupa un tanto y que podría apuntarse como defecto —que acaso no lo fuere, según se lo interprete— es la circunstancia de que, conforme al artículo 119 del proyecto en estudio, la distribución de las utilidades se practicará sobre utilidades netas. Claro que esto significa, a mi modo de ver, que uno de los términos de la relación estará dado por las utilidades netas; el otro término de la relación por un porcentual variable, el cual —sobre esto quiero hacer fincar una observación que me parece útil a los fines de la interpretación que pueda hacerse de esta normativa— se liquidará sobre utilidades netas. Esto quiere decir que la empresa estará facultada para practicar reservas que sirvan para cubrir déficit futuros o, más en particular, que sirvan para nuevas edificaciones, para substituir maquinarias, para adquirir tecnología y, en definitiva, para preservar la necesidad de progreso de la empresa, progreso que a la postre habrá de favorecer también al núcleo de trabajadores que en ella participa.

Digo también, en tren de esclarecer el sentido de alguna disposición, que el artículo 120 autoriza la verificación y control de la documentación de la empresa a objeto de establecer el *quantum* de las utilidades, y que por ahí se ha insinuado la posibilidad de que se sostenga que esta disposición es inconstitucional. Yo entiendo que no lo es, señor presidente, porque no podría serlo el mecanismo creado por la ley para asegurar que uno de los derechos consagrados en la Constitución cobre plena validez y eficacia. No es, a mi juicio, inconstitucional la redacción asignada al artículo 120. Además, es también provechoso que esta distribución se deba practicar en periodos determinables de antemano, conforme lo establece el artículo 141.

Se ha legislado con criterio realista, por todo lo que acabo de decir. Este es un primer paso hacia otras formas de participación, en las que no me parece apropiado entrar por lo que dije hoy, por lo altamente polémico, por lo discutible de los resultados y por lo que insinúan las encuestas, que parecieran mostrar desinterés por parte de los propios trabajadores en un régimen de esta naturaleza. Tengo mis dudas de que esto ocurra y creo en la bondad de una renovada experiencia, que será la que en definitiva alentará a llevar adelante algunos modos o formas de participación.

Digo, a propósito del proyecto en examen, que se acoge una aspiración razonable cuando se señala que este régimen sirve a mejorar los niveles de vida del trabajador, expresada fundamentalmente a través de salarios más altos. Y creo que está claro que con ello se tiende, en el estadio actual de las exigencias de los trabajadores, a satisfacer una pretensión en ellos primordial. Favorecerá también la productividad; y sobre todo, señor presidente, si es que nosotros ambicionamos a convivir en una sociedad donde todos podamos entendernos —y en donde es frecuente mostrar como grupos antagónicos a los del capital y del trabajo—, regímenes o institutos de esta naturaleza servirán para mejorar las relaciones obrero-patronales, lo que será seguramente beneficioso para ambos sectores a fin de estimular y afianzar el sentido comunitario de la empresa.

Los grupos obreros van mejorando progresivamente sus posibilidades educacionales y críticas a favor de los mejores niveles de vida con que van contando. Si esas posibilidades críticas se vuelcan sobre el tema de la participación se podrá dar una respuesta satisfactoria a una de las tantas exigencias de una sociedad en transformación que lleve a una sociedad solidaria y donde esta solidaridad se muestre activamente por esa vocación de entendimiento, de ayuda y de cooperación entre los distintos grupos que la componen.

Esta es una institución que a los conservadores nos satisface alentar, y a la que, según nuestro pronóstico, le está reservada una amplia posibilidad de futuro porque, al favorecer las relaciones sociales, será más fácil el paso de una sociedad donde persisten los antagonismos a una sociedad en donde convivan con dignidad las diferentes comunidades que la componen.

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra el señor diputado Rojas.

Sr. Rojas. — Señor presidente: en el trámite de la ley de contrato de trabajo que nos ocupa en este momento estamos considerando precisamente este documento nacional que, incuestionablemente, servirá para todos los trabajadores argentinos. Pero con el respeto que me merecen algunos señores diputados, he podido observar que pareciera que cuando un gobierno popular como el del general Perón quiere san-

cionar una ley que significa conquistas y mejoras jurídicas para los trabajadores argentinos, nos encontramos con que sectores que representan a algunos partidos impopulares en la Honorable Cámara pretenden ahora cuestionar este documento aduciendo ciertas normatividades que no conciden con el proceso revolucionario que vive el país en este momento.

Vemos que se habla de mejorar algunos artículos del proyecto de ley de contrato de trabajo. Nosotros tenemos que decir que en la redacción de este documento han intervenido dirigentes sindicales junto con sus cuerpos de asesores. En esta forma se ha recogido lo mejor que existe en el país en materia jurídica. Han trabajado también los compañeros de la Confederación General del Trabajo, de las 62 Organizaciones e integrantes del Poder Ejecutivo nacional. Esto demuestra que se ha trabajado activamente para cumplir con la plataforma política del peronismo y con los anhelos de los trabajadores.

Aquí se ha dicho que este documento tiene algunas obscuridades que no conciden con la claridad con que debe legislarse en esta Honorable Cámara. Hay obscuridad, señor presidente, pero existen muchas leyes que duermen en los archivos de la República, y que en ningún momento han tenido la fuerza necesaria como para demostrar a la clase obrera argentina que, incuestionablemente, se quería cumplir con el cometido expresado en la redacción de un documento.

Aquí también se ha dicho que éste no es un proyecto revolucionario, que no es un código, que se trata simplemente de una recopilación de leyes del trabajo. Nosotros podemos afirmar, en cambio, que esta iniciativa del contrato del trabajo constituye realmente una avanzada revolucionaria en el país.

Lamento tener que hacer uso de la palabra a esta altura del debate, porque mis compañeros de bancada ya han expresado su opinión, con la cual coincido, sobre aspectos substanciales de este proyecto de ley. Sin embargo, deseo significar que esta iniciativa trasunta conquistas irrenunciables y hechos que hasta este momento eran desconocidos. Debido al estudio realizado por nuestros dirigentes y a la responsabilidad que caracteriza a los integrantes del Poder Ejecutivo, nos encontramos ante un proyecto que, sin duda, habrá de mejorar todas las conquistas sociales y jurídicas de los trabajadores argentinos.

Sin embargo, veo con asombro que se quiere dar la impresión de que estamos tratando un proyecto que va a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Por el énfasis que han puesto algunos señores diputados en sus exposiciones, pareciera que estamos tratando la intervención a la Confederación General del Trabajo, como ocurrió en los gobiernos de la dictadura; pareciera que estamos considerando el asalto a mano armada a los sindicatos como se hizo en la época de la dictadura, o la persecución sistemática de

los dirigentes obreros para encarcelarlos, como también se hizo en la época de la dictadura.

Y no es así. Estamos tratando un dictamen que es una avanzada en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo entero.

En esta Honorable Cámara nuestra labor se ha desarrollado dentro de la cordialidad y la crítica constructiva de los señores diputados. Esto nos compromete a aceptar ciertas modificaciones de forma, pero no de fondo. Por ello nos alarma cuando algunos señores diputados parecen querer indicar que este proyecto de ley va a lesionar los intereses de la clase trabajadora cuando, en realidad, se quiere trastocar el procedimiento empresario en el país. También nos alarma la circunstancia de querer subestimar la redacción de este dictamen que estamos considerando.

Decimos con énfasis que estamos tratando un código que va a garantizar un proceso orgánico en el país y que va a dar solución a distintos problemas que se plantean en el plano laboral.

Por ejemplo, en el artículo 31 del proyecto, se trata del caso de los contratistas. ¿Acaso el país y la clase trabajadora no están causados de que los señores contratistas y subcontratistas o los representantes de la patronal violen o eludan las convenciones colectivas de trabajo? ¿Acaso no sabemos que estos *petit patrons*, explotadores en formación, son los que violan las disposiciones legales? Este documento determina la obligatoriedad recíproca de los contratistas con el principal a los efectos de no anular las leyes sociales, los convenios colectivos de trabajo y las leyes vigentes.

No se preocupen los señores diputados por el cumplimiento de este código y de las leyes laborales, porque el movimiento obrero argentino, gracias al gobierno popular de nuestro líder, el general Perón, está totalmente consubstanciado con la responsabilidad que le compete para hacer cumplir las leyes y afianzarlas más aún, si fuere necesario, teniendo el objetivo de conseguir mejoras salariales y procurando un mejor ordenamiento jurídico, que incuestionablemente necesita el movimiento obrero.

Muchos de los temas que era mi intención abordar ya han sido analizados por otros señores diputados, por lo que en homenaje a la brevedad, no me referiré a ellos.

En esta oportunidad, quiero rendir mi homenaje a todos los dirigentes gremiales del país que han dejado lo mejor de su vida en la lucha sindical, y a los parlamentarios que han volcado en esta Cámara lo mejor que tenían de sus inquietudes y aspiraciones. Rindo mi homenaje a Alfredo Palacios y al caudillo político que fue don Hipólito Yrigoyen, que también abrazó este proceso de luchas de las clases populares, y en la cúspide de todos ellos, al líder de América, de hoy, de mañana y de siempre, el general Juan Domingo Perón. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pereira). — Tiene la palabra

Sr. Castellano. — Señor presidente: el Movimiento de Integración y Desarrollo, miembro del Frente Justicialista de Liberación, consecuente con su posición y raíz popular y nacional, adelanta su voto favorable al proyecto de ley con las reformas introducidas en la Comisión de Legislación del Trabajo y las que solicita nuestra bancada, por considerar que supone una regulación orgánica del contrato de trabajo y de sus instituciones accesorias, incorpora y sistematiza las anteriores legislaciones sobre el particular y adopta los criterios interpretativos aceptados por una jurisprudencia avanzada y constante de nuestros tribunales laborales, que fueron dándole un perfil característico a toda la legislación laboral vigente y creando un particular y adelantado sistema de normas que regulan y protegen el trabajo en relación de dependencia.

El proyecto de ley en consideración significa una avanzada importante en la lucha del movimiento obrero argentino y del movimiento nacional por la consecución de los fines y objetivos que se propone la clase obrera como integrante de la Nación, y demuestra en sí mismo una clara y permanente prudencia en el accionar del movimiento obrero argentino, que en este momento histórico del país no exige pretensiones que pueden resultar justas desde el punto de vista de la justicia social *strictu sensu*, pero que de tratar de llevarlas adelante encontraría que no están suficientemente basadas en una estructura económica, social y política como para pretender que se apliquen.

Debe comprenderse en este Honorable Congreso que toda pretensión jurídica que desee ampararse dentro de una norma debe ser el fiel reflejo de la realidad social que quiera regular y ajustarse a las posibilidades fácticas de esa estructura, so pena de que tal pretensión carezca de vigencia y resulte una disposición desprovista de toda eficacia jurídica.

Por ello este proyecto, que incorpora sistemáticamente en su seno toda la realidad institucional de la legislación del trabajo, mejorándola en muchos de sus aspectos y dando certeza en todos los casos a una tendencia que se ha ido perfilando por una jurisprudencia y una interpretación doctrinaria avanzadas de nuestro derecho laboral, es sólo comparable con las legislaciones más adelantadas que sobre la materia existen en el mundo. Debe reconocerse, entonces, que este proyecto toma en cuenta el momento histórico y el proceso que vive el país.

La iniciativa que consideramos significa una avanzada, porque sistematizando toda la legislación laboral del pasado e incorporando instituciones suficientemente aceptadas por la realidad social, impone una regulación que da garantía a las leyes que protegen el trabajo en relación de dependencia.

Quiero, haciendo honor a este proyecto, ensayar una defensa ante las críticas formuladas

por algunos señores diputados, en cuanto a la filosofía misma del contrato de trabajo, que supone aceptar una regulación diferente basada tal vez en una realidad económica mucho más adelantada y que de pretender regularse en este momento no tendría aceptación por la estructura en que nos desenvolvemos.

No desecho, y acepto sinceramente, que todas las naciones del mundo marchan hacia un socialismo constante y hacia un sistema de regulación del trabajo muy superior al que estamos legislando aquí, pero ése es un proceso que se va dando en la historia lenta y progresivamente y por el reconocimiento de una lucha permanente de la clase trabajadora que impone nada más ni nada menos que aceptar la realidad social que pretende ser regulada y al mismo tiempo, desde ese punto de vista, bregar por nuevas instituciones que mejoren el trabajo como parte fundamental de la humanidad.

Por eso no pueden aceptarse las críticas que se formulan a este proyecto de ley de contrato de trabajo, que van dirigidas a atacar la base misma de nuestra sociedad que, tenemos que reconocerlo, es una sociedad nacional subdesarrollada y, por lo tanto, dependiente de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y de las metrópolis donde éstas se hallan asentadas. Nosotros, para romper esa dependencia, para producir un proceso de verdadero cambio estructural en el país, que signifique modificar las estructuras agroimportadoras por otra industrial avanzada que dé base material a la justicia social, a la soberanía política y la soberanía internacional, solamente podemos aceptar como principio básico de todo el accionar argentino y nacional la alianza de clases y de sectores populares a fin de luchar contra los intereses internacionales y sus aliados internos que son las oligarquías vernáculas y los intereses gerenciales de las corporaciones multinacionales que pretenden mantenerlo en el atraso.

Yo acepto que es posible que en una etapa superior se pueda lograr la colectivización de los medios de producción y la solidaridad interna en el trabajo. Pero, como dije anteriormente, tengo que reconocer que eso se logrará después de un largo proceso en el que, no nos equivocamos, el movimiento obrero argentino tendrá su participación efectiva.

Pero también resulta lógico reconocer que en este momento preciso de la historia tenemos que hacer un esfuerzo y lograr que las clases y sectores que componen la Nación coincidan en sus intereses comunes. Es absolutamente cierto que sin que el empresariado nacional y la clase trabajadora encuentren un punto coincidente en su lucha para alcanzar una estructura superior de la sociedad, no se logrará una sociedad nacional fuerte y unida que sea suficiente garantía como para tener un gobierno que pueda disponer, transigir y transar con los intereses extranjeros al país, manteniendo nuestro principio de la

soberanía popular y nacional. Por eso rechazo, por considerarlas superadas por la realidad geográfica e histórica, las pretensiones de quienes propician la socialización de los medios colectivos de trabajo y una diferente relación en el vínculo laboral, porque so pretexto de ello lo único que lograrían objetivamente es atacar el principio de la alianza de las clases y sectores nacionales, favoreciendo la penetración de las corporaciones multinacionales.

Por eso, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que tiene una raíz eminentemente popular demostrada durante su gobierno con la sanción de una ley tan importante para el movimiento obrero como es la ley 14.455, de asociaciones profesionales, va a votar favorablemente este proyecto, no por considerarlo una legislación revolucionaria desde el punto de vista meramente técnico, sino por entender, desde el punto de vista histórico, que es una verdadera avanzada del movimiento obrero argentino que rendirá grandes beneficios a toda la sociedad nacional.

Sr. Presidente (Pereira). — Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Ponce.

Sr. Mombelli. — Desearía formular una aclaración.

Sr. Ponce. — Le concedo la interrupción al señor diputado.

Sr. Presidente (Pereira). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Mombelli.

Sr. Mombelli. — Agradezco la amabilidad del señor diputado Ponce.

He escuchado con detenimiento las exposiciones relacionadas con este proyecto. No quiero abundar sobre el tema, pero sí deseo consignar que mi partido apoya la sanción de esta ley. Los argumentos ya han sido dados por los distintos oradores, por lo que me limito a expresar que brindamos nuestro apoyo por considerar que esta ley se ajusta a la realidad del momento.

Sr. Presidente (Pereira). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Ponce.

Sr. Ponce. — Señor presidente: en nuestro informe inicial habíamos solicitado a la Honorable Cámara la aprobación en general del despacho producido por las comisiones que han estudiado el tema en consideración. Pero, antes de que se someta a votación en general, quiero formular algunas aclaraciones con respecto a una posición sustentada en la última hora de la sesión del día de ayer, a raíz de que la comisión no pudo efectuar la réplica en su momento ya que se pasó a cuarto intermedio hasta el día de hoy.

En su exposición, el señor diputado Marino hizo alusiones que, en mi carácter de diputado de extracción obrera, con largos años de lucha en pro de la reivindicación de los derechos del trabajador, exigen una aclaración.

Ante todo, debo decir que la opinión del señor diputado Marino es confusa, cuando no contradictoria. Comenzó su exposición advirtiendo que no debíamos engañarnos porque este proyecto de ley está destinado sólo a insertarse en el actual sistema socioeconómico sin pretender modificarlo; y que no debemos engañar a sus destinatarios, es decir, a los trabajadores. Y cerró su exposición manifestando que este proyecto es un avance legislativo de importancia para proteger los intereses del proletariado en su permanente búsqueda para mejorar las condiciones de labor.

Indudablemente, el señor diputado Marino sufre una gran ofuscación, pues, por una parte —según él— el proyecto no se traduce en ninguna mejora y, por otra parte, es un avance importante. Quizás el señor diputado Marino sufra el proceso de las contradicciones sin haber logrado la síntesis.

No considero oportuno introducirme nuevamente en el tema, por cuanto los diputados preopinantes de nuestra bancada han sido elocuentes al respecto; pero, abusando de la tolerancia de esta Honorable Cámara, me referiré brevemente a alguna de las expresiones vertidas por el señor diputado Marino.

En primer término, su alusión a que uno de los fundamentos del proyecto obedece a un criterio de división de clases. Niego, no ya como diputado sino como trabajador, que eso sea exacto. El señor diputado Marino podrá citar al abogado mexicano de la Cueva, pero lo que omitió declarar es que dicho tratadista sustenta la filosofía marxista y, por ende, clasista. Por lo tanto, por muy respetables que sean sus ideas, no concuerdan con los postulados del movimiento justicialista, al cual pertenecemos, tan ajeno a los intereses marxistas como a los intereses capitalistas. Para el justicialismo, como bien lo dijera el general Perón, sólo existe una clase de hombres: la de los que trabajan.

El señor diputado aludió a la existencia de la propiedad privada como un baldón del cual debemos rápidamente desembarazarnos. Yo le digo al señor diputado que el gobierno popular admite la existencia de la propiedad privada siempre que ésta cumpla inexorablemente una función social.

Concuerdo, sí, con el señor diputado en cuanto expresó que el nuevo texto no agota todas las posibilidades de reforma. Este código sufrirá con el tiempo, breve o prolongado, las modificaciones que las circunstancias exijan, pues sostener lo contrario significaría la inmovilidad y no admitir la evolución de esta disciplina tan fundamental y decisiva como es el derecho del trabajo. En una palabra, no nos colocamos en retardatarios.

Por ello, le niego el carácter paternalista que quiere asignarle al proyecto de marras, no obstante las reminiscencias a que ha hecho refe-

rencia el señor diputado, que se remontan hasta el origen primitivo del hombre.

El señor diputado ha manifestado preocupación en lo que respecta al salario mínimo. Justamente no hemos querido fijar esas condiciones, pues nos parece más justo que la actualización se realice conforme a las variaciones del costo de la vida. La periodicidad será determinada justamente por esa coyuntura. No olvidemos, por otra parte, que el año venidero, de acuerdo con los anuncios oficiales, gracias a Dios, la clase trabajadora argentina ha de poder discutir libremente sus convenciones colectivas de trabajo tal cual lo ha establecido la ley 14.250.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

Sr. Ponce. — Para terminar le diré al señor diputado que no se ponga en la situación de aquellos a quienes el general Perón consideró como apresurados, es decir, de quienes creen que no se hace nada si no se mata gente o no se meten bombas.

El señor diputado Zavala Rodríguez propuso algunas modificaciones que, por cierto, pueden ser muy plausibles frente a las reales necesidades que tienen los trabajadores argentinos. Y él alude a que se inserte en este contrato de trabajo lo establecido en el proyecto elaborado por la C.G.T. Pero aquí es importante remarcar que la Comisión de Legislación del Trabajo, en todo momento y en todo minuto de su labor, que por cierto fue muy ardua, trabajó mancomunadamente con el movimiento obrero organizado, a través de la C.G.T. y de las 62 Organizaciones peronistas. Y ellos en conjunto con el gobierno del general Perón han sido, precisamente, los motores fundamentales de este proyecto de ley sobre contrato de trabajo que, en el día de la fecha, con su sanción, posibilitará que todos los trabajadores argentinos tengan una legislación justa y que se termine definitivamente con las especulaciones mezquinas de todos aquellos que, de una u otra manera, pretendieron utilizar a los trabajadores como un simple objeto.

Por eso le pido al señor diputado Zavala Rodríguez que tenga fe en el gobierno, porque precisamente este contrato de trabajo ha sido elaborado por la comisión de acuerdo con los trabajadores legalmente organizados. Tanto es así que la Confederación General del Trabajo le ha dado su aprobación unánime, y también lo han respaldado las distintas expresiones del movimiento obrero argentino a lo largo y a lo ancho del país; todos han venido reclamando la urgente necesidad de sancionar cuanto antes esta ley referida a los contratos de trabajo.

Si bien es cierto que las innovaciones que pretenden algunos señores diputados son realmente las que en un futuro no muy lejano ha de cumplimentar el verdadero código laboral que

anhelamos los trabajadores argentinos, no es menos cierto que la prudencia y la mesura de los que tienen la responsabilidad de conducir a los trabajadores representados por la C.G.T. y las 62 Organizaciones peronistas han prevalecido decididamente. Ellos han sabido hacer todo en su medida y armoniosamente y es por eso que, aun sabiendo que son muchas las necesidades, han aceptado como un avance revolucionario todas las innovaciones que se introducen a un derecho laboral que a este tiempo ya lo podemos denominar como caduco.

Los trabajadores argentinos, de esta manera, le diremos adiós a la ley 11.729, porque de una u otra forma ella ha sido el instrumento justo que hasta este momento tuvimos los trabajadores argentinos. A su vez, le damos gracias a aquellos pioneros que fueron quienes redactaron esa ley, que se puso en práctica primero para los compañeros de la Confederación General de Empleados de Comercio y que después el general Perón la hizo extensiva, por un decreto firmado en 1946 a todo el movimiento obrero argentino. Por ello, les decimos nuevamente a todos esos compañeros: muchas gracias, porque han sabido sustentar durante largos años esa herramienta legal que permitió en su tiempo hacer justicia a todos los trabajadores.

A los señores diputados de las bancadas opositoras la comisión debe darles las gracias, porque su oposición ha sido constructiva y darán su voto favorable, no personalmente en nuestro favor, porque todos sabemos que este proceso de reconstrucción que nos ha unido a todos los argentinos nos permitirá vivir en una democracia integrada. Ese voto es justo, porque estamos dando lo que realmente necesitan los trabajadores, que en definitiva podrán decir en un futuro no muy lejano que ciertamente la Argentina ha llegado a ser potencia porque ha sido liberada. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Marino.

Sr. Marino. — Simplemente deseo señalar al señor miembro informante de la comisión, que me ha aludido repetidas veces en la primera parte de su exposición, que cuando expresé que el proyecto no significaba una innovación en el campo laboral argentino, que no se trataba de un código del trabajo, que representaba una simple recopilación pero que era algo positivo, lo hice leyendo textualmente el mensaje y la exposición de motivos enviados por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, la imputación que ha hecho el señor diputado no me llega.

En cuanto a que el profesor de la Cueva es marxista, ello va por cuenta, idea e interpretación del señor diputado. De cualquier manera, en este recinto distinguidos colegas de la bancada mayoritaria, que desde luego no pertenecen al Partido Socialista, han tributado un homenaje al doctor Alfredo L. Palacios. Digo a este respecto que cuando en torno al fundamento de una ley se rinde homenaje a un hombre preocupado

por estos temas, nadie se está embanderando en un partido determinado. Yo no puedo hacer una imputación a los diputados de la mayoría que elogiaron al doctor Palacios, ni les impongo el marbete de socialistas.

Respondo pues al señor diputado Ponce, con toda consideración y con todo aprecio, que no tengo contradicciones en mi pensamiento. Si carezco del poder de síntesis que a él le reconozco, ello no significa que tenga contradicciones, sino simplemente que me falta una facultad que sólo Dios da a los hombres y que no es ni puede ser motivo de imputación.

Cuando he participado en el debate en nombre del sector al que pertenezco, he sido claro y preciso. Apoyamos esta ley porque es una ley protectora de los derechos de los trabajadores; pero hemos aclarado la diferencia que existe entre la protección y el proceso revolucionario que está insito en todo movimiento obrero organizado.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar en general el despacho sobre contrato de trabajo.

— Resulta afirmativa de 151 votos; votan 152 señores diputados.

Sr. Mombelli. — Que se rectifique la votación.

Sr. Moyano. — Pido rectificación.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a practicar la votación nuevamente.

— Resulta afirmativa por unanimidad de 154 votos. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Busacca). — Antes de someter el proyecto a la votación en particular, la Presidencia desea consultar, en razón de tratarse de un proyecto venido en revisión, si se votarán los artículos que tienen modificaciones o agregados, incluyéndese las observaciones correspondientes al Diario de Sesiones, o bien si la votación se hará artículo por artículo.

Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — La comisión ha recopilado con anterioridad a esta sesión y en el curso de ella, las inquietudes de los legisladores que representan a los distintos sectores de la Honorable Cámara; ha estudiado las propuestas de reformas y ha receptado algunas favorablemente. Como consecuencia de ese análisis, se ha determinado qué modificaciones habrá de aceptar la comisión.

Para abreviar el trámite parlamentario, solicito que todas las modificaciones presentadas se incorporen al Diario de Sesiones sin que sean tratadas en este recinto, excepto aquellas que expresamente va a proponer el diputado que habla, en nombre de la comisión, y luego de considerar estas reformas, votar los respectivos artículos y después por título, para evitar el voto en particular de cada una de las disposiciones.

Sr. Presidente (Busacca). — Es decir, señor diputado, si no he entendido mal, que no se tra-

tarian todos los artículos, sino aquellos que figuran modificados en el despacho.

Sr. Salomón. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Mira.

Sr. Mira. — Señor presidente: la idea que teníamos en nuestro bloque era que habría un trámite en particular y queríamos, en los artículos en que tenemos disidencia, hacer una breve fundamentación, dado que el tiempo de las intervenciones que tuvimos ayer no nos alcanzó para todos los artículos sino para los más importantes.

En caso de que no se adopte ese criterio por la mayoría de esta Cámara, nosotros pedimos que las fundamentaciones sobre los artículos en que solicitamos modificaciones sean incluidas en el Diario de Sesiones. Yo las tengo sobre mi banca.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Lucena.

Sr. Lucena. — Quería manifestarme en igual sentido, señor presidente. Estaba en el pleno convencimiento de que en el tratamiento en particular íbamos a hacer la consideración de algunas sugerencias o proposiciones a determinados artículos que entendemos mejoraban el proyecto. Pero si la mayoría lo ha decidido así, pido también la inserción de las propuestas de modificación hechas por el diputado que habla.

Sr. Presidente (Busacca). — Obran en la Secretaría todas las observaciones formuladas por los señores diputados, que serán oportunamente incorporadas al Diario de Sesiones.

Tiene la palabra el señor diputado Araya.

Sr. Araya. — Señor presidente: consecuentes con la votación general que ha realizado nuestro bloque, y teniendo presente la disidencia parcial con el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, hemos hecho llegar a la mesa los artículos en los cuales formulamos sugerencias y de los que surgen disidencias, que son los artículos 49, 59, 22, 24, 54, 64, 104, 197 y un artículo nuevo, en el entendimiento de que por tratarse de disidencias, y para conocimiento de los restantes señores diputados, sería de importancia que la comisión y la mayoría del cuerpo las tratara para ver si son aceptadas o rechazadas y para formular la breve argumentación que corresponde.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Señor presidente: la comisión ha estudiado las propuestas de los señores diputados Mira, Lucena y Araya, y algunas de ellas han sido aceptadas. Las restantes fueron consideradas y se rechazaron, por lo cual estimo innecesario su tratamiento en este recinto.

Nosotros vamos a votar favorablemente la inclusión en el Diario de Sesiones de todas las propuestas de reforma, pero no su consideración en el recinto de la Honorable Cámara.

Por otro lado, solicitamos que se traten los once artículos del proyecto de ley de contrato de trabajo. Al considerarse el artículo 1º, por el que se aprueba el régimen del contrato de trabajo, entraremos en el análisis de las reformas que van a ser propuestas por esta comisión.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Lucena.

Sr. Lucena. — Señor presidente: he pedido la palabra para preguntarle al señor diputado Salomón si en el tratamiento en particular se puede aceptar la aclaración o inteligencia de la redacción de algunos artículos.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia ha interpretado que la proposición del señor diputado Salomón es en el sentido de referirse exclusivamente a los artículos del despacho que se encuentra en las bancas de los señores diputados y no a todos los artículos del proyecto. Por consiguiente, las observaciones formuladas a otros artículos que no sean los del dictamen se incorporarán al Diario de Sesiones sin ninguna discusión.

Sr. Lucena. — Lo he comprendido perfectamente, señor presidente. Mi pregunta se refiere a algo distinto. Se trata de ciertos artículos que podrían parecer oscuros en su redacción y respecto de los cuales cabría preguntar al señor presidente de la comisión para que quede como interpretación la inteligencia del artículo.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Deseo aclarar, señor presidente, que además de las reformas que tienen en su poder los señores diputados se harán otras, propuestas por otros señores legisladores.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos Alberto Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Señor presidente: en la forma en que está redactado el artículo 1º del régimen del contrato de trabajo resulta evidente que con su sanción automáticamente queda sancionada toda la ley, porque dice que el contrato de trabajo se rige por esta ley.

En consecuencia, de acuerdo con lo que hemos conversado con algunos miembros de la comisión, y para no transgredir las disposiciones del reglamento, estimo que lo más práctico, a fin de atender la preocupación de los legisladores que deseen proponer alguna reforma, sería votar las modificaciones que se sugieran y posteriormente, en una sola votación, votar toda la ley y no capítulo por capítulo. Es decir que la comisión manifieste si acepta o no las reformas y luego, en una sola votación, votamos la ley.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Señor presidente: mis expresiones anteriores estuvieron referidas al tratamiento del artículo 1º del proyecto de ley, porque estoy de acuerdo en que luego de tratarse las reformas que va a proponer la comisión se vote el artículo 1º en su totalidad, incluyendo

el régimen de contrato de trabajo. En consecuencia, la Presidencia tendría que poner en consideración el artículo 19 del proyecto de ley.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos Alberto Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Solicito la inserción en el Diario de Sesiones, juntamente con las otras cuya inclusión ha sido ya pedida por la comisión de un estudio comparativo de la ley que he realizado y que obra en mi poder.

Sr. Presidente (Busacca). — Si hay asentimiento, se insertarán en el Diario de Sesiones todas las modificaciones propuestas.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Busacca). — Se procederá en la forma indicada (1).

Tiene la palabra el señor diputado Portero.

Sr. Portero. — Con la sola finalidad de encontrar un procedimiento más ajustado al reglamento sugiero lo siguiente: que el miembro informante de la comisión, antes de la votación, anuncie qué artículos propone se modifiquen. En consecuencia, con la votación unánime o de mayoría de la Cámara que apruebe el cambio de despacho tendríamos ya antes de la votación un texto definitivo. Luego la votación en general y en particular a libro cerrado resolvería. Sugiero este procedimiento, además de hacer constar en el Diario de Sesiones las proposiciones por escrito.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Ponce.

Sr. Ponce. — La Comisión de Legislación del Trabajo ha receptado, como bien lo manifestara el señor diputado Salomón, todas las inquietudes que han planteado los señores diputados, motivo por el cual va a señalar las modificaciones que acepta y las que no acepta.

En consecuencia, la comisión va a decir cuáles son las modificaciones que propone. Si la Presidencia me lo permite, a tal efecto le concedería la palabra al señor diputado Salomón.

Sr. Massolo. — Si el señor diputado Salomón me permite...

Sr. Salomón. — Sí, señor diputado.

Sr. Massolo. — Deseo saber si obran en poder de la Comisión de Legislación del Trabajo las modificaciones que oportunamente hice llegar a la Presidencia referidas a los artículos 22, 54 y 64.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia le informa que obran en poder de la comisión.

Sr. Bravo (C. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos Alberto Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Solicito que la comisión tenga la gentileza de informarnos si obra en su poder el artículo nuevo propuesto por la ban-

cada de la Unión Cívica Radical, que dice: «La jornada horaria de trabajo en todo el país será de ocho diarias o cuarenta y cuatro semanales. Las horas efectivamente trabajadas serán bonificadas con el 9,1 por ciento, en compensación de las horas no trabajadas en día sábado (jornada de la tarde).»

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Estimo que si entramos a considerar todas las preguntas que se formulan terminaremos modificando el procedimiento a seguir.

Considero que primero deben escucharse las reformas que nosotros vamos a proponer. Recién entonces surgirá si las que ha receptado la comisión coinciden con las que proponen los señores diputados.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Salomón sobre el procedimiento propuesto para la votación del proyecto venido en revisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — En consideración en particular el artículo 19 del dictamen.

Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Señor presidente: la Comisión de Legislación del Trabajo propone las siguientes reformas a artículos del régimen de contrato de trabajo.

Agregar al artículo 22, después de la palabra «trabajador», lo siguiente: «o sus derechohabientes». Y en el penúltimo apartado, cuando dice «ni sus otros bienes», se substituye «sus otros bienes» por «su vivienda». Vale decir que el apartado quedaría redactado en la siguiente forma: «Ni sus ingresos por salarios, en la cuota prevista de embargabilidad, ni su vivienda podrán ser afectados al pago de costas, salvo el caso demostrado de mejoramiento de fortuna.» Aceptamos así una sugerencia del señor diputado Humberto Suárez.

En el artículo 32 del despacho de la comisión, que figura en el impreso que obra sobre las bancas de los señores diputados, se hace un agregado al final. Donde dice: «... y de la representación sindical», se agrega: «de la actividad respectiva». Se trata nada más que de una aclaración.

En el artículo 120 del despacho de comisión, donde dice: «En el caso de los artículos 117, 118 y 119 de esta ley se garantizará al trabajador o a quien lo represente el libre acceso a los libros y demás documentación a fin de efectuar las comprobaciones y ejercer los controles pertinentes de las ventas y de las utilidades que resulten», se agrega: «pudiendo designar éstos un representante de control por intermedio de sus organizaciones sindicales». Luego continúa el resto del artículo. Vale decir que se vuelve

(1) Véase el texto de las inserciones en la página 2476 del Diario de Sesiones.

prácticamente al texto original de la sanción del Honorable Senado, pero haciendo facultativo este control.

En el artículo 168 del despacho de comisión se substituye «noventa días (90)» por «sesenta días (60)». Es decir que el apartado quedaría redactado de la siguiente forma: «La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación no menor de sesenta (60) días, a la autoridad de aplicación...», y luego sigue el resto del artículo.

En el artículo 179 se agrega «notoriamente» a continuación de la palabra «afecte». Vale decir que el artículo quedaría: «Cuando un matrimonio se desempeñe a las órdenes del mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y simultánea, siempre que no afecte notoriamente el normal desenvolvimiento del establecimiento».

En el artículo 266 del despacho de la comisión, después de «decretos leyes» se agrega «sus montos», y luego continúa «se incrementarán en un cincuenta por ciento».

Sr. Suárez (H. F.). — Si me permite una interrupción...

Yo había propuesto una modificación...

Sr. Salomón. — Estoy proponiendo las reformas al despacho de la comisión; luego vendrán las otras reformas que la comisión ha aceptado.

Voy a formular una rectificación en relación al artículo 266.

El artículo quedaría redactado así: «En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, hubiese o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicio».

En esta parte se introduce la modificación: en vez de decir «el promedio de remuneración», se toma «la mejor remuneración mensual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicio». El resto de las modificaciones son de forma: en vez de «dicho promedio» se dice «dicha base». El artículo entonces continúa: «Dicha base no podrá exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario mínimo vital, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos meses de sueldo calculados en base al sistema del párrafo anterior. En el caso de sistemas indemnizatorios establecidos en razón de la antigüedad en regímenes particulares y estatutos profesionales aprobados por leyes o decretos leyes, sus montos se incrementarán en un 50 por ciento».

Vale decir que se modifica la forma de establecer la indemnización, la que, en vez de ser de acuerdo con el promedio de remuneraciones, es

sobre la base al mejor sueldo mensual con el tope del equivalente a tres veces el importe mensual del salario mínimo vital.

También se modifica el artículo 258 del despacho de la comisión. Al final del artículo, se agrega: «El trabajador podrá igualmente optar por acumular las horas de licencia en una o más jornadas íntegras». De modo que se da al trabajador la posibilidad de que, en vez de usar dos horas diarias, pueda acumular cuatro de esos parciales y tomarse un día entero, y así hasta completar las que correspondan.

El artículo 272 se substituye por la siguiente redacción: «Si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables al mismo, ni inherentes al riesgo propio de la empresa, la indemnización correspondiente al trabajador será la prevista en el artículo 268. En cualquier otro supuesto, dicha indemnización se calculará conforme a lo previsto en el artículo 266. La determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo será efectuada por el juez con competencia en lo laboral».

Con el texto propuesto se persigue no condicionar el pago de la indemnización normal a la calificación de la conducta en el fallo en sede judicial comercial. Se siguen los lineamientos de la doctrina que consagra el fallo 184 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, y se adopta una solución concordante con lo que consagra el artículo 268.

Con respecto al artículo 217, se hace un agregado. Después del tercer apartado, donde dice: «estatutos especiales y/o convenciones colectivas», se agrega: «tal jornada limitada en ningún caso importará rebaja alguna o disminución en las retribuciones». Se trata en esta oportunidad de las tareas declaradas insalubres, penosas, mortificantes o riesgosas que tienen una jornada menor y se aclara que en ningún caso ello implicará disminuir la retribución.

Sr. Lumello. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Salomón. — Sí, señor diputado.

Sr. Lumello. — He pedido la palabra para preguntarle al señor miembro informante si la comisión acepta el agregado propuesto, que dice: «En lo que atañe a los servicios prestados en tareas penosas, mortificantes, riesgosas, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, el Poder Ejecutivo determinará directamente, o a solicitud de parte interesada, los casos en que debe regir esta jornada limitada, sin perjuicio de los mayores beneficios acordados a los trabajadores por leyes, estatutos especiales y/o convenciones colectivas».

Sr. Salomón. — Sí, señor diputado; pero para evitar equívocos voy a dar lectura al artículo 217: «La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas, entendiéndose por tal la que se cumpla entre las veintiuna y las seis horas del día siguiente».

«La jornada de trabajo en tareas declaradas insalubres no podrá exceder de las seis horas diarias o treinta y seis semanales.

«En lo que atañe a los servicios prestados en tareas penosas, mortificantes, riesgosas, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, el Poder Ejecutivo determinará directamente o a solicitud de parte interesada los casos en que debe regir esta jornada limitada, sin perjuicio de los mayores beneficios acordados a los trabajadores por leyes, estatutos especiales y/o convenciones colectivas.

«Tal jornada limitada, en ningún caso, importará rebaja alguna o disminución a las retribuciones.

«Por la ley, su reglamentación, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo, se contemplará lo pertinente cuando el trabajo se preste por equipos o no admita interrupciones, a condición de que el término medio de duración sobre un determinado período no exceda de ocho horas por día o de cuarenta y ocho semanales, y se haya previsto su limitación diaria, siguiendo el criterio fijado por el artículo 214, segundo párrafo, última parte, de esta ley.»

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Arraya.

Sr. Arraya. — Es para solicitarle al señor diputado Salomón me aclare si dentro de las tareas penosas o peligrosas se incluyen las de tipo tóxico.

Sr. Salomón. — Están dentro de las tareas insalubres o riesgosas.

Sr. Arraya. — Muchas gracias por la aclaración, señor diputado; me interesaba que quedara asentada la interpretación de que las tareas tóxicas también están incluidas.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Señor presidente: con respecto al artículo 200, deseo que se tenga como interpretación auténtica que los sesenta días, a que en él se hace mención, son corridos.

También debe quedar como interpretación auténtica en el artículo 195 que los dos descansos a que se hace referencia en su primer apartado son de media hora cada uno.

En el artículo 225, último apartado, donde dice: «La suspensión por causas económicas», debe agregarse a continuación «o disciplinarias».

En el segundo apartado del artículo 263 se substituye «calificación» por «valoración», que es lo que corresponde.

Atendiendo a una sugerencia del señor diputado Humberto F. Suárez, quien ha propuesto una reforma al artículo 249, que obra en Secretaría, el citado artículo quedará redactado así: «El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de los obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél. Esta so-

lidad operará ya sea que la transmisión se haya efectuado para surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria. A los efectos previstos en esta norma, se considerará adquirente a todo aquel que pasare a ser titular del establecimiento, aun cuando lo fuese como arrendatario, o como usufructuario, o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo. La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes al tiempo de la restitución del establecimiento, cuando la transmisión no estuviere destinada a surtir efectos permanentes y fuese de aplicación lo dispuesto en la última parte del artículo 248. La responsabilidad solidaria consagrada por este artículo será también de aplicación cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato de locación de obra, de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los mismos».

La finalidad perseguida con esta redacción es que quienes transfieran un establecimiento no queden indefinidamente responsables en forma solidaria, sino sólo a las resultas de las obligaciones emergentes del contrato, existentes a la época de la transmisión. Porque la otra redacción podría dar lugar a equívocos.

Se modifica el artículo 197 en cuanto al plazo dentro del cual se considerará que, si se produce el despido, lo será por causa de matrimonio. El artículo dice que se considerará despido por tal causa cuando «...el despido se produzca dentro del plazo de 6 meses antes o después de celebrado el matrimonio». Se le hace el siguiente agregado: después de la expresión «...antes o...», intercalar la expresión «...12 meses...». Vale decir que quedaría redactado de la siguiente manera: «...y el despido se produzca dentro del plazo de 6 meses antes o 12 meses después de celebrado el matrimonio».

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Sarli.

Sr. Sarli. — Para volver al texto de la ley 12.383, que establece también el término de doce meses posteriores al matrimonio, hemos propuesto ese plazo en vez de los seis meses que propone el proyecto; y a esa modificación —por la experiencia profesional acumulada al respecto— la completamos con la siguiente expresión, que debe agregarse al final después de una coma: «y sin perjuicio del mayor lapso que surgiere de la prueba aportada».

Con esto queremos darle una mayor flexibilidad al juzgador para los casos que tenga que solucionar. Porque puede darse el caso, suponemos, de que el empleador despidiera a un obrero por motivo de su casamiento y lo haga a un año y pocos días después de la fecha de su casamiento. En ese caso, si el obrero aporta pruebas fehacientes en el sentido de que ha sido despedido por causa de matrimonio también le correspondería la indemnización.

Es decir que tendríamos dos situaciones: por un lado, la presunción *juris tantum* que tan sabiamente restablece este artículo, al presumir despedido por causa de matrimonio a todo obrero o empleado cuya relación laboral se extinga por decisión del empleador en el plazo que la norma del artículo 197 prevé, y a su vez atenemos a la posibilidad de que el trabajador pueda aportar pruebas que demuestren que se dejó vencer el lapso previsto por la ley para luego despedirlo, o que el despido se produjo antes de los seis meses previos a su matrimonio, y que sin embargo la efectiva causal del despido es su matrimonio.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Ponce.

Sr. Ponce. — La comisión está enunciando en la Honorable Cámara las modificaciones que considera prudente incorporar a esta ley de regulación del contrato de trabajo. Por lo tanto, vamos a remitirnos a la indicación que para cada caso está señalando el señor diputado Salomón. Ese fue el procedimiento aceptado para poner a consideración de la Honorable Cámara cada una de las modificaciones que la Comisión de Legislación del Trabajo considera aconsejable introducir.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Eso significa que la comisión no acepta la interpretación que el señor diputado Sarli da a este artículo?

Sr. Ponce. — No señor presidente, no la desechamos; simplemente manifestamos que la comisión pone a consideración de la Honorable Cámara la reforma a los diferentes artículos que está mencionando el señor miembro informante que en este caso es el señor diputado Salomón.

Sr. Presidente (Busacca). — Tal cual se expresan textualmente.

Sr. Salomón. — Nosotros de ninguna manera nos oponemos a la interpretación que hace el señor diputado Sarli, por cuanto si se llegase a probar que el despido se ha realizado por causa de matrimonio, ello estaría dentro de la finalidad de protección que tiene la ley; pero será a criterio del juez analizarlo y así determinarlo, ya que nosotros no podemos apartarnos de la letra de la ley, que establece términos.

Las modificaciones que he dejado indicadas son las que la comisión propone introducir al articulado de este proyecto.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Guerrero.

Sr. Guerrero. — Deseo que el señor miembro informante nos aclare, a los efectos de una correcta aplicación legal, si en el artículo 2º del régimen de contratos de trabajo se incluye a los trabajadores y empleados en relación de dependencia de ingenios azucareros, colonos y cañeros independientes, comprendidos en los convenios celebrados hasta el presente en la industria azucarera y homologados por el Ministerio de Trabajo.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Ponce.

Sr. Ponce. — En contestación a la pregunta que hace el señor diputado compañero Guerrero, deseo manifestarle que en el último párrafo del artículo 2º se establecen los sectores a los que no son aplicables las disposiciones de esta ley. Esto significa, por consiguiente, que todos aquellos sectores que no se mencionan expresamente como excluidos, entran en el ámbito de la ley. Conforme con la mencionada cláusula, no será aplicable a los empleados de la administración pública ni a los trabajadores del servicio doméstico, tal como lo prevén los incisos a) y b), excepto que se los incluya en esta ley o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Con esto queda sobreentendido que todos los demás sectores están comprendidos en esta ley.

Sr. Presidente (Busacca). — ¿Queda satisfecha la inquietud del señor diputado Guerrero?

Sr. Guerrero. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Blanco.

Sr. Blanco. — En relación con el mismo artículo a que ha hecho mención el señor diputado Guerrero, quisiera que la comisión me aclarase los alcances de la primera parte de dicha norma. En ella se habla de «los casos de actividades regladas por estatutos o regímenes particulares...», lo que parece aludir a una situación pasada y no futura. Por eso pido que la comisión aclare si esto implica que en el futuro no podrán establecerse nuevos estatutos de acuerdo con las características y las actividades de cada sector profesional.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Aquí no se establece ninguna restricción. Debe interpretarse así.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Rizo.

Sr. Rizo. — Es para pedir una aclaración a la comisión con respecto al artículo 266, cuando dice que la indemnización será determinada tomándose como base la mejor remuneración mensual. El proyecto que estamos tratando establece distintas formas de pago: hay pago mensual, por día, por hora y por comisión. Pido la aclaración para saber, cuando la remuneración no es mensual, cuál sería la base a tomar.

Sr. Ponce. — Se sobreentiende que se considerará la remuneración percibida durante el año por el jornalero —ya se trate de haberes percibidos por día, por quincena o por mes—, y se tomará siempre como base el mejor promedio mensual, en la forma que dicte la reglamentación.

Sr. Rizo. — Que quede eso perfectamente aclarado a los efectos de que sirva de interpretación para las liquidaciones pertinentes.

Y en el mismo artículo, señor presidente...

Sr. Ponce. — Creo que nos estamos apartando de lo que habíamos decidido, porque la comisión manifestó que iba a propiciar ante esta Cámara las modificaciones a su primitivo despacho. Estamos haciendo consideraciones ya en particular, sin que se hayan puesto a votación las propuestas de la Comisión de Legislación del Trabajo referentes al régimen de contrato de trabajo.

No sé si estoy equivocado, pero creo que corresponde terminar de considerar las proposiciones que está haciendo el señor miembro informante.

Sr. Presidente (Busacca). — No habiendo ninguna moción de orden de cerrar el debate, los diputados conservan la posibilidad de pedir aclaraciones.

Sr. Ponce. — No era mi deseo coartar el uso de la palabra al señor diputado.

Sr. Presidente (Busacca). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Rizo.

Sr. Rizo. — La base para determinar la mejor remuneración mensual, ¿es lo percibido durante el último año o durante el plazo de prestación de servicios? Da la impresión de que hay una contradicción, y lo señalo a los efectos de que quede perfectamente aclarado.

El artículo habla de las remuneraciones percibidas durante el último año y también de las percibidas durante todo el plazo de la prestación del servicio, que podría entenderse tanto para el caso de un trabajador que tenga menos de un año de servicios como para un trabajador que tenga más de un año. Se puede dar este caso: el mejor sueldo del trabajador en el último año de prestación de servicio es de cien mil pesos mensuales y puede ser que el año anterior el mejor sueldo mensual sea de doscientos mil pesos, y como el artículo habla de «todo el plazo de la prestación», se podría tomar, no el último año, sino el año anterior.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Salomón.

Sr. Salomón. — Yo creo que la disposición es clara y no da lugar a otras interpretaciones que las que surgen de su texto. Este establece que la liquidación se hará de acuerdo con la mejor remuneración mensual del último año. Si no tuviera un año de servicio será la mejor remuneración de los meses de servicios prestados; pero si tiene más de un año nunca puede tomarse la liquidación del año anterior al último. Queda así aclarado el alcance del artículo.

Sr. Presidente (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Mira.

Sr. Mira. — Voy a decir breves palabras para fijar la opinión de nuestro bloque en relación con las propuestas hechas por el señor diputado Salomón.

En cuanto al artículo 217, nosotros proponemos su supresión, pero de no aceptarse este criterio, señalamos que lo propuesto por el señor diputado Lumello mejora el artículo primitivo.

En el artículo 266 —para los artículos que no nombro prestamos nuestro tácito apoyo—, en el que se fija el promedio del mejor mes durante el último año, creemos que también favorece a los obreros temporarios y a los obreros en general.

Con respecto a los artículos 225 y 263, hago notar que nosotros nos oponemos, como he dicho en mi intervención, a las sanciones disciplinarias.

Para el artículo 272 mantenemos la propuesta que hemos hecho, y no voy a entrar a desarrollar las explicaciones que nos llevan a proponer otra redacción, porque ya han sido entregados a la mesa de la Presidencia el texto para cambiar este artículo y también los fundamentos.

En cuanto a los demás artículos, creemos que se trata de cuestiones de forma y, por lo tanto, vamos a dar nuestra aprobación.

Sr. Presidente (Busacca). — Se va a votar el artículo 1º del proyecto de ley, por el cual se aprueba el régimen del contrato de trabajo, entendiéndose que la comisión ha propuesto modificaciones, agregados y aclaraciones a los artículos 22, 32, 120, 168, 179, 195, 197, 200, 217, 225, 249, 258, 263, 266 y 272, además de las restantes modificaciones que se proponen en el dictamen en consideración.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Busacca). — La Presidencia entiende que los demás artículos no han sido objeto de modificación ni aclaración.

Sr. Salomón. — Señor presidente: interpreto que lo que se votó es el artículo 1º del proyecto de ley de contrato de trabajo, no del régimen del contrato de trabajo, y que al votarse afirmativamente el citado artículo 1º quedó aprobado el régimen del contrato de trabajo con sus trescientos dos artículos.

Sr. Presidente (Busacca). — Así lo entiende la Presidencia.

En consideración el artículo 2º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 3º a 10.

—El artículo 11 es de forma.

Sr. Presidente (Busacca). — **Queda sancionada** el proyecto de ley (1). (Aplausos.)
Se comunicará al Honorable Senado.

2

POSTERGACION

Sr. Presidente (Busacca). — Corresponde continuar la consideración del plan de labor oportunamente aprobado por la Honorable Cámara.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 2486 del Diario de Sesiones.

El artículo 272 se modifica por el siguiente:

Artículo 272. — Si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables al mismo, ni inherentes al riesgo propio de la empresa, la indemnización correspondiente al trabajador será la prevista en el artículo 268. En cualquier otro supuesto, dicha indemnización se calculará conforme a lo previsto en el artículo 266. La determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo será efectuada por el juez con competencia en lo laboral.

En el artículo 273:

A continuación de «empleador», (primer párrafo) se agrega «que pretendiese disponer el cese de la relación».

Artículo 302: queda suprimido.

Dios guarde al señor presidente.

RAÚI ALBERTO LASTIRI
Ludovico Lavía.

2

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que ha recibido con particular agrado las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en relación con la nacionalización del proceso de comercialización de hidrocarburos y expresa su total apoyo a esta etapa de reconstrucción, que afianza la liberación nacional interpretando el sentir del pueblo argentino.

3

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de quien corresponda, con carácter prioritario designe el personal de control de balanzas y laboratorios para la presente zafra azucarera.

II

INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MASOLO

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION SOCIAL Y OBRERA ANTES DE 1943 Y POSTERIOR A 1900

1905. — Ley 4.661, estableciendo el descanso dominical.

1907. — Ley creando la Dirección Nacional del Trabajo para la vigilancia de aplicación de las leyes obreras, condiciones de trabajo, etcétera.

1912. — Ley 8.999. Ley orgánica del Departamento Nacional del Trabajo.

1913. — Ley 9.104, extendiendo a los trabajadores de todos los territorios nacionales los beneficios del descanso dominical.

1913. — Ley 9.105, declarando obligatorio y con salarios pagos el descanso en días que dicha ley fija.

1913. — Ley 9.148, reglamentando el funcionamiento de los registros y agencias de colocaciones.

1914. — Ley 9.511, declarando inembargables los sueldos de obreros y empleados, salarios, jubilaciones y pensiones inferiores a 100 pesos mensuales.

1915. — Ley 9.661, sobre agencias particulares de colocaciones.

1915. — Ley 9.688, decretando la indemnización de los trabajadores por accidentes del trabajo y por enfermedades profesionales.

1915. — Ley 9.658, estableciendo penalidades a los patronos por incumplimiento de las leyes del trabajo. (Completada en 1929 por la ley 11.570.)

1918. — Ley 10.505, reglamentaria del trabajo a domicilio substituida por la 12.713, del año 1941.

1921. — Ley 11.125, de reciprocidad de indemnización por accidentes del trabajo. (Con España.)

1921. — Ley 11.126, de reciprocidad de indemnizaciones por accidente del trabajo. (Con Italia.)

1921. — Ley 11.127. Convención de Berna. (Protección a la salud de los trabajadores.)

1922. — Ley 11.289. La gran ley de jubilación, iniciativa de Hipólito Yrigoyen, de todos los trabajadores empleados y obreros, del comercio y la industria, que la resistencia patronal y, por desgracia, también obrera hizo derogar.

1924. — Ley 11.317, reglamentando el trabajo de los menores y de las mujeres, en las fábricas, talleres y establecimientos comerciales.

1924. — Ley 11.338, prohibiendo el trabajo nocturno en las panaderías.

1925. — Ley 11.278, estableciendo la forma de pago de los salarios y tomando medidas contra el trueque.

1926. — Ley 11.337, modificatoria de la ley 11.278.

1929. — Ley 11.544, estableciendo la jornada máxima de trabajo en 8 horas por día o 48 semanales.

1929. — Ley 11.570, fijando nuevas penalidades por el incumplimiento de las leyes del trabajo y de protección obrera.

1932. — Ley 11.591, sobre otorgamiento de pasajes gratuitos a obreros desocupados.

1932. — Ley 11.633 ratificando el convenio de 1926 sobre reciprocidad en el pago de indemnizaciones por accidentes del trabajo entre la Argentina y Austria.

1932. — Ley 11.639, ratificando un convenio similar celebrado en 1924 entre la Argentina y Bélgica.

1932. — Ley 11.640, creando el sábado inglés y aumentando el descanso semanal con salarios pagos para empleados y obreros.

1932. — Ley 11.660, modificando la ley 11.591.

1933. — Ley 11.722, ratificando el Tratado de Versalles en lo referente a la creación de la Oficina Internacional del Trabajo.

1933. — Ley 11.726, aprobando: a) Convenio para limitar las horas de trabajo en los establecimientos industriales a 8 horas diarias o 48 semanales; b) Convenio referente al paro forzoso; c) Convenio concerniente al empleo de las mujeres antes y después del parto; d) Convenio concerniente al trabajo nocturno de las mujeres; e) Convenio fijando la edad mínima de admisión de los niños en los trabajos industriales; f) Convenio referente al trabajo nocturno de los niños en la industria. También recibieron su aprobación las siguientes recomendaciones: a) referente al paro forzoso; b) referente a la reciprocidad en el trato de los obreros extranjeros; c) referente a la prevención del carbunclo; d) referente a la protección de las mujeres y de los niños contra el saturnismo; e) referente a la creación de un servicio público de higiene; f) referente a la aplicación del convenio internacional adoptado en Berna, en 1906, sobre la prevención del empleo de fósforo blanco (amarillo) en la industria de las cerillas. (Todos estos convenios y recomendaciones que tienen para nuestro país fuerza de ley fueron suscritos durante la primera presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Washington en noviembre de 1919.)

1933. — Ley 11.727, aprobando: a) convenio que fija la edad mínima de los niños para su admisión en el trabajo marítimo; b) convenio sobre indemnización por desocupación en caso de pérdida por naufragio; c) convenio sobre colocación de marinos. También recibieron aprobación las siguientes recomendaciones: a) para limitar las horas de trabajo en la industria del pescado; b) para limitar las horas de trabajo en la navegación interior; c) para la implantación de estatutos nacionales de marinos; d) seguro de los marinos contra la desocupación. (Todos estos convenios y recomendaciones fueron suscritos durante la primera presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, en julio de 1920.)

1934. — Ley 11.729 modificando los artículos 154 a 160 y estableciendo principios normativos sobre contratos colectivos de trabajo. Preaviso y pago de indemnización por despido.

1934. — Ley 11.837 fijando la hora de cierre de los establecimientos comerciales y evitando las largas jornadas de empleados y dependientes.

1934. — Ley 11.850 ratificando el convenio de 1929, sobre reciprocidad en el pago de indemnizaciones por accidentes del trabajo entre la Argentina e Inglaterra.

1934. — Ley 11.851 ratificando convenios similares, celebrados en 1932, con Polonia, Checoslovaquia y Lituania.

1934. — Ley 11.863. Levantamiento del Censo de Desocupados para planear la creación de trabajo obrero.

1934. — Ley 11.896 creando la Junta Nacional contra la Desocupación.

1934. — Ley 11.929 ratificando un convenio sobre indemnizaciones por accidentes a obreros, celebrado en 1927 con Dinamarca.

1934. — Ley 11.930 ratificando un convenio similar, celebrado con Suecia en 1928.

1934. — Ley 11.931 ratificando un convenio similar (reciprocidad en el pago de indemnizaciones) celebrado en 1928 con Yugoslavia.

1934. — Ley 11.932 sobre trabajo de mujeres y niños.

1934. — Ley 11.933 creando la Caja de Maternidad y el seguro obligatorio de maternidad.

1935. — Ley 12.101. Modificando la número 9.148 sobre agencias públicas y gratuitas de colocaciones.

1935. — Ley 12.111 sobre la maternidad de empleadas del Estado (licencias sueldos, inamovilidad, etcétera).

1935. — Ley 12.202 sobre agencias privadas de colocaciones (modifica la 9.661).

1935. — Ley 12.205 Ley de la silla.

1935. — Ley 12.232, aprobando: a) convenio concerniente a la edad de admisión de los niños en los trabajos de la agricultura; b) convenio concerniente a los derechos de asociación y colocación de los obreros agrícolas; c) convenio concerniente a la indemnización por accidentes del trabajo en la agricultura; d) convenio sobre empleo de la cerusa en la pintura; e) convenio sobre descanso semanal en los establecimientos industriales; f) convenio fijando la edad mínima de los jóvenes en el trabajo de pañoleros o fogoneros; g) convenio estableciendo el examen médico obligatorio de los niños y jóvenes empleados a bordo de los buques. Recibieron así mismo aprobación las siguientes recomendaciones: a) sobre medios para la previsión del paro en la agricultura; b) sobre protección, antes y después del parto de las mujeres empleadas en la agricultura; c) sobre trabajo nocturno de mujeres en la agricultura; d) sobre trabajo nocturno de niños y jóvenes en la agricultura; e) sobre desarrollo de la enseñanza técnica agrícola; f) sobre alojamiento de obreros agrícolas; g) sobre seguros sociales en la agricultura; h) sobre descanso semanal en los establecimientos comerciales. (Todos estos convenios y recomendaciones, que tienen fuerza de ley para nuestro país, fueron suscritos durante la primera presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, en noviembre de 1921.)

1935. — Ley 12.265 sobre servicio doméstico y aplicación de descanso semanal a los choferes particulares.

1935. — Ley 12.339 sobre trabajo de la mujer obrera antes y después del parto (vacación, asistencia médica y subsidio).

1935. — Ley 12.383 prohibiendo el despido de las empleadas y obreras por causa de matrimonio.

1938. — Ley 12.568 sobre maternidad de empleadas del Estado.

1940. — Ley 12.631 extendiendo los beneficios de indemnización por accidentes del trabajo a las explotaciones agrícolas ganaderas forestales y pesqueras.

1940. — Ley 12.637 sobre estatuto del personal de bancos particulares.

1940. — Ley 12.647 sobre trabajo y enfermedades profesionales.

1940. — Ley 12.651 definición del viajante de comercio, su remuneración, derechos, responsabilidades, etcétera.

1941. — Ley 12.713 sobre trabajo a domicilio, en todo el país, condiciones del trabajo, remuneración, etcétera.

1942. — Ley 12.789 organizando la contratación, (traslado, trabajo, salarios, etcétera) de obreros para las labores agrícola, ganadera, minera y forestal.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SALOMON

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO ARRAYA

Artículo 4º — El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio.

Artículo 5º — La empresa es una comunidad humana organizada de trabajo que, con fines económicos, produce bienes y servicios para satisfacer exigencias sociales.

Artículo 5º — El empresario es la persona que organiza y coordina las aportaciones que integran la comunidad de trabajo, para que ésta cumpla su finalidad.

Artículo 24. — Existirá relación de trabajo cuando, con prescindencia del contrato, se preste una actividad laboral, de conformidad a las condiciones enunciadas en esta ley.

Artículo nuevo. — La jornada horaria de trabajo, en todo el país, será de ocho horas diarias o cuarenta y cuatro semanales. Las horas efectivamente trabajadas serán bonificadas con el 9,1 %, en compensación de las horas no trabajadas en día sábado (jornada de la tarde).

Artículo 164 (agregar al final del artículo sobre vacaciones anuales). — Cuando las tareas fueran calificadas como penosas, tóxicas o peligrosas, la escala de días de vacaciones será considerada en días hábiles.

Artículo 164. — El descanso por vacación anual podrá fraccionarse cuando el mismo se interrumpiera por una enfermedad o accidente inculpaible o por un accidente de trabajo.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO CARLOS A. BRAVO

Artículo 2º — Deja abierta la puerta para la no aplicación de la ley (caso de los trabajadores de la construcción, que tienen un estatuto especial —ley de Coria—, estibadores, chagarines) Suprimir el segundo párrafo para evitar interpretaciones confusas.

Artículo 22. — Hasta ahora los únicos telegramas gratis son los de renuncia, por eso proponemos un agregado como tercer párrafo:

Por aplicación de este principio serán siempre gratuitos los despachos telegráficos que debiere emitir el trabajador al empleador con motivo o por ocasión del trabajo. (Hay que conectarlo con el artículo 261 para fundamentar este agregado.)

Artículo 22 (última parte). — Se sanciona la «pluspetición». Para ello se utiliza un criterio netamente empresarial, ya que no se sanciona la «infrapetición», que perjudica más al trabajador.

Artículo 28. — Proponer: «Se considera empleador a la persona física o jurídica o conjunto de ellas... Invertir el orden de las palabras en consonancia con lo establecido por los artículos 31, 32 y 33.

Artículo 56. — *Libros obligatorios*: agregar: número de hijos, edad y escolaridad de los mismos. Para asegurar la protección a la efectivización de las asignaciones por tales conceptos

Artículo 61. — Intimación no contestada en 48 horas crea la presunción de veracidad. Esto es

un arma de doble filo, ya que generalmente es el trabajador quien desconoce la ley y son múltiples los casos en que llegan a consultar una vez pasadas las 48 horas de recibido un telegrama.

Artículo 62. — Consideramos que no está claro. Proponemos poner una puntuación luego de... en el artículo 61 de la ley.

Artículo 76. — *Controles personales*: proponemos suprimirlo. Recomendamos volver al sistema de los artículos 77 y 78 del Proyecto de la C.G.T. con la inclusión del artículo 80 del Proyecto C.G.T. (equipos de medición del trabajo).

Artículo 79. — Recomendamos suprimirlo por inútil

Artículos 91/2. — *Invecciones*: proponemos agregar el artículo 93 del Proyecto de la C.G.T.

Artículo 110. — *Salario según contribución al resultado* (equipo): Se introduce una forma de destajo. Se recomienda suprimir.

Artículo 113. — *Remuneración*: igual criterio. Se recomienda suprimir: «...o por rendimiento del trabajo y, en este último caso, por unidad de obra».

Artículo 121. — *Destajo*: se recomienda suprimirlo. Obsérvese que al salario lo fija el ritmo de producción. El criterio utilizado en el proyecto es netamente empresarial y económico, ya que nada se dice al respecto de las condiciones de salubridad. No parece importar que el ritmo afecte la salud del trabajador.

Artículo 126. — *Salario mínimo y vital*. (Derecho de toda persona mayor de 18 años. ¿Por qué?) Ver que el artículo 207 autoriza a menores de 16/18 años a trabajar 8 horas diarias

Artículo 135. — Institucionaliza el pago del aguinaldo en dos cuotas. ¿Están de acuerdo los trabajadores con esto?

Artículo 146. — *Retenciones o descuentos sobre salarios*.

g) Reintegro del precio de compra de acciones de capital o de goce. Mediante esta vía se establece una nueva forma de cobro del precio de las acciones. No existe ningún motivo para que así sea. Si en todo caso el empresario vende acciones al trabajador, que se las cobre mediante los medios que le da la ley y no mediante un descuento directo sobre su salario. Además se introduce indirectamente una vía para realizar simulaciones por parte de los empresarios.

Artículo 164. — *Plazos de licencia*. — Agregar: «Los plazos establecidos se extenderán en un 30 % cuando el trabajador se haya desempeñado en tareas declaradas insalubres, penosas o peligrosas.

Artículo 169, inciso c) — *Salario de destajo*: eliminar en todo el cuerpo legal.

Artículo 180. — *Días feriados y no laborables*: nos inclinamos por el sistema del proyecto de la C.G.T. En todo caso proponemos agregar: «Quedan equiparados a los feriados nacionales los declarados días del trabajador en los distintos gremios, instituidos por convenciones colectivas de trabajo. (Corresponde al artículo 190 del proyecto de la C.G.T.).

Artículo 184. — (Forma de determinar el salario de vacaciones): personal a destajo: se recomienda eliminar. — Suprimir del artículo: desde «Si se tratare de personal a destajo... hasta: «número de días trabajados».

Artículo 186. — Artículo inútil si se excluye a los trabajadores a domicilio por el artículo segundo.

Artículo 195. — *Descanso diario por lactancia*: con media hora no alcanza, debe dársele una hora dos veces por día a la trabajadora que amamanta a su hijo.

En segundo lugar, este artículo debe establecer el número mínimo de mujeres requeridas para que el empresario deba obligatoriamente poner una guardería, ya que si la reglamentación no se dicta, el artículo es inaplicable.

En tercer lugar, el artículo deberá establecer que en aquellos lugares donde el número de mujeres empleadas sea inferior al determinado por la ley, se deberán establecer guarderías zonales para atención de los hijos de las trabajadoras que trabajan en las fábricas de la zona al estilo de lo establecido en la ley de higiene y seguridad.

Artículo 197. — *Presunción de despido por causa de matrimonio*: agregarle: «Dentro del plazo de un mes antes o seis meses después, ya que por lo general el matrimonio se avisa, al patrón antes de celebrarse.

Artículo 198. — Agregarle a continuación el artículo 299 (disposiciones complementarias) sacándole la palabra «excepcionalmente».

Artículo 199. — *Estado de excedencia*: nos inclinamos por el proyecto de la C.G.T., con el agregado del artículo 199, última parte del proyecto del Poder Ejecutivo, eliminándole la expresión «a su cargo».

Artículo 200. —

- a) Eliminar la facultad de reincorporar en un cargo inferior (para evitar presiones);
- b) Eliminar la facultad del empleador de no reincorporar.

Artículo 201. — *Requisito de antigüedad*: acortar el plazo a seis meses.

Artículo 209. — Agregar el caso de emancipación.

Artículo 210. — *Depósito de ahorro*: proponer que deposite 5 % el menor y 5 % el patrón va que éste se ahorra el aporte jubilatorio.

Artículo 213. — *Jornada de trabajo*: duración. Establecerla expresamente.

Artículo 216. — Excepciones al límite máximo de duración de la jornada de trabajo. Eliminar el artículo íntegramente.

Artículo 220. — *Obligación de hacer horas extras*. Se propone suprimir: «o por exigencias excepcionales de la empresa».

Artículo 226. — *Accidentes y enfermedades inculpables*. Aviso al empleador. Eliminar: «Será considerado como acto de indisciplina».

Artículo 227. — *Reconocimiento médico*. Facultad de elegir el médico. Es un antecedente interesante —a partir de la aplicación de un criterio liberal— para extender esta facultad a la elección del médico de fábrica por los trabajadores.

Artículo 252. — *Preaviso*: hacer el agregado del artículo 256 del proyecto de la C.G.T. relativo a la estabilidad absoluta.

Artículo 261. — *Renuncia. Formas*: despacho telegráfico. Suprimir el 2º párrafo en función del agregado del artículo 17.

Artículo 264. — *Forma de comunicar el despido*: reemplazar «por escrito» por «por telegrama colacionado».

Artículo 265. — *Comisión de delitos*: según está redactado el artículo, un trabajador que mata con el coche a un transeúnte y se lo condena a dos años de prisión en suspenso (cito un hecho común) puede ser despedido con causa.

Proponer modificar la redacción en el sentido que los delitos invocados por el empresario sean aquellos que impidan la normal continuación de la relación laboral, o sea, delitos relacionados con el trabajo.

Artículo 266. — *Indemnización por antigüedad*: incluir el párrafo del artículo 270 del proyecto de la C.G.T. en lo relativo a la estabilidad absoluta.

Artículo 276. — *Extinción del contrato de trabajo* motivada por una crisis. Proponemos suprimirlo.

Agregar el título XIII, *Estabilidad absoluta*. Proponer su inclusión de acuerdo con el proyecto de la C.G.T. (Artículos 282 y siguientes.)

Artículo 278. — *Plazo de la prescripción*: se propone modificar «plazo especial» por «plazo mayor», así no dejamos abierta la puerta para que se establezcan plazos menores bajo la excusa de especialidad.

Artículo 280. — *Prescripción de acciones derivadas del accidente y enfermedad profesional*. No se justifica que si no regula el accidente y la enfermedad profesional en sí reglamente la prescripción en forma especial y menos que se la rebaje a dos años. Proponer que se la aumente por lo menos a cuatro años.

Artículo 290. — Agregar los artículos de estabilidad absoluta (artículo 306 del proyecto de la Confederación General del Trabajo).

Artículo 292. — *Privilegios*: incluir indemnización por enfermedad profesional.

Artículo 297. — Agregar enfermedad profesional.

Artículo 299. — Va acoplado al artículo 198 sacándole «excepcionalmente».

Agregar como artículo N° 301 que las disposiciones de esta ley son de orden público y que sus prescripciones entran en vigor por lo menos con una retroactividad de sesenta días.

Proponer la inclusión de un capítulo especial relativo a las condiciones de trabajo.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO LUCENA

Artículo 1º — Suprimir «y se observarán como» y «de la Nación». Redactar al final «incorporadas a la presente ley».

Artículo 2º — a) Substituir «promulgación» por el término «sanción»; b) suprimir la palabra «aun» antes del término.

Artículo 5º — Substituir «vigencia» por «sanción».

Artículo 6º — Reducir 90 días a 30 días.

Artículo 17. — Suprimir el término «no» en el segundo párrafo.

Artículo 31. — Si bien es cierto que este artículo limita en gran medida la capacidad de maniobra de las agencias de colocaciones al establecer la relación de dependencia directa con la empresa a la cual no presta el trabajo, y la solidaridad entre

ésta y la intermediaria, sería preferible terminar definitivamente con estas formas parasitarias de mediación. Han producido grandes abusos; en sí mismas son una expresión típica de la explotación del trabajo ajeno en sus formas más humildes, como la de dactilógrafo, oficinista, cadete, etcétera. Lucran más que con las necesidades de las empresas, con las necesidades de los trabajadores desocupados. La función que puedan cumplir debe ser substituida de inmediato por un organismo de tipo social; por ejemplo: agencias organizadas, sostenidas y administradas por la CGT y CGE conjuntamente, y agencias paritarias por rama de profesión (obrera-patronal).

En el orden internacional la protesta contra estas agencias se agudizó después de la guerra del 14-18; y por el convenio internacional número 96 (1949), artículo 3º tales agencias debían suprimirse en los países miembros de la OIT dentro de un plazo limitado a fijarse por la autoridad local competente. Afirma Krotoschin que actualmente se han suprimido casi totalmente las oficinas de colocación de tipo comercial y sólo existen las de carácter gratuito, y agrega: «Nadie como las Asociaciones Profesionales conoce el "mercado" de trabajo en una profesión o industria respectiva y puede con más éxito distribuir el personal excedente o dirigir adecuadamente la formación profesional de sus afiliados».

Artículo 86. — Agregar. «El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva, poniendo a su disposición los materiales, herramientas, etcétera, que necesita para trabajar».

Artículo 87. — Substituir en el último párrafo «y, además, por .os., pues como está redactado se acumulan dos requisitos, cuando deben ser alternativos».

Artículo 91. — Debería instrumentarse una forma de participación del trabajador en la propiedad de «las invenciones o descubrimientos que se deriven de procedimientos industriales, métodos o instalaciones de establecimientos o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador». En el proyecto son propiedad exclusiva del empleador.

Artículo 102: se establece que el contrato a plazo fijo no puede celebrarse por más de cinco años. Entendemos que se incurre en una omisión, al no establecer las consecuencias que traerá aparejada la celebración de un contrato a plazo fijo por un tiempo mayor de cinco años. ¿Será nulo?, ¿se lo interpretará por el término fijado como máximo legal (5 años)?, o ¿se lo considerará por tiempo indeterminado?

Creemos conveniente que se establezca en forma expresa y como agregado a dicho artículo que en caso del contrato a plazo fijo sea por un período mayor de cinco años, se lo considerara como de plazo indeterminado.

Texto que se propone:

Artículo 102. — El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de cinco (5) años; en caso que se lo celebre por más tiempo se lo considerará como de plazo indeterminado.

Artículo 125: si bien entendemos que las pautas a los efectos de definir el salario mínimo vital son meramente enunciativas, se omite una fundamental, y que por otra parte, ya se encontraba consagrada por

la legislación anterior (artículo 2º, ley 16.459) cual es la «educación del trabajador», creyendo conveniente su inclusión.

Texto que se propone:

Art. 125. — Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión.

Artículo 129: A los fines del reajuste periódico conforme a las variaciones del costo de la vida que establece este artículo, creemos conveniente que se fije fecha fija y obligatoria en la que debe realizarse dicho ajuste, pudiendo ser dos veces al año (30 de junio y 31 de diciembre) ya que de lo contrario la enunciación del artículo será de carácter meramente formal, sin crear ningún tipo de obligación.

Texto que se propone:

Artículo 129. — El salario mínimo vital será reajustado el treinta (30) de junio y treinta y uno (31) de diciembre de cada año, conforme a las variaciones del costo de la vida, y no será objeto de quitas zonales.

Artículo 155 (última parte). — Las deudas del empleador provenientes de la falta de pago, en los términos, modos y plazos fijados en esta ley de las remuneraciones del trabajador, indemnización por despido o falta de preaviso, originadas en una conciliación extrajudicial o judicial, o en el caso de sentencia judicial, deberán depositar su importe y los intereses que se hubieren devengado a nombre del dependiente o de sus derechohabientes, en el tribunal laboral de turno competente, en los dos primeros supuestos, y en el que se tramita la causa en el restante.

La autoridad judicial competente efectuará el pago directamente, mediante cheque judicial, a nombre de quien correspondiere, según los supuestos previstos en el párrafo anterior.

Todos los pagos que los empleadores hicieren directamente al dependiente o a sus derechohabientes, en los casos previstos en este párrafo, no los liberará de sus obligaciones, siendo nulo y carente de eficacia como medio extintivo de las mismas.

Artículo 161. — Debe establecer expresamente el porcentaje mínimo inembargable.

Artículo 163. — Establecer la inembargabilidad total de las indemnizaciones debidas al trabajador o sus derechohabientes con motivo del contrato de trabajo o de su extinción, ya que éstas cumplen con el objetivo de cubrir un estado de necesidad del trabajador surgido de un evento desgraciado o anormal en la prestación o relación de trabajo.

Se propone el siguiente texto:

Las indemnizaciones debidas al trabajador o sus derechohabientes con motivo del contrato de trabajo o de su extinción son inembargables en su totalidad, salvo lo previsto en el artículo 161 y para deudas alimentarias.

Artículo 172, inciso c). — Aumentar el máximo de licencia para rendir examen a catorce (14) días por año calendario, en razón de que un estudiante rinde generalmente más de 5 exámenes

finales por año. (Por ejemplo: 7 exámenes a dos días por cada uno, son 14 días.)

Artículo 182. — Los trabajadores que presten servicio en días no laborales percibirán el salario simple aumentado en un 50 %.

Artículo 189. — Agregar como excepción a la prohibición del trabajo nocturno: «salvo que ocupen puestos directivos o de carácter técnico que entrañen responsabilidad. (Convención Internacional 89 - 1948.)

Artículo 192. — Se introduce como novedad en nuestra legislación el concepto de «trabajo penoso», sin definir de qué se trata.

Creemos conveniente que la ley fije las pautas, que se tendrán que tomar como base para calificar un trabajo como «trabajo penoso».

Artículo 192 bis. — Agregar un artículo que establezca el llamado «día de los quehaceres domésticos», en que toda mujer esté exenta de la obligación de prestar servicios, conservando el derecho a la remuneración, aplicándosele las reglas de las vacaciones pagadas. Toda mujer tiene generalmente la responsabilidad de atender el hogar, hacer trámites administrativos, hacer las compras de mercaderías para el mes, para lo que tienen dificultades si cumplen horario de comercio. Esta institución es original del derecho alemán que establece un día a la semana para los «quehaceres domésticos», o sea, cuatro días al mes.

Artículo 195. — Segundo párrafo: establecer expresamente en 40 el número mínimo de trabajadoras para que el empleador esté obligado a habilitar salas maternales y guarderías para niños, hasta la edad de 5 años. Estarán atendidas y dirigidas por personal especializado y en las condiciones que la reglamentación establezca.

Artículo 196. — En dicho artículo se establece que serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes, o las reglamentaciones internas que se dicten, que establezcan para su personal de mujeres el despido por causa de matrimonio. Entendemos que la prohibición debe extenderse a los «convenios colectivos de trabajo», ya que de lo contrario este medio se convertiría en camino para eludir la finalidad de la ley.

Texto que se propone:

Artículo 196. — Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes, o por convenciones colectivas de trabajo, o las reglamentaciones internas que se dicten, que establezcan para su personal de mujeres el despido por causa de matrimonio.

Artículo 206. — Existe una contradicción entre este artículo, que prohíbe el trabajo de menores de 14 años, y el artículo 34, que establece que se presumen suficientemente autorizados por sus padres o representantes legales para ejercer ... los menores de 14 años.

Artículo 218 bis: se omite totalmente en este capítulo el límite máximo de horas extras que el trabajador podrá realizar, mensual y anualmente, conforme lo disponía el decreto reglamentario de la ley 11.544 (artículo 13, decreto 16.115/33).

Creemos conveniente su inclusión en forma expresa en el propio texto legal, fijando un límite máximo de horas suplementarias o extras mensuales o anuales; o de lo contrario consignar, también en forma expresa,

que el límite máximo de horas suplementarias mensuales y anuales quedará sujeto a lo que fije la reglamentación.

Texto que se propone:

Artículo 218 bis. — En ningún caso el número de horas suplementarias podrá ser superior a treinta (30) en un mes y doscientas (200) al año por cada una de las personas ocupadas en la industria o comercio.

O también:

Artículo 218 bis. — En ningún caso el número de horas suplementarias podrá ser superior al límite máximo que se establecerá por vía de reglamentación, por cada una de las personas ocupadas en la industria o comercio.

Artículo 220: consideramos inconveniente la inclusión en la ley en cuanto establece la obligación de realizar horas extras ... por exigencias excepcionales de la empresa ... ya que con esa fórmula se le da una facultad muy amplia al empleador, para obligar a su empleado a cumplir horas extras, que en principio deben ser voluntarias.

Texto que se propone:

Artículo 220. — El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, juzgado su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines de la misma.

Artículo 221: aumentar el mínimo de vacaciones del menor a 21 días corridos. Según el proyecto el período mínimo es de 15 días, pero también es el máximo, pues como la antigüedad del menor no podrá ser nunca mayor de cuatro años, quedarán comprendidos en el inciso e) del artículo 164. El desarrollo físico y psíquico del menor exige un período de vacaciones más prolongado.

Artículo 224: atento a que la finalidad de la ley debe ser que el trabajador goce de un período semanal estimamos conveniente establecer un mayor recargo que el fijado en el artículo, porque de lo contrario a la patronal le convendría abonar un sueldo doble, y no poner un reemplazante.

Texto que se propone:

Artículo 224. — Cuando el trabajador prestase servicios en los días y horas mencionados en el artículo 221, medie o no autorización, sea por disposición del empleador o por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 220, o por estar comprendido en las excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, y no gozare del descanso compensatorio, tendrá derecho a percibir el salario habitual con el doscientos por ciento (200 %) de recargo.

Artículo 241: a la excepción establecida en la parte del artículo de «que se trate de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo», consideramos conveniente el agregado siguiente: «y que no hubiere mediado conducta dolosa o culpa grave por parte del trabajador calificada de tal manera por sentencia judicial».

Texto que se propone:

Artículo 241. — Cuando la suspensión se origine en denuncia efectuada por el empleador y ésta

fuera désestimada o el trabajador imputado sobreesido provisoria o definitivamente, aquél deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido.

Si la suspensión se originara en denuncia efectuada por terceros o en actuación de oficio de la autoridad competente, y se diese el caso de la privación de la libertad del trabajador, el empleador no estará obligado a pagar la remuneración por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral, salvo que se tratara de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo y que no hubiere mediado conducta dolosa o culpa grave por parte del trabajador calificada de tal manera por sentencia judicial.

Artículo 258: consideramos conveniente la modificación del artículo, estableciendo que la licencia diaria de dos horas coincidirá con las dos primeras horas de la jornada de trabajo o con las dos últimas o finales, a opción del trabajador, ya que de lo contrario podría vulnerarse el objetivo de la ley que es el que el trabajador pueda buscar empleo; si la jornada comienza muy temprano, por ejemplo, tal como está redactado el artículo, las dos primeras horas simplemente se transformarían en un permiso para llegar dos horas tarde y no como deben ser utilizados o sea para buscar empleo.

Texto que se propone:

Artículo 258. — Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 257, durante el plazo del preaviso el trabajador tendrá derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas diarias, sin reducción de su remuneración, las que coincidirán con las dos (2) primeras o últimas horas de la jornada de trabajo, a elección del trabajador.

Artículo 272: entendemos que este artículo en su integridad debe ser suprimido ya que de ninguna manera puede quedar sujeta la indemnización del trabajador a la calificación de la quiebra (procedimiento de por sí engorroso y en el que convergen innumerables y poderosos intereses para que la conducta del quebrado sea calificada de una u otra manera). Por otro lado, ningún otro crédito de la quiebra queda sujeto a la calificación de que se pueda hacer de la misma, lo que crea una irritante desigualdad.

Sostenemos que en caso de quiebra la indemnización debe ser la prevista en el artículo 268 salvo lo establecido en el artículo 268 de acuerdo a lo que por sentencia fije el juez laboral.

Artículo 276: dada la originalidad del tema entendemos que se debe fijar el procedimiento de crisis en la misma ley del contrato de trabajo y no dejarlo librado a su reglamentación posterior como se expresa en el artículo, o de lo contrario que se excluya de este capítulo de la ley del contrato de trabajo y que recién se lo incorpore cuando por la ley especial se regulen dichos procedimientos de crisis.

Artículo 281: en el primer párrafo, substituir „suspenderá, por „interrumpirá,.

En el párrafo segundo, reemplazar „suspensión, por „interrupción,.

Artículo 282: substituir „suspensión, por „interrupción, en todo el texto del artículo.

Artículo 300: creemos que por los intereses y costas derivados de la conducta que prevé el artículo deben responder solidariamente el empleador y el profesional actuante siguiendo el criterio del artículo 22.

Texto que se propone:

Artículo 300. — Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces atendiendo a la conducta procesal asumida.

Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios, en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se expusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho.

De los intereses y costas derivados de la conducta maliciosa y temeraria, responden solidariamente el empleador y el profesional actuante.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO LUMELLO

Artículo 217. — La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete (7) horas, entendiéndose por tal la que se cumple entre las veintiuna (21) y las seis (6) horas del día siguiente.

La jornada de trabajo en tareas declaradas insalubres no podrá exceder de las seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales.

En lo que atañe a los servicios prestados en tareas penosas, mortificantes, riesgosas, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, el Poder Ejecutivo determinará directamente o a solicitud de parte interesada los casos en que debe regir esta jornada limitada, sin perjuicio de los mayores beneficios acordados a los trabajadores por leyes, estatutos especiales y/o convenciones colectivas.

Por la ley, su reglamentación, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo, se contemplará lo pertinente cuando el trabajo se preste por equipos o no admita interrupciones, a condición de que el término medio de duración sobre un determinado período no exceda de ocho (8) horas por día o de cuarenta y ocho (48) semanales, y se haya previsto su limitación diaria, siguiendo el criterio fijado por el artículo 214, segundo párrafo, última parte de esta ley.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO MASOLO

Artículo 22. — En lugar de „demostrado, de mejoramiento de fortuna, agregar: „de notoria solvencia económica,.

En el segundo párrafo de este mismo artículo reemplazar «pluspetición» por «temeridad», y en lugar de «el profesional actuante» poner «quien resulte responsable».

Artículo 54. — En lugar de «por los modos» consignar «por cualquier medio de prueba».

Artículo 64. — Agregar: «En el caso de existir delegados del personal el recibo que corresponde a quien no sabe firmar, puede ser suscrito por uno de esos delegados».

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO SARLI

Artículo 197. — Se considera que el despido responde a la causa mencionada cuando el mismo fuese dispuesto sin invocación de causa por el empleador, o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produzca dentro del plazo de seis (6) meses antes o doce (12) meses después de celebrado el matrimonio, y sin perjuicio del mayor lapso que surgiere de la prueba aportada.

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO HUMBERTO F. SUAREZ

Artículo 22. — 1º Substituir el párrafo que dice: «... salvo el caso demostrado de mejoramiento de fortuna», por el siguiente: «Las costas que pudieran corresponder soportar al trabajador serán abonadas por la organización sindical a que pertenezca el mismo».

Artículo 104. — 2º Suprimir el párrafo segundo que dice: «Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 271 de esta ley».

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO ZAVALA RODRIGUEZ

Artículo 2º — Suprimir el segundo párrafo.

Artículo 22. — Agregar como tercer párrafo: «Por aplicación de este principio serán siempre gratuitos los despachos telegráficos que debiere remitir el trabajador al empleador con motivo o por ocasión del trabajo».

Artículo 23. — Cambiarlo por: «Se considera «empleador» a la persona física o jurídica o conjunto de ellas, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador».

Artículo 76. — Suprimirlo. Incluir artículos 77 y 78 del Proyecto C.G.T.

Artículo 77. — Agregar artículos 79 y 80 C.G.T.

Artículo 79. — Suprimirlo.

Artículo 92. — Substituirlo por artículo 93 C.G.T.

Artículo 110. — Cambiar el tercer párrafo por el siguiente: «El salario de cada uno de los integrantes del equipo o grupo debe ajustarse a la convención colectiva que rige la actividad. Cuando un trabajador dejase el grupo...».

Artículo 113. — Se suprime: «o por rendimiento del trabajo y, en este último caso, por unidad de

Artículo 121. — Suprimirlo.

Artículo 126. — Agregar luego de «años» lo siguiente: «o menores de 16 a 18 que trabajen 8 horas diarias o 44 semanales».

Artículo 146. — Suprimir el inciso g).

Artículo 164. — Agregar: «los plazos establecidos se extenderán en un 30 % cuando el trabajador se haya desempeñado en tareas declaradas insalubres, penosas o peligrosas».

Artículo 169. — Suprimir el inciso c).

Artículo 180. — Agregar: «quedan equiparados a los feriados nacionales los declarados días del trabajador en los distintos gremios, instituidos por convenciones colectivas de trabajo».

Artículo 184. — Suprimir desde «si se tratare de personal a destajo...», hasta «número de días trabajado».

Artículo 195. — Cambiar «media hora» por «una hora».

Artículo 199. — Substituirlo por el artículo 203 C.G.T., con el agregado final.

Artículo 200. — Suprimir inciso b).

Suprimir segundo párrafo.

Artículo 201. — Cambiar «un año» por «seis meses».

Artículo 209. — Agregar «o cuando logre su emancipación».

Artículo 210. — Reemplazar «importe que le será deducido de aquélla» por «importe que se integrará con el aporte del 5 % por parte del empleador o el 5 % por parte del menor, deduciéndose de su remuneración».

Artículo 213. — Substituirlo por «la jornada de traba o será de 8 horas diarias o 44 semanales».

Artículo 216. — Suprimirlo.

Artículo 220. — Suprimir «o por exigencias excepcionales de la empresa».

Artículo 226. — Suprimir «será considerado como acto de indisciplina pero».

Artículo 231. — Substituir en el último párrafo «será considerado» por «no será considerado».

Artículo 256. — Agregar el último párrafo del artículo 256 de la C.G.T.

Artículo 261. — Suprimir el segundo párrafo (si se admite la modificación del artículo 17).

Artículo 264. — Suplantar «por escrito» por «por telegrama colacionado».

Artículo 265. — Agregar al primer párrafo: «los delitos invocados por el empresario deben ser de aquellos que impidan la normal continuación de la relación laboral o sean delitos relacionados con el trabajo».

Artículo 276. — Suprimirlo.

Artículo 278. — Cambiar «plazo especial» por «plazo mayor».

Artículo 280. — Cambiar «dos años» por «cuatro años».

Artículo 282. — Cambiar «se suspenderá» por «se interrumpirá».

Artículo 290. — Agregar artículo 306, C.G.T.

Artículo 292. — Incluir «indemnización por enfermedad profesional».

Artículo 297. — Agregar «enfermedad profesional».